

TESI
5300
U.I.

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y TURISMO
DOCTORADO EN HISTORIA

Conduciendo al orden y felicidad pública:
los alcaldes de barrio en la ciudad de Buenos Aires (1772-1821)



-Doctoranda: Lic. Sandra L. Díaz de Zappia.

-Padrino de tesis: Dr. Fernando Humberto Mayorga García.

-Fecha de presentación: 14/03/2016

Bogotá, 16 feb. 2016

SANDRA L. DÍAZ

“esperando que, estimulados de sus obligaciones y de un celo patricio, desempeñen esta confianza con la mayor aplicación que corresponda a conseguir una obra no sólo importante para la felicidad de la ciudad, sino necesaria a su seguridad y servicio de Dios”.

(Bando del gobernador y capitán general interino de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan José de Vértiz, 21 de mayo de 1772, cláusula introductoria)

“La alcaldía de barrio si bien se considera no es tan despreciable y de tan poca entidad como puede parecer a algunos. Los encargados de desempeñarla son siempre unos resortes necesarios porque se mueve la voluntad del pueblo y del gobierno en las urgencias más precisas y conducentes al orden y felicidad pública”

(“Año de 1816. Expediente promovido por don Agustín Guiraldes sobre que se le exonere del cargo de alcalde del cuartel número 11”, en AGN, IX, 196-9, f. 37v.).



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Índice.

-Introducción.....	6.
-Cap. I: Ámbito geográfico de acción de los alcaldes de barrio.....	27.
I. 1. Divisiones de la traza urbana.....	27.
I. 2. Indicación de manzanas y calles.....	40.
-Cap. II: Requisitos e idoneidad.....	59.
II. 1. Periodo indiano: cuestiones normadas.....	59.
II. 1. 1. Vecindad.....	60.
II. 1. 2. Nacionalidad.....	61.
II. 1. 3. Honradez y costumbres personales.....	63.
II. 2. Periodo indiano: cuestiones no normadas.....	68.
II. 2. 1. Valor de la experiencia.....	68.
II. 2. 2. Acierto en la elección de los candidatos.....	69.
II. 2. 3. Impedimentos.....	71.
II. 2. 4. La mujer.....	73.
II. 2. 5. Desempeño de oficios mecánicos y actividades comerciales... ..	76.
II. 3. Periodo independiente: cuestiones normadas.....	83.
II. 3. 1. Cualidades personales.....	83.
II. 3. 2. Lealtad política.....	85.
II. 4. Periodo independiente: cuestiones no normadas.....	91.
II. 4. 1. Desempeño de oficios mecánicos y actividades comerciales... ..	91.
-Cap. III: Designación y duración en el cargo.....	96.
III. 1. Designación.....	96.
III. 1. 1. Periodo indiano.....	96.
III. 1. 2. Periodo independiente.....	111.
III. 2. Juramento.....	119.
III. 3. Duración en la función.....	121.
III. 3. 1. Periodo indiano.....	121.
III. 3. 2. Periodo independiente.....	123.
-Cap. IV: Título y atributos. Pertrechos. Remuneración.....	127.
IV. 1. Título y atributos.....	128.
IV. 2. Pertrechos.....	135.
IV. 3. La cuestión de la remuneración.....	141.
-Cap. V: Subalternos y ayudantes.....	147.
V. 1. Subalternos.....	149.
V. 2. Ayudantes.....	162.
-Cap. VI: Desempeño y funciones.....	171.
VI. 1. Organización de las tareas.....	171.
VI. 1. 1. Dependencia.....	171.
VI. 1. 2. Rondas.....	174.
VI. 1. 3. Actitud y comportamiento.....	179.
VI. 2. Competencias.....	182.
VI. 2. 1. Disposiciones a ser cumplidas por la población.....	183.
VI. 2. 1. a. Control de los habitantes.....	183.
VI. 2. 1. b. La vagancia.....	184.
VI. 2. 1. c. Establecimientos públicos.....	187.
VI. 2. 1. d. Juegos y bailes.....	188.
VI. 2. 1. e. Moral pública.....	191.

VI. 2. 1. f. Seguridad pública.....	193.
VI. 2. 1. g. Ordenamiento edilicio.....	196.
VI. 2. 1. h. Tránsito y ordenamiento de la vía pública.....	197.
VI. 2. 1. i. Salubridad urbana.....	200.
VI. 2. 1. j. Otras.....	201.
VI. 2. 2. Disposiciones a cumplir por los alcaldes de barrio.....	201.
VI. 2. 2. a. Penas.....	203.
-Cap. VII: Cese.....	207.
VII. 1. Remoción.....	207.
VII. 2. Fallecimiento.....	212.
VII. 3. Pedido del agente.....	213.
VII. 3. 1. Pedidos de cese temporario en el cargo.....	215.
VII. 3. 2. Pedidos de cese definitivo en el cargo.....	219.
VII. 3. 2. a. Razones de privilegio.....	226.
VII. 3. 2. b. Razones de capacidad.....	237.
Enfermedad.....	237.
Defectos fisicos.....	242.
Edad.....	243.
Circunstancias económicas.....	246.
Cuestiones técnicas.....	252.
VII. 3. 2. c. Otros.....	258.
Ausencia del cuartel de designación.....	258.
Reiterado servicio.....	263.
Servicios excepcionales.....	267.
Conflictos con el alcalde de la Hermandad.....	267.
VII. 3. 2. d. Sin identificar.....	269.
-Cap. VIII: Actuación y eficacia.....	273.
VIII. 1. Organización de las tareas.....	273.
VIII. 2. Competencias.....	278.
VIII. 2. 1. Disposiciones a ser cumplidas por la población.....	278.
VIII. 2. 1. a. Control de los habitantes.....	279.
VIII. 2. 1. b. La vagancia.....	280.
VIII. 2. 1. c. Establecimientos públicos.....	281.
VIII. 2. 1. d. Juegos y bailes.....	283.
VIII. 2. 1. e. Moral pública.....	285.
VIII. 2. 1. f. Seguridad pública.....	286.
VIII. 2. 1. g. Ordenamiento edilicio.....	289.
VIII. 2. 1. h. Tránsito y ordenamiento de la vía pública.....	291.
VIII. 2. 1. i. Salubridad urbana.....	292.
VIII. 2. 1. j. Otras.....	296.
VIII. 2. 2. Disposiciones a cumplir por los alcaldes de barrio.....	296.
VIII. 2. 2. a. Penas.....	299.
-Conclusiones generales.....	302.
Apéndices	
A. Nómina de los alcaldes de barrio de la ciudad de Buenos Aires (1772-1810).....	332.
Nota preliminar.....	332.
Apéndice.....	335.
B. Noticia de los pedidos de cese del oficio (1772-1821).....	347.
Nota preliminar.....	347.

Apéndice.....	348.
C. Perfiles biográficos de los alcaldes de barrio de la ciudad de Buenos Aires (1772-1821).....	355.
Nota preliminar.....	355.
Apéndice.....	357.
D. Marco jurídico regulatorio de los alcaldes de barrio (1772-1821).....	552.
Nota preliminar.....	552.
Apéndice.....	559.
Índice onomástico.....	665.
Índice temático.....	693.
Índice toponímico.....	705.
Repertorio heurístico.....	709.



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Introducción.

Subsiste todavía el infundado preconceito de que el positivismo historiográfico argentino, con su afán descriptivo de las grandes instituciones del pasado y su énfasis en el rescate y organización de fuentes —coherentemente volcadas hacia aquel interés temático—, dejó a las generaciones posteriores por lo menos un panorama completo de la totalidad de las instituciones que existieron en el actual territorio argentino desde la época de las fundaciones. En muchos casos, la situación es bastante diferente, lo que se debe a distintas razones. Por una parte, aquella preferencia temática por las “grandes instituciones” del pasado condujo al desinterés por instituciones consideradas “menores”; por otra parte, los historiadores identificados en aquella corriente historiográfica se concentraron en el uso de un tipo de fuente más bien dogmática, concentrando su atención exclusivamente en la normativa jurídica que regulaba el funcionamiento de esas instituciones, pretendiendo que esa documentación explicaba *per se* cuanto era necesario saber sobre su funcionamiento, y haciendo en general caso omiso al uso de fuentes no jurídicas. Además, el empleo frecuentemente exclusivo de la regulación como fuente solía reducir el reflejo historiográfico a su glosa o reseña; en este caso, el preconceito negativo contra las instituciones “menores” se agudizaba y la indiferencia para con su estudio quedaba aparentemente justificada. Como resultado de ello, cuando actualmente se pretende hacer un estudio de alguna de aquellas instituciones “menores” es necesario partir prácticamente desde cero, es decir, desde el archivo.

Aunque constituyó una de las piezas fundamentales para intentar disciplinar la vida cotidiana en varias ciudades del virreinato del Río de la Plata, la institución de los alcaldes de barrio en Buenos Aires, desde su creación en 1772 hasta su transformación en un cuerpo profesional de policía en 1821, no llamó la atención de los historiadores que, en general, durante mucho tiempo minimizaron su importancia dando un carácter superficial a su estudio. Además, esta postura supone implícitamente que el positivismo incluyó en su paradigma de organización de fuentes aquellas relativas a la alcaldía de barrio, cuando en realidad las desdeñó porque se referían a instituciones consideradas de escasa importancia: si el alcalde de barrio no era digno de estudiarse, tampoco era relevante localizar e organizar la normativa que regulaba sus múltiples funciones.

Así, —y con algunas excepciones como las de Ricardo Levene, para quien estos agentes fueron, ya en la época independiente, “eficaces instrumentos políticos para asegurar una elección o sostener el gobierno”, o las de Horst Pietschmann e Inge

Langeberg, quienes afirman que la instauración de estos alcaldes fue “uno de los puntos clave de reforma urbana del reformismo dieciochesco”— fueron someramente tratados en los trabajos de Ricardo Zorraquín Becú, José María Sáenz Valiente, Francisco L. Romay, Clarence Haring, Sigfrido Radaelli y Constantino Bayle¹. El trabajo de José María Díaz Couselo² publicado en 2002, merece una mención especial, en tanto esclareció la fecha de su instalación definitiva en Buenos Aires, y al hacerlo, señaló la existencia de importantes aspectos de la institución que merecían ser estudiados en profundidad.

Si bien persiste una corriente historiográfica propensa a usar solamente fuentes normativas para estudiar la historia de las instituciones, a partir de la *École des Annales* se ha tendido a seguir una evolución que considera el estudio del “derecho en sociedad”, lo cual lleva a abordar la Historia del Derecho como íntimamente ligada a la historia de los diversos contextos —cultura, tradiciones literarias, estructuras sociales, convicciones religiosas— con los cuales (y en los cuales) el derecho funciona³. En esa línea, no se concibe más a este campo del conocimiento del pasado como una Historia del Derecho “sabio y oficial”; así, la Historia del Derecho práctico o del derecho de las comunidades,

¹ RICARDO LEVENE, “La asonada del 5 y 6 de abril de 1811. Su trascendencia histórica”, en: *Centro de Estudios Históricos*, sección II, t. XXIV, n. 3, La Plata, Universidad Nacional de la Plata, 1941, p. 309; HORST PIETSCHMANN; INGE LANGE BERG, “La nueva fundación de la ciudad de Guatemala en el último tercio del siglo XVIII”, en: *VI Congreso Internacional de Historia de América (Buenos Aires, 13-18 octubre 1980)*, t. III, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1982, p. 100; RICARDO ZORRAQUÍN BECÚ, “Los cabildos argentinos”, en: *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*, 3a. época, a. XI, n. 47, Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, enero-marzo de 1956, pp. 95-156. El autor volvió sobre la cuestión en trabajos más generales tales como: RICARDO ZORRAQUÍN BECÚ, *La organización judicial argentina en el periodo hispánico*, Buenos Aires, Librería del Plata S.R.L., 1952, pp. 79-80; RICARDO ZORRAQUÍN BECÚ, *La organización política argentina en el periodo hispánico*, Buenos Aires, Perrot, 1981, p. 343; RICARDO ZORRAQUÍN BECÚ, *Historia del derecho argentino*, Buenos Aires, Perrot, t. I, 1996, p. 158. V. también JOSÉ MARÍA SAÉNZ VALIENTE, *Bajo la campana del cabildo. Organización y funcionamiento del cabildo de Buenos Aires después de la revolución de Mayo (1810-1821)*, Buenos Aires, Kraft, 1952; FRANCISCO L. ROMAY, *Antiguos servicios policiales*, Buenos Aires, Editorial Policial, 1939; FRANCISCO L. ROMAY, “La policía de Buenos Aires antes y después de la Revolución de Mayo”, en: *Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas*, Rosario, Instituto de Investigaciones Históricas, 1960, pp. 409-422; FRANCISCO L. ROMAY, *Historia de la Policía Federal Argentina*, t. I, Buenos Aires, Biblioteca Policial, 1963; CLARENCE H. HARING, *El Imperio Hispánico en América*, Buenos Aires, Solar/Hachette, 1967, p. 169; SIGFRIDO RADAELLI, *Los virreyes del Plata*, Buenos Aires, Perrot, 1959, pp. 26 y 43; CONSTANTINO BAYLE, *Los cabildos seculares en la América española*, Madrid, Sapiencia, 1952, p. 173.

² JOSÉ MARÍA DÍAZ COUSELO, “Los alcaldes de barrio de la ciudad de Buenos Aires. Periodo indiano”, en: FELICIANO BARRIOS (COORD.), *Derecho y administración pública en las Indias hispánicas. Actas del XII Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano (Toledo, 19 a 21 de octubre de 1998)*, vol. 1, Cuenca, Ed. de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002, pp. 429-459.

³ ANTÓNIO M. HESPANHA, *Panorama histórico da cultura jurídica europeia*, S.I., Publicações Europa-América Lda., 1997, p. 23; F. A. DE MIRANDA ROSA, *Sociologia do Direito. O fenómeno jurídico como fato social*, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 2009, p. 44.

designada como *droit des rustiques*, constituye también un dominio de la historia jurídica. De esta manera, y si bien el derecho procura disciplinar a la sociedad y a las instituciones, también una y otras modifican al primero, en una suerte de *feed-back* continuo⁴. Ergo, el cumplimiento de las prescripciones de la *École des Annales* presupone el conocimiento de los enunciados legales, las características de las instituciones más altas del Estado —a las cuales las instituciones que podrían revelar la verdadera capilaridad del orden jurídico se encontraron subordinadas— y de la cronología política sin la cual sería imposible contextualizar las modestas pero reveladoras acciones de agentes como los alcaldes de barrio.

La historiografía de los *Annales* completa la labor de la historiografía positivista y esta última hace posible la primera. En el presente caso, se trata de establecer una suerte de comunión fructífera entre una investigación de tipo sociológica y una de tipo jurídica, entendiendo a la primera como aquella que trabaja no un derecho definido jurídicamente sino redefinido por las Ciencias Sociales, a través de los presupuestos teóricos y epistemológicos de éstas; por su parte, la investigación jurídica tendría por objeto justamente el derecho definido jurídicamente, en otras palabras, el propio ordenamiento legal, abordado mediante métodos y técnicas propias de la llamada dogmática jurídica. En pocas palabras, una investigación de tipo sociológica miraría el derecho “desde afuera” mientras que una de tipo jurídica lo abordaría “desde dentro”⁵. Se trata en definitiva —en palabras de Fernando Humberto Mayorga García— de estudiar la vida de un organismo, entendiendo ésta como “la manera como las personas que forman parte de él cumplen las normas que regulan su funcionamiento. El hombre y su contacto con la norma forman el derecho vivo, el derecho vigente, que es el que nos interesa”⁶.

⁴ ANTÓNIO MANUEL HESPAÑA, “Une «nouvelle histoire» du droit?”, en: VV.AA., *Storia sociales e dimensione giuridica. Atti dell' incontro di studio. Firenze, 26-27 Aprile 1985*, Milano, Giuffrè Editore, 1986, p. 327.

⁵ LUCIANO OLIVEIRA, “Não fale do Código de Hamurabi: a pesquisa sócio-jurídica na pós-graduação em Direito”, en: *Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito*, v. 13, Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 2003, p. 300. En este sentido, durante los últimos años se ha dado un gran impulso a establecer una asociación entre el área de la historia y la del derecho (GIZLENE NEDER, “Apresentação”, en: GIZLENE NEDER (ORG.), *História & Direito. Jogos de encontros e transdisciplinaridade*, Rio de Janeiro, Revan, 2007, p. 9).

⁶ FERNANDO HUMBERTO MAYORGA GARCÍA, *Real Audiencia de Santafé en los siglos XVI-XVII. Historia, visitas, quejas y castigos del primer tribunal con sede en la ciudad*, Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., 2013, p. 19. En el mismo sentido, Jaime Eyzaguirre afirmó que “el derecho no es sólo una teoría ni una ley positiva, sino una vida” (JAIME EYZAGUIRRE, *Historia del Derecho*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria S. A., 2003, p. 10).

Asimismo, existe actualmente una mudanza en tanto se ha revalorizado otro tipo de regulación desdeñada por los positivistas. Así, entre 2002 y 2004, bajo la dirección de Víctor Tau Anzoátegui, fue publicada una recopilación representativa —mas no exhaustiva— de una serie de bandos de buen gobierno rioplatenses de la época hispánica, conjuntos normativos que pueden ser situados en el nivel más popular del ordenamiento jurídico⁷. No obstante, esta recopilación no incluyó —por su carácter— el elenco completo de las instrucciones dictadas específicamente en el mismo periodo para los alcaldes de barrio, y, dado que su límite temporal era 1810, no tuvo en cuenta ningún ordenamiento dictado durante la primera parte de la época independiente.

Sobre la base de las premisas enumeradas, se propone estudiar omnicomprendivamente la historia de estos alcaldes de barrio, los cuales —luego de una serie de tentativas fallidas en 1734, 1748, 1754 y 1766—, fueron instalados —bajo la denominación de comisarios— por el entonces gobernador Juan José de Vértiz y Salcedo en la ciudad de Buenos Aires por bando de buen gobierno de 21 de mayo de 1772⁸, con el objetivo de garantizar el “buen orden” y la “tranquilidad” —según la terminología de la época— de la sociedad porteña de finales del siglo XVIII y principios del XIX, siendo los encargados de la aplicación de acciones concretas destinadas a disciplinar y ordenar el cuerpo social.

La medida se inserta en el contexto de la racionalidad administrativa característica del Siglo de las Luces. La acción política, reformadora y progresista de los Borbones se propuso transformar la administración española de acuerdo con una orientación política unificadora y centralizadora. Para las instituciones y el gobierno de sus dominios, esta aspiración se tradujo en una serie de modificaciones tendientes a racionalizar el aparato estatal y hacer más eficaz la intervención del Estado a través —entre otras cosas— de la instalación de una burocracia obediente, dispuesta a poner en práctica lo que se le mandase.

Asimismo, la aparición de los alcaldes de barrio en Buenos Aires reconoce un antecedente peninsular inmediato en el llamado motín contra Esquilache, uno de los ministros llevados de Nápoles a Madrid por Carlos III. Reformista e impetuoso, Esquilache se propuso transformar rápidamente a España mediante la implementación

⁷ VÍCTOR TAU ANZOÁTEGUI (ED.), *Los bandos de buen gobierno del Río de la Plata, Tucumán y Cuyo (época hispánica)*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2004, pp. 22-23.

⁸ V. Apéndice D, texto I.

de medidas que en muchos casos chocaban con costumbres y tradiciones muy arraigadas en la población. De esta manera, después de una serie de medidas económicas extremadamente impopulares, ordenó mudar la indumentaria de los españoles, substituyendo el capote largo y el sombrero de ala ancha por capote corto y sombrero de tres picos como medio para evitar el ocultamiento del rostro durante la noche, lo que favorecía la comisión de toda clase de delitos⁹. La orden provocó un incidente en Madrid que degeneró en un verdadero conflicto político y puso de manifiesto la existencia de una inmensa distancia entre el discurso de la razón y la realidad de una sociedad ajena a ella, ya que no existían receptores en el tejido social capaces de apoyar desde dentro una racionalización de la sociedad¹⁰. El hecho terminó con la destitución del polémico ministro y la adopción de una serie de medidas entre las que se contaba — por real cédula de 6 de octubre de 1768— la división de la ciudad de Madrid en ocho cuarteles y el nombramiento de un “alcalde de Casa y Corte” y ocho alcaldes de barrio para mantener la tranquilidad pública y castigar los delitos que se cometiesen en su jurisdicción¹¹. Posteriormente, la medida se reprodujo en otras ciudades ibéricas y de

⁹ Sobre el gusto español y también porteño por el primer atuendo mencionado, v. N. R. PORRO; J. E. ASTIZ; M. M. ROSPIDÉ, *Aspectos de la vida cotidiana en el Buenos Aires virreinal*, t. II, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1982, p. 345.

¹⁰ JOSÉ LUIS COMELLAS, *Historia de España moderna y contemporánea*, Madrid, Ediciones Rialp, 1999, pp. 202-203; PABLO SÁNCHEZ LEÓN; LEOPOLDO MOSCOSO SARABIA, “La noción y la práctica de policía en la Ilustración española: la Superintendencia, sus funciones y límites en el reinado de Carlos III (1782-1792)”, en: *Actas del Congreso Internacional sobre «Carlos III y la Ilustración»*, vol. I [El Rey la monarquía], Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, pp. 497-498; PABLO SÁNCHEZ LEÓN, “Ordenar la civilización: semántica del concepto de Policía en los orígenes de la Ilustración Española”, en: *Política y Sociedad*, vol. 42, n. 3, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, 2005, pp. 152-153. Disponible en: <<http://revistas.ucm.es/cps/11308001/articulos/POSO0505330139A.PDF>>. Acceso en: ene. 2011.

¹¹ LORENZO ARRAZOLA, *Enciclopedia española de derecho y administración, o Nuevo Teatro Universal de la Legislación de España e Indias*, t. II, Madrid, Imprenta de los señores Andrés y Díaz, 1849, pp. 460-462; FRANCISCO AGUILAR PIÑAL, *Los alcaldes de barrio*, Madrid, Ayuntamiento de Madrid-Instituto de Estudios Madrileños del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1978; MARTÍN TURRADO VIDAL, *La policía en la historia contemporánea de España (1766-1986)*, Madrid, Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia e Interior, 1995, pp. 25-41. Sin pretensión de exhaustividad, entre los trabajos dedicados a estos agentes en el ámbito peninsular, se destacan, además, los de Pablo Sánchez León (PABLO SÁNCHEZ LEÓN, “La integración política en el programa reformador ilustrado y sus límites: la experiencia de los alcaldes de barrio en Madrid, 1766-1808”, en: *Jornadas sobre Formas de Organização e Exercício dos Poderes na Europa do Sul, Séculos XIII-XVIII*, vol. 2, Lisboa, História & Crítica, 1988, pp. 331-353) y Francisco Tuero Bertrand, centrado este último en los alcaldes de barrio de la ciudad de Oviedo (FRANCISCO TUERO BERTRAND, “Alcaldes de cuartel, alcaldes de barrio y autos de buen gobierno en el Oviedo del s. XVIII”, en: *Boletín del Instituto de Estudios Asturianos*, a. XXVII, n. 80, Oviedo, Consejería de Educación y Cultura del Principado-Instituto de Estudios Asturianos (C.S.I.C.), sept.-dic. 1973, pp. 737-760).

sus dominios americanos, creándose alcaldías de barrio en México, Guatemala¹², La Habana¹³, Santiago de Chile¹⁴, Lima¹⁵ y Santafé de Bogotá¹⁶ entre otras y, en el ámbito del futuro virreinato del Río de la Plata, Asunción¹⁷, Buenos Aires y Salta¹⁸.

El hecho de aparecer más o menos simultáneamente en diversos puntos del imperio español llama la atención sobre la importancia que se asignó a esta institución en el momento de su emergencia, al mismo tiempo que remite a la cuestión de su posible pervivencia en la época revolucionaria primero y en la independiente después; paralelamente, el tema obliga —en el caso de que su presencia se registre como parte de la burocracia patria— a evaluar las posibles transformaciones de la institución en medio de las vertiginosas mudanzas políticas producidas en el Río de la Plata durante las primeras décadas del siglo XIX.

Asimismo, se impone una reflexión sobre la regulación jurídica de la institución. Es posible rastrear la existencia de una apelación a la citada real cédula de 6 de octubre de 1768 que estableció las alcaldías de barrio madrileñas en la normativa que reguló las porteñas. Así, la invocación en este sentido a las pautas peninsulares está presente en el bando de 21 de mayo de 1772 por el que el gobernador y capitán general interino de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan José de Vértiz resolvió su creación en

¹² JAVIER GUILLAMÓN ÁLVAREZ, "América y las reformas peninsulares del régimen local en la segunda mitad del siglo XVIII", en: VV.AA., *Hispanoamérica hacia 1776. Actas de la Mesa Redonda sobre la América Hispana en 1776*, Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo (C.S.I.C.)-Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1980, pp. 49-52.

¹³ ARRAZOLA, t. II, *op. cit.*, p. 462.

¹⁴ LUIS MONTANER ARTEAGA, *Derecho de Policía. Los alcaldes de barrio (1778-1833)*, Santiago de Chile, s. d., 1984.

¹⁵ ALFREDO MORENO CEBRIAN, "Cuarteles, barrios y calles de Lima a fines del siglo XVIII", en *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*, vol. 18, Köln, Böhlau, 1981, pp. 97-161.

¹⁶ Al respecto, Fernando Mayorga García presentó —con el título de "Las Reformas Borbónicas de 1774 en la ciudad de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada"— en el XVII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano celebrado en la ciudad de Puebla (México) en setiembre de 2010-, un trabajo sobre la creación de esta institución en SantaFé de Bogotá, en el marco de las llamadas reformas borbónicas.

¹⁷ EDBERTO OSCAR ACEVEDO, *La intendencia del Paraguay en el Virreinato del Río de la Plata*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, 107-110; HERIB CABALLERO CAMPOS, *Los Bandos de Buen Gobierno de la Provincia del Paraguay 1778-1811*, Asunción, FONDEC-Arandurá Editorial, 2007, pp. 38-39; EDBERTO OSCAR ACEVEDO, "La causa de policía (o gobierno)", en: JOSÉ M. MARILUZ URQUIJO (DIR.), *Estudios sobre la Real Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1995, p. 52.

¹⁸ JOSÉ M. MARILUZ URQUIJO, "La creación de los alcaldes de barrio de Salta", en *Boletín del Instituto de San Felipe y Santiago*, Salta, Instituto de San Felipe y Santiago, 1951, pp. 1-16.

Buenos Aires “a imitación de la capital de este reino y otras”; en el bando del gobernador intendente de la provincia de Buenos Aires, don Francisco de Paula Sanz, de 31 de mayo de 1785, y en el auto acordado dado por el virrey Nicolás de Arredondo y el regente y oidores de la Real Audiencia Pretorial en 11 de febrero de 1790¹⁹. La existencia de esta “orientación peninsular” en la normativa relativa a las alcaldías de barrio porteñas obliga a evaluar cuál fue la relación entre esa regulación específica y las normas locales y la costumbre, esto es, considerar la cuestión en el ámbito del llamado derecho indiano²⁰ local. La reflexión sobre esta noción —como señaló Víctor Tau Anzoátegui— no es nueva. Desde Ricardo Levene, para quien la legislación emanada de órganos o instituciones de gobierno locales constituía una fuente viva del derecho indiano inspirada “en las necesidades prácticas y más evidentes de las poblaciones a cuyo inmediato cargo estaba el gobierno y la justicia”²¹, esta noción registró contribuciones valiosas a lo largo de todo el siglo XX de parte de Rafael Altamira, Alfonso García-Gallo, Ismael Sánchez Bella, Ricardo Zorraquín Becú y, últimamente, Eduardo Martiré y el ya citado Tau Anzoátegui. Interesa especialmente señalar la apreciación de este último, para quien “el derecho indiano, lejos de constituir un orden

¹⁹ Bando del gobernador y capitán general interino de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan José de Vértiz. Buenos Aires, 21 de mayo de 1772, cláusula introductoria (V. Apéndice D, texto I); Bando del gobernador intendente de la provincia de Buenos Aires, don Francisco de Paula Sanz. Buenos Aires, 31 de mayo de 1785, art. 1º (V. Apéndice D, texto VII); Auto acordado dado por el virrey Nicolás de Arredondo y el regente y oidores de la Real Audiencia Pretorial, Benito de la Mata Linares, Josef Caveza Enriquez, Sebastián de Velasco y Lorenzo Blanco y Cicerón, Buenos Aires, 11 de febrero de 1790, art. 6º (V. Apéndice D, texto IX).

²⁰ Al respecto se sigue a Tau Anzoátegui y a Martiré, quienes afirman que el derecho castellano no pudo ser trasplantado integralmente al Nuevo Mundo porque las características geográficas del territorio y las particularidades humanas de las empresas obligaron, desde el momento inicial de la conquista, a dictar normas especiales, que se conocen bajo la común denominación de *derecho indiano*, y que comprende todas las disposiciones emanadas de las autoridades y los órganos de gobierno, tanto los residentes en España como los que se encontraban en América, incluyendo no sólo a los que tenían un alcance general, sino también a los particulares de cada región. Las normas contenidas en el derecho indiano contemplaban materias —tales como el régimen de los descubrimientos o el sistema de flotas, entre otras— no previstas en la legislación castellana en la forma que precisaban los nuevos territorios; por otro lado, otras cuestiones legislativas castellanas —como por ejemplo las normas sobre la organización de la familia y el sistema sucesorio— no requerían, salvo casos especiales, modificaciones sustanciales para su aplicación en las Indias. En consecuencia, al no constituir el derecho indiano propiamente dicho un ordenamiento jurídico completo, en los casos en los que no se encontrase allí la norma buscada, debía ser buscada en el derecho castellano, que era así supletorio o subsidiario de aquél. Últimamente, los historiadores se inclinan a usar la denominación de derecho indiano en sentido amplio para designar todo el ordenamiento jurídico vigente en las Indias (VÍCTOR TAU ANZOÁTEGUI; EDUARDO MARTIRÉ, *Manual de Historia de las Instituciones argentinas*, Buenos Aires, Librería Editorial Histórica, 2003, pp. 99-100).

²¹ RICARDO LEVENE, *Introducción a la Historia del Derecho Indiano*, Buenos Aires, 1924 *Apud* VÍCTOR TAU ANZOÁTEGUI, *Nuevos horizontes en el estudio histórico del Derecho Indiano*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1997, p. 88.

legal emanado de un único poder central, se ofrece como una creación local, caracterizada por su casuismo, variedad y alta presencia, junto a las leyes dadas en el lugar, de la costumbre y de prácticas socio-jurídicas”²². Dentro de esta perspectiva, la cuestión de la dinámica del agente indiano gana especial significación. Sobre la riqueza de este campo de investigación, García Gallo afirmó que

Existen [...] en todas las épocas, personas que intervienen en las funciones de gobierno, sin participar en nombre propio o de otro en el ejercicio del poder, como notarios, escribanos, oficiales o empleados de las distintas autoridades. Su número crece a medida que la administración se hace escrita y se burocratiza. Cuál es el carácter de estos oficios y cuál la condición de quienes los desempeñan no es posible exponerlo hoy en día, por falta de estudios sobre ello. [...] He aquí un amplio campo abierto a la investigación, si queremos saber cómo se organiza y funciona la administración en tiempos pasados, en vez de conformarnos con enumerar o describir una serie de funcionarios o juntas cuya verdadera posición y actuación en el gobierno desconocemos²³.

En este marco, llamaron nuestra atención una serie de cuestiones fundamentales: una vez establecidos estos alcaldes de barrio en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál fue la jurisdicción específica en la que actuaron? ¿Obligó ello a realizar algún tipo de ordenamiento del espacio urbano para precisar el ámbito en el que actuarían? ¿Debían contar los candidatos con requisitos específicos para ser nombrados? ¿Cuáles eran los criterios y mecanismos empleados para su designación? ¿Por cuánto tiempo permanecían en el cargo? ¿Les fue conferido algún tipo de insignia o uniforme para facilitar su identificación por parte de los habitantes de la ciudad? ¿Recibían algún tipo de remuneración por su trabajo o el empleo se consideraba una obligación pública?

²² VÍCTOR TAU ANZOÁTEGUI, “Una visión historiográfica del derecho indiano provincial y local”, en: JOSÉ DE LA PUENTE BRUNKE; JORGE ARMANDO GUEVARA GIL (EDS.), *Derecho, instituciones y procesos históricos. XIV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, t. II, Lima, Instituto Riva-Agüero-Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008, p. 331. V. también EDUARDO MARTIRÉ, “El derecho Indiano, un derecho propio particular”, en: *Revista de Historia del Derecho*, n. 29, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2001, pp. 331-361; RICARDO ZORRAQUÍN BECÚ, “Nuevas consideraciones sobre el Derecho indiano”, en: *Revista de Historia del Derecho*, n. 25, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1997, pp. 501-524; ISMAEL SÁNCHEZ BELLA, “Derecho indiano criollo”, en: *Memoria del X Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, t. II, México, Escuela Libre de Derecho-Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, pp. 1481-1511. Recientemente, Tau Anzoátegui ha publicado una reflexión metodológica sobre la cuestión (VÍCTOR TAU ANZOÁTEGUI, “La configuración del derecho indiano provincial y local. Cuestiones metodológicas y desarrollo de sus fases históricas”, en: VÍCTOR TAU ANZOÁTEGUI; ALEJANDRO AGÜERO (COORDS.), *El derecho local en la periferia de la monarquía hispana. Río de la Plata, Tucumán y Cuyo siglos XVI-XVIII*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2013, pp. 13-90).

²³ ALFONSO GARCÍA GALLO, “Cuestiones y problemas de la historia de la administración española”, en: *Actas del I Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1976, p. 51.

¿Contaron con ayudantes y, en caso afirmativo, cuál fue la dinámica para establecer la cantidad, designación y actuación de los mismos? ¿Cómo se organizaban para desempeñar sus tareas? La cuestión del cese en el ejercicio de un cargo público fue estudiada para el caso de otros agentes administrativos de la América española, pero nunca fue considerada para el caso de los alcaldes de barrio. Al respecto, ¿existía algún tipo de mecanismo por el cual estos alcaldes podían solicitar su separación del empleo y, en caso de ser así, cuáles fueron las razones esgrimidas para justificar sus pedidos? ¿Es posible establecer con cierta precisión el grado de eficiencia de la institución? ¿Cuál fue el relacionamiento de estos alcaldes con el resto de las autoridades residentes en la ciudad? ¿Sería factible elaborar algún registro de los individuos que actuaron en el período estudiado como alcaldes de barrio, que permita captar el ritmo propio de la institución, a fin de conocer a estos hombres no sólo desde la óptica externa sino desde el prisma particular de los que desempeñaron la función?

En virtud de la ausencia de estudios omnicomprensivos sobre la institución de la alcaldía de barrio en Buenos Aires entre 1772 y 1821 y la notable dispersión de los fondos documentales que era conveniente relevar para procurar encontrar fuentes sobre la cuestión, en archivos argentinos y extranjeros, se analizará cómo funcionaba dicha alcaldía, con el objeto de intentar responder a los interrogantes suscitados sobre estos agentes, a través del doble prisma de un tipo de normativa propia del derecho local por un lado y, por otro, la problemática real de la institución, esto es, la consideración sociológica del derecho. Así, este estudio busca conocer cuál fue el funcionamiento y desarrollo de un tipo de burocracia de baja jerarquía como fue la alcaldía de barrio en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, desde su instalación definitiva en 1772 hasta 1821, fecha en que fue suprimido el cabildo porteño, institución bajo la cual desempeñaban sus actividades, pasando luego a depender directamente del jefe de la policía, quien instauró, por primera vez, un cuerpo profesional de policía, independiente de la corporación municipal²⁴.

²⁴ El Departamento General de Policía fue creado por ley de la legislatura bonaerense de 24 de diciembre de 1821, sustituyendo así a los cabildos que por la misma ley se abolían. Joaquín de Achával fue el primer jefe de policía, quien fue designado el 28 del mismo mes. Romay informa que "el nuevo sistema comenzó a funcionar el día 1° de enero de 1822. Las oficinas fueron establecidas en el edificio que había pertenecido al Seminario Conciliar, que se hallaba en la actual calle Bolívar, frente a la plaza de Mayo y fue demolido al abrirse la Avenida de Mayo. Con ese motivo se mandó construir el edificio donde se halla en la actualidad y que se inauguró el 4 de noviembre de 1888. La parte de ese edificio que da frente a la calle Belgrano fue ocupada por el cuerpo de bomberos el 30 de marzo de 1889" (FRANCISCO L. ROMAY, "Miscelánea", en: *Historia. Revista trimestral de Historia Argentina, Americana y Española*, a. I, n. 3, Buenos Aires, Unión Editores Latinos, ene.-mar. 1956, p. 148; FRANCISCO L. ROMAY, *Don Joaquín de*

Para ello, se examinarán los aspectos relacionados con el funcionamiento de la institución de los alcaldes de barrio a lo largo de ocho capítulos, comenzando por el ámbito geográfico de acción de los alcaldes de barrio. La cuestión de la organización del trazado urbano refleja —aunque en una escala mucho menor— el espíritu de las reformas territoriales introducidas por la Corona española en sus dominios hispanoamericanos con el objetivo de mejorar la administración gubernamental. Estas medidas fueron el prelude de la implementación de una nueva burocracia formada por empleados jerárquicamente organizados, que de esta manera actuarían con mayor rapidez y efectividad en la ejecución de las políticas reales.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la división del espacio urbano era esencial para especificar el ámbito en el cual cada uno de los alcaldes de barrio ejercería las funciones para las cuales había sido designado. Complemento de esa organización fue la identificación de las calles de la ciudad. De esta manera, ambas acciones posibilitaron que estos agentes supieran cuál era la exacta localización de las calles de sus respectivos distritos, evitando así posibles disputas sobre la jurisdicción que le correspondía a cada uno.

En este capítulo se intentará comprobar si las modificaciones de la traza urbana experimentaron, como se pretendía, efectivamente una evolución tendiente a perfeccionar la organización de ese espacio, procurando analizar el carácter y vigencia de dichas modificaciones. Asimismo, y en lo relativo a la nomenclatura de las calles, se evaluará si existió o no alguna intencionalidad en la adjudicación de dichos nombres y, en el caso de que hubiera existido, identificarla y contextualizarla.

La cuestión de las condiciones personales de los agentes de la administración pública española generó, desde la época de Alfonso X el Sabio, un significativo cuerpo normativo, y fue objeto de reflexión por parte de numerosos autores. Esta tradición fue recogida por el legislador de la época de las luces que, en sintonía con el espíritu de su siglo, intentó reglamentar con mayor sofisticación requisitos exigibles a los candidatos a integrar el funcionariado de los territorios del imperio tales como la vecindad, nacionalidad, religión, edad, sexo, nacimiento, costumbres, estado civil, patrimonio y actividades económicas. La consiguiente yuxtaposición entre aquel acervo tradicional y las expectativas de la Ilustración española configuró el contexto en el que, en el segundo

Achával, Buenos Aires, s. d., 1944, p. 17; IGNACIO F. BRACHT, *La seguridad en el Buenos Aires criollo (1820-1840)*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, 1994, p. 16).

capítulo, se examinará, en primer lugar, en qué medida todas aquellas cuestiones fueron recogidas en la normativa que reguló las alcaldías de barrio porteñas. A continuación, se estudiará sobre la base de dicha normativa si los candidatos a ocuparlas cumplieron —y hasta qué punto— con lo establecido sobre la materia.

Seguidamente, el tercer capítulo se centra en la designación y duración en el cargo. Durante el período indiano las obras de doctrina subrayaron la importancia que tenía para la “buena salud de la república” la elección de los agentes que habrían de servirla. De la designación de estos agentes dependería la eficacia de la burocracia estatal y el cumplimiento de los objetivos que se pretendían alcanzar. Siendo delegable la facultad de nombrar agentes de la administración pública, muchos cargos indianos eran designados por los virreyes y otras autoridades, siguiendo ciertas pautas fijadas por la corona²⁵.

Esta idea subyace en el bando de 21 de mayo de 1772, por el cual el entonces gobernador y capitán general interino de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan José de Vértiz, decidió “a imitación de la capital de este reino y otras” crear el cargo de alcalde de barrio en la ciudad de Buenos Aires, designando “comisionados” o “comisarios de barrios” repartidos “por solar” o “islas en todo el ámbito de ella”²⁶. Tal y como reza el mencionado bando, el nombramiento de los alcaldes de barrio de la ciudad estaba exclusivamente a cargo del propio gobernador y capitán general. Sin embargo, desde 1790 y hasta el final del período estudiado, el proceso por el cual se designaba a los alcaldes de barrio de la ciudad fue sucesivamente incorporando nuevos actores, al mismo tiempo que despedía a otros. Es justamente el análisis del cambiante esquema de propuesta, nombramiento y confirmación de dichos alcaldes la primera de las cuestiones que será abordada en el capítulo tercero del trabajo.

Además, se examinará a continuación la cuestión del tiempo de permanencia en la función de los alcaldes de barrio de la ciudad, procurando establecer cuándo se produjeron los sucesivos cambios en la materia e interpretándolos en el contexto político en el que tuvieron lugar.

²⁵ JOSÉ M. MARILUZ URQUIJO, *El agente de la administración pública en Indias*, Buenos Aires, Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano-Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1998, pp. 68-74.

²⁶ Bando del gobernador y capitán general interino de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan José de Vértiz. Buenos Aires, 21 de mayo de 1772, cláusula introductoria (V. Apéndice D, texto I).

El cuarto capítulo se dedica al título, atributos, pertrechos y posible remuneración de los alcaldes de barrio. Directamente relacionado con la toma de posesión, el otorgamiento del título a los agentes de la administración indiana revestía una importancia capital, en tanto que muchas veces era éste el que establecía la competencia y atribuciones del cargo²⁷. Asimismo, la entrega que se hacía a algunos de ellos de ciertos atributos de su jurisdicción no era, por cierto, menos importante. De esta manera, la vara o el bastón de mando eran símbolos pero también distintivos para que fuese reconocida la autoridad del agente, ya que sólo podían llevarlos los que estaban expresamente autorizados para ello²⁸. El uso de tales insignias no era una decisión del agente sino una obligación impuesta por la misma Corona, aunque en la mayoría de los casos, se trataba de una imposición que se cumplía con gusto, pues se trataba de objetos apetecidos cuya portación implicaba un honor y robustecía el respeto de los administrados.

Las alcaldías de barrio porteñas no fueron ajenas a estas cuestiones, por lo que en este capítulo se verá el aspecto externo de la función, centrando la atención en tres elementos fundamentales: el uso de algún tipo de distintivo, vestimentas uniformadas y portación de algún tipo de arma.

La posible remuneración por el ejercicio de la función también forma parte de este capítulo. En efecto, es sabido que los miembros del cabildo no percibían salario alguno por el desempeño de la función, lo cual se consideraba “muy regular y justo, mayormente cuando los individuos de este cabildo sirven sin más salario ni gratificación que el del amor y celo del público”²⁹. Otro tanto sucedía con los empleos consulares, los cuales eran ocupados “generalmente por personas que no necesitan de sueldos ni los desempeñan sino por el honor que esto les proviene”³⁰.

Análoga situación parece haberse presentado para el caso de los alcaldes de barrio, temática que también se tratará en este apartado, procurando comprobar la

²⁷ MARILUZ URQUIJO, *El agente...* cit., p. 183.

²⁸ Mariluz Urquijo recuerda una real cédula de 1502 en la que el monarca expresó que las varas habían sido creadas para que “nuestras justicias fuesen reconocidas” y que no podrían ser usadas sino por los que “por nuestro mandado las trujieren” (MARILUZ URQUIJO, *El agente...* cit., p. 204).

²⁹ ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, *Acuerdos del extinguido cabildo de Buenos Aires*, Buenos Aires, 1931, 3ª serie, t. IX, p. 262.

³⁰ ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, *Consulado de Buenos Aires. Antecedentes. Actas. Documentos*, vol. II, Buenos Aires, Kraft Ltda., 1937, p. 256.

veracidad de dicha hipótesis y, en caso de verificarse, establecer si existió algún tipo de discurso vinculado a la noción de prestigio, que procurara compensar la ausencia de dicha remuneración.

El capítulo quinto se ocupa del tema de los subalternos y ayudantes. Tras unas necesarias consideraciones terminológicas, se analizará cuál fue la dinámica de los tenientes de alcaldes de barrio por un lado, esto es, subalternos de los alcaldes de barrio, y, por otro, la de los ayudantes ocasionales de estos últimos, entendiendo que bajo esta denominación están comprendidos los vecinos y población en general que ayudaban a los primeros en el desempeño cotidiano de la función pero que carecían de la institucionalidad —si cabe el término— para ocupar eventualmente el lugar de dichos alcaldes.

El capítulo sexto versará sobre el desempeño y funciones de los alcaldes de barrio. Además de las cuestiones propias de la regulación del oficio de alcalde de barrio, el análisis de la normativa recopilada relativa a sus funciones permite adentrarse en cuestiones específicas sobre sus tareas, por un lado, y al conjunto de problemas propios de la vida diaria de la ciudad, por otro. Respecto de lo primero, se examinará cómo se organizó la actividad de los alcaldes de barrio porteños, procurando establecer un modelo ideal de alcalde barrio con el que se esperaba contar para el desempeño esperado de la función y si esta figura de alcalde de barrio modélico desapareció o subsistió —y, en dicho caso, si sufrió algún tipo de modificación— luego de los sucesos de mayo de 1810. Respecto de lo segundo, el objetivo es ofrecer un panorama temático de la acción de los alcaldes de barrio en relación con cada uno de los problemas cotidianos de la ciudad en los que tenían competencia, entre los cuales se cuentan los relativos al control de los habitantes, vagancia, establecimientos públicos, juegos y bailes, moral pública, seguridad pública, ordenamiento edilicio, tránsito y ordenamiento de la vía pública y salubridad urbana, entre otros.

La cuestión del cese en la función es abordada en el capítulo séptimo. Son conocidas las situaciones por las que, en general, el agente de la administración pública en las Indias cesaba en su servicio³¹; sin embargo, no existe estudio alguno para el caso

³¹ MARILUZ URQUIJO, *El agente...* cit., pp. 359-383; GUILLERMINA MARTÍNEZ CASADO DE FUSCHINI MEJÍA, "Jubilaciones y retiros en el Río de la Plata", en: *Memoria del X Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, t. I, México, Escuela Libre de Derecho-Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, pp. 855-875.

de los alcaldes de barrio de la ciudad de Buenos Aires³². Las normas que regulaban el funcionamiento de esta institución ni siquiera consideraron la posibilidad de que estos alcaldes solicitaran ser separados del cargo. No obstante, la documentación relevada sugiere que los alcaldes de barrio cesaban en el desempeño de su cargo, aparte de la obvia situación planteada por el fallecimiento del alcalde, por remoción y — mayoritariamente— mediante la solicitud del propio agente por motivos de variada índole, situaciones que serán analizadas exhaustivamente en este apartado.

El último capítulo se concentra en la actuación y eficiencia de los agentes estudiados. La atribución de funciones específicas a los alcaldes de barrio constituyó el acervo de lo que puede considerarse el deber ser de estos alcaldes. La presunción legal de que éstos ordenarían las situaciones cotidianas en función del resultado prescripto, mediando o no transgresiones, frecuentemente tropezó con la realidad, sobremanera más compleja. Por ello, se despliega el análisis posible de las brechas entre aquel universo ideal y los hechos, en los que se observa la *praxis* social, para evaluar en qué medida los alcaldes de barrio pudieron haber condicionado o influido en la vida de la sociedad porteña del período *sub examine*. En particular, se aprovecha la evidencia disponible sobre el ejercicio del oficio y sus eventuales efectos.

Los apéndices constituyen parte fundamental de esta investigación. Los mismos han sido elaborados mayormente sobre la base de la documentación detallada en el repertorio heurístico y se designan con las letras A, B, C y D:

- el apéndice A está constituido por una nómina de individuos sobre los que ha podido comprobarse que desempeñaron la función de alcalde de barrio en cada uno de los cuarteles en los que se dividió la ciudad de Buenos Aires entre 1772 y 1821;
- el apéndice B fue elaborado como complemento del capítulo VII del presente trabajo — relativo al cese en la función— y consiste en una sistematización de solicitudes de exención presentadas por los alcaldes de barrio porteños en el mismo período;
- el apéndice C presenta en orden alfabético los nombres de los individuos listados en el apéndice A, incluyendo en cada uno de los 463 nombres, tanto como fue posible, datos sobre el origen, fechas de nacimiento y fallecimiento, profesión, ocupación, edad al

³² Hace algunos años se ha publicado una primera aproximación a la cuestión para el período comprendido entre 1810 y 1821 (SANDRA L. DÍAZ DE ZAPPÀ, “La institución del alcalde de barrio en Buenos Aires entre 1810 y 1821: tradición indiana y modificaciones pos revolucionarias”, en: *Revista de Historia del Derecho*, n. 36, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2009, pp. 72-115).

momento de ser designados en la función, y cuarteles y años en los cada uno de ellos fueron nombrados, seguidos de otros datos biográficos complementarios; -finalmente, se incluye en el apéndice D una transcripción del marco jurídico regulatorio hallado de la institución.

Es posible que la exposición pueda resultar por momentos bastante descriptiva; sin embargo, es imposible analizar el desarrollo de una institución a lo largo del tiempo sin dejar de realizar un trabajo de arqueología jurídica para descubrir qué sucedió realmente con ella en el pasado³³; además, esta opción “narrativa” invita al lector a participar de la construcción del objeto de investigación³⁴. Ello no fue óbice, por otra parte, para aventurar algún razonamiento de tipo especulativo sobre qué podría haber sucedido o por qué, cuando la documentación no aportó datos al respecto³⁵. En este sentido, se reconoce el valor de dejar interrogantes abiertos, a la espera de que nuevos hallazgos documentales propios o ajenos permitan completar el rompecabezas de la administración americana de finales del siglo XVIII y comienzos de la centuria siguiente.

Asimismo, y en cuanto al estilo empleado en las páginas que siguen, cabe señalar que se procuró combinar la erudición con una exposición más narrativa que, al decir de Carlos A. Mayo, “se regodea en el detalle, en la descripción de la cotidianidad, en la rutina exterior pero también en los pliegues del alma de sus protagonistas”³⁶.

Con en ese regodeo por el detalle minucioso se ha querido recuperar también la dimensión individual de la alcaldía de barrio, procurando así acercarse a personas de carne y hueso, de gente común, a quienes les tocó ocuparla. La tarea no ha sido fácil; en

³³ DAVID IBBETSON, “Comparative legal history”, en: ANTHONY MUSSON; CHANTAL STEBBINGS (EDS.), *Making legal history. Approaches and Methodologies*, New York, Cambridge University Press, 2012, p. 131.

³⁴ “Como os micro-historiadores [...] a busca de uma forma não está fundamentalmente ligada a uma escolha estética. Ela me parece ser antes de ordem heurística, e isso de duas maneiras. Ela convida o leitor a participar da construção de um objeto de pesquisa; ela o associa à elaboração de uma interpretação”. Los microhistoriadores “consideram que uma escolha narrativa decorre da experimentação histórica tanto quanto os próprios procedimentos da pesquisa. Os dois aspectos na verdade praticamente não podem ser dissociados. A invenção de um modo de exposição não produz apenas efeitos de conhecimento. Ela contribui explicitamente para a produção de um certo tipo de inteligibilidade em condições experimentais definidas. A forma do inquérito adquire aqui todo o seu sentido: ela associa o leitor ao trabalho do historiador, a produção do seu objeto de estudo” (JACQUES REVEL, “Microanálise e construção do social”, en: JACQUES REVEL (ORG.), *Jogos de escalas. A experiência da microanálise*, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas Editora, 1998, pp. 34-35 y 36).

³⁵ JOHN BAKER, “Reflections on ‘doing’ legal history”, en: MUSSON; STEBBINGS, *op. cit.*, p. 7.

³⁶ CARLOS A. MAYO, *Estancia y sociedad en la pampa (1740-1820)*, Buenos Aires, Biblos, 2004, p. 25.

muchos casos los nombres permanecen aún rodeados de vacíos de información. Para Carlos Mayo, “no se trata sólo de ver en una historia individual el reflejo de tendencias y regularidades más vastas, no se trata sólo de acumular caso, se trata también de recuperar esa vida en lo que tiene de existencial, de propia, de intransferible”. Y agrega que “alguien podría decir que [...] no vale la pena demorarse en reconstruir vidas [...] pasajeras, ocultas e intrascendentes. El historiador que afirme esto —sobre todo si es un historiador profesional— está como diciéndonos que su propia vida, la única que tiene, carece de importancia”³⁷.

Para el presente trabajo se han utilizado fuentes primarias manuscritas e impresas. Con respecto a las manuscritas, fueron compulsados 240 legajos de documentación existentes en archivos argentinos y extranjeros: entre los primeros, el Archivo General de la Nación (Buenos Aires), el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (La Plata) y la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional (Buenos Aires). Con respecto a los repositorios extranjeros, fueron consultados en España los fondos documentales del Archivo General de Indias (Sevilla), el Archivo General de Simancas (Valladolid) y la Biblioteca Histórica del Palacio de Santa Cruz (Valladolid). También fue utilizada documentación conservada en las Bibliotecas Nacionales de Brasil (Rio de Janeiro) y Chile (Santiago); finalmente, se ha revisado la colección de manuscritos de la Lilly Library en los Estados Unidos.

Respecto de las fuentes impresas, se han relevado obras de doctrina que, aunque rara vez tratan el tema del agente de la administración, suelen ocuparse de cuestiones conexas que ayudan bastante a la hora de aclarar diversos aspectos. Mariluz Urquijo señala que dichas obras “permiten descubrir el pensamiento de la época” sobre la burocracia, a la vez que acercan “los motivos de las leyes que, a veces, éstas callan por demasiado obvios para las personas de su tiempo o porque el legislador considera inconveniente descubrir”; asimismo, posibilitan “conocer hasta dónde la legislación sigue las ideas de su tiempo o se aparte de ellas”³⁸.

En lo que respecta a la prensa, se han relevado 28 publicaciones periódicas rioplatenses editadas en el período en estudio, que conforman un total de 1.563

³⁷ MAYO, *Estancia y sociedad...* cit., p. 211.

³⁸ MARILUZ URQUIJO *El agente...* cit., pp. 23-24; MIGUEL LUQUE TALAVÁN, *Un universo de opiniones. La literatura jurídica indiana*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto de Historia, 2003, p. 80.

números. Con ello, se entiende haber revisado la casi totalidad de los periódicos publicados en Buenos Aires, entre 1772 y 1821.

La lectura de ese periodismo rioplatense, parte colonial y parte independiente, permitió conocer la recepción que determinados autores tuvieron en la periferia del imperio español, en una época en la que permanecía vigente el argumento de autoridad y, por ende, se daba gran importancia al respaldo de cada afirmación con un número suficiente de citas³⁹. En ausencia de obras de doctrina redactadas en el Río de la Plata acerca del tema estudiado, las publicaciones periódicas contienen una compleja refracción de ideas importadas que, en muchos casos, fueron invocadas para el comentario de problemas genuinamente locales⁴⁰. Al respecto, el mismo Mariluz Urquijo ha señalado que, a pesar de que el pensamiento jurídico rioplatense del setecientos tuvo más bien un carácter de reflejo, “se daban matices determinados por una realidad semejante pero no igual a la de los demás reinos y provincias dependientes de la Corona”⁴¹.

Pese a que hubiera sido heurísticamente lícito concentrar el trabajo sobre las fuentes inéditas y editas ya reseñadas, se relevó en forma adicional un universo representativo conformado a partir de la colección hemerográfica conservada en la Biblioteca Nacional de España⁴². Al elenco seleccionado en el acervo de ese repositorio, se sumaron las consultas de otras publicaciones como el *Caxón de Sastre* y el *Correo mercantil de España y sus Indias*. El consiguiente relevamiento de 87 publicaciones españolas —que suman más de 28.200 números— contribuyó a completar ese rompecabezas de ideas sobre la administración de la época y la lectura de aquellos títulos españoles hizo posible acceder a olvidados autores de doctrina que, aunque no necesariamente originales o imprescindibles, ofrecen testimonios significativos en

³⁹ MARILUZ URQUIJO, *El agente...* cit., p. 24.

⁴⁰ DAISY RÍPODAS ARDANAZ, *Refracción de ideas en Hispanoamérica colonial*, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas-Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, 1983, p. 35.

⁴¹ JOSÉ M. MARILUZ URQUIJO, “Historia de las ideas jurídicas del setecientos rioplatense. Problemas de una investigación”, en: JOSÉ LUIS SOBERANES FERNÁNDEZ; ROSA MARÍA MARTÍNEZ DE CODES (COORDS.), *Homenaje a Alberto de la Hera*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, p. 435.

⁴² Sobre el criterio para escoger los títulos, se hizo primeramente una pre-selección de los mismos basada en parámetros cronológicos y lingüísticos. Así, se descartó —además de los que no correspondían al periodo investigado— el *Courier d'Espagne*. Acto seguido, y tras la lectura de los títulos seleccionados, se realizó una nueva selección basada en el contenido de los mismos, razón por la cual quedaron excluidos el *Diario Mercantil de Cádiz* (1803-1828), la *Guía de litigantes y pretendientes* (1786-1842), y el *Semanario económico* (1765-1778).

relación con determinados detalles del oficio de alcalde de barrio. Además, una porción de estos títulos circulaba en Buenos Aires —donde residían parte de sus suscriptores— y llegó a formar parte de las bibliotecas de reconocidos personajes de la ciudad, probando que lejos de tratarse de impresos que se leían y se descartaban, estos ejemplares merecían ser conservados y hasta consultados⁴³. Finalmente, cabe aclarar que algunas de las publicaciones periódicas españolas —especialmente las comprendidas entre 1809 y 1821— carecen de artículos relacionados con el imaginario de la época; en lugar de ello, dan cuenta con cierta frecuencia de lo que estaba sucediendo en la región platense. A partir de estos testimonios, es posible enriquecer —con los cuidados del caso— alguna que otra afirmación sobre cuestiones que formaban parte de las competencias de los alcaldes de barrio.

Finalmente, una breve aclaración sobre la terminología empleada para hacer referencia a los alcaldes de barrio a lo largo de este estudio. Siguiendo a Mariluz Urquijo, se ha optado por evitar el uso de vocablos tales como *funcionario* —cuya aparición es muy posterior al límite temporal utilizado en esta investigación⁴⁴—, *oficial*, *dependiente* y *empleado*, estos últimos por las razones que se verán en el capítulo cuarto

⁴³ DAISY RÍPODAS ARDANAZ, “En el Buenos Aires virreinal. El dictamen de Saavedra sobre gremios (1799)”, en: RÍPODAS ARDANAZ, *Refracción...* cit., p. 126. La autora cuenta que entre 1807 y 1815 aparecieron sendas colecciones completas del semanario madrileño *Espíritu de los mejores diarios* en la biblioteca del abogado Mariano Izquierdo y en la del periodista Hipólito Vieytes. En el caso del *Correo Mercantil de España y sus Indias*, y si bien no contaba al momento de su aparición —en octubre de 1792— con ningún suscriptor rioplatense, se sabe que contaba con corresponsales en la región, quienes remitían una serie de informaciones que hicieron de la publicación “el mejor mirador para gozar de una visión completa de la economía virreinal”. Sin embargo de haber sido proyectado “al exterior”, el *Correo Mercantil* circulaba y se leía “con interés” en el Virreinato, siendo inclusive invocado por algunos personajes de su ámbito “como fuente responsable” (JOSÉ M. MARILUZ URQUIJO, “Estudio preliminar”, en: JOSÉ M. MARILUZ URQUIJO, *Noticias del Correo mercantil de España y sus Indias. Sobre la vida económica del Virreinato del Río de la Plata*, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1977, p. 16 y ss.). Para el caso de Francisco Antonio Cabello y Mesa, quien fuera el editor del primer diario americano —el *Diario de Lima*— y del primer periódico impreso regular de Buenos Aires —el *Telégrafo mercantil*—, el uso que aquél hizo de la prensa peninsular ha sido estudiado por Mónica P. Martini. Para el diario limeño, Cabello y Mesa recurrió al *Diario curioso, erudito, económico y comercial* que, desde enero de 1788 pasaría a ser el *Diario de Madrid*; asimismo, se valió del *Espíritu de los mejores diarios*, el *Cajón de Sastre* y, en menor medida, el *Memorial literario* y *El filósofo a la moda*. Ya al frente del *Telégrafo mercantil*, su “mejor y más completa fuente de información eran las *Gacetas* procedentes de Ultramar”, llegando a citar hasta un episodio oportunamente publicado por el *Diario pinciano* de Valladolid (MÓNICA P. MARTINI, *Francisco Antonio Cabello y Mesa, un publicista ilustrado de dos mundos (1786-1824)*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones sobre Identidad Cultural-Universidad del Salvador, 1998, pp. 137, 174 y 199).

⁴⁴ La voz aparece recogida por primera vez en 1853, y se la define como “la persona que desempeña un cargo, especialmente público, a nombre de otro, cuyas funciones ejerce en mayor o menor escala” (RAMÓN JOAQUÍN DOMÍNGUEZ, *Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de la Lengua Española (1846-47)*, Madrid-París, Establecimiento de Mellado, 1853, p. 830). El diccionario citado en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Nuevo Tesoro Lexicográfico...* cit.

y que las hacen inaplicables a los alcaldes de barrio⁴⁵. De la misma manera, se descartó el término *servidor* por cuanto ninguna de las acepciones incluidas en el *Diccionario de Autoridades* responde a las características de los alcaldes de barrio⁴⁶.

Debe tenerse en cuenta que, conforme ha señalado Tau Anzoátegui, ante la necesidad de hallar una denominación para referirse al objeto de estudio que evite tautologías o el exceso de reiteraciones, es conveniente adoptar “voces o expresiones utilizadas en la época a ese mismo efecto”; sin embargo, cuando no se encuentra ninguna suficientemente adecuada, es útil “acudir a otras que respondan a esa necesidad de comprensión de aquel objeto sin afectar sensiblemente los usos del lenguaje jurídico de la época”⁴⁷.

Coherentemente, para referirse “a todo el universo de personas” que son objeto de su estudio, el mismo Mariluz Urquijo sugiere acertadamente utilizar el de *agente*, término derivado de *agere* -hacer, obrar⁴⁸ y definido por el mencionado *Diccionario* como “la persona o cosa que obra y tiene virtud y facultad para producir y causar algún efecto” y –en otra acepción– como “el que solicita, diligencia y procura los negocios de otro”⁴⁹.

⁴⁵ MARILUZ URQUIJO, *El agente...* cit., pp. 12-14.

⁴⁶ La voz *servidor* es definida como “el que sirve como criado”; “el que corteja o festeja alguna dama”; “en estilo cortesano llaman al que se ofrece a la disposición u obsequio de otro”; “el bacín o servicio” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua...*, tomo sexto, Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, por los herederos de Francisco del Hierro, 1739, p. 100). El diccionario citado en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Nuevo Tesoro Lexicográfico...* cit. Sobre los criados en el Río de la Plata, v. SANDRA L. DÍAZ DE ZAPPÀ, “Pervivencia de los criados en la Hispanoamérica del siglo XVIII: el Río de la Plata”, en: *Temas de Historia Argentina y Americana*, n. 4, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Católica Argentina, 2004, pp. 13-44.

⁴⁷ TAU ANZOÁTEGUI, “La configuración del derecho...” cit., p. 21.

⁴⁸ MARILUZ URQUIJO, *El agente...* cit., p. 14.

⁴⁹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua...*, t. I, Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 1726, p. 115. Las dos acepciones citadas se mantienen en la edición inmediatamente posterior al cierre temporal de nuestra investigación: efectivamente, en la edición de 1822 el diccionario de la Real Academia define como agente a “la persona o cosa que obra y tiene facultad para producir o causar algún efecto”. Además, incluye las expresiones “agente de negocios” y “agente fiscal”, entendiendo la primera como “el que solicita o procura los negocios de otro” y, la segunda, “el sujeto destinado para ayudar al fiscal en los negocios de su oficio” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua castellana por la real Academia Española. Sexta edición*, Madrid, Imprenta Nacional, 1822, p. 22). Todos los diccionarios citados en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Nuevo Tesoro Lexicográfico...* cit.

Asimismo, se considera que para el caso particular de los alcaldes de barrio el uso de la voz *ministro* resulta igualmente adecuado; el término es recogido por el ya mencionado *Diccionario de Autoridades*, en el que —dejando de lado las acepciones relacionadas con el ámbito eclesiástico—, se lo define como “el que sirve y ministra a otro alguna cosa”; “el juez que se emplea en la administración de la justicia, decidiendo y sentenciando los pleitos o causas, o en el gobierno, para la resolución de otros negocios políticos y económicos, ya sea por sí solo o incluido en algún tribunal, donde vota con los demás”: y, finalmente, “los alguaciles, corchetes y demás oficiales inferiores, que ejecutan los mandatos y autos del juez”⁵⁰. Además, el término ya se usaba en el lenguaje capitular del Río de la Plata en el temprano siglo XVII cuando, en las ordenanzas de cabildo de 1642, se expresa que:

Y en cuanto al veinte capítulos de la limpieza de las calles y que cada uno limpie su pertenencia por lo menos cada semana una vez decretaron unánimes y conformes que por pregón público por todas las esquinas de la ciudad y partes de concurso de gente se mande que todos los sábados todos los vecinos y moradores estantes y habitantes en esta ciudad limpien las pertenencias de sus casas y viviendas so pena que en la que se hallare basura, paja y otras inmundicias pague un peso de pena por cada vez, que se aplica el cuarto de la dicha pena al ministro que lo ejecutare”⁵¹.

Además, la “providencia circular” dictada el 31 de mayo de 1785 por el gobernador intendente de la provincia de Buenos Aires, Francisco de Paula Sanz, a los alcaldes de barrio señaló que

- debiendo por jueces de barrio concurrir con todo empeño al más pronto logro de las benéficas ideas promovidas por el gobierno, en cuya realización no deja de correr a todos sin excepción del interés de vecinos, y estando obligados aquéllos particularmente a esmerarse en obedecer los primeros, para dar el debido ejemplo a los de su distrito, se experimenta todo lo contrario en unos u otros, por lo que siendo muy reprehensible esta inobediencia, y tan positiva la contravención, no podré dispensarme de tomar las rigurosas y serias providencias que pida el caso, en el primero que ocurra, contra cualquiera de los alcaldes de barrio en quienes (por el mismo carácter de ministros de justicia, subalternos de este gobierno, y cuya distinción y confianza merecieron se les declarase por bando publicado en 21 de mayo de 1772) se dará escarmiento a los demás

⁵⁰ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua...*, tomo cuarto, Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, por los herederos de Francisco del Hierro, 1734, p. 572. En la edición de 1822, se recogen las primeras dos acepciones citadas (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua castellana por la real Academia Española. Sexta edición*, Madrid, Imprenta Nacional, 1822, p. 538). Todos los diccionarios citados en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Nuevo Tesoro Lexicográfico...* cit.

⁵¹ ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, *Acuerdos del extinguido cabildo de Buenos Aires* (en adelante *Acuerdos...*), Buenos Aires, 1911, 1ª serie, t. IX, pp. 261-262. El subrayado es propio.

vecinos, haciéndoles que conozcan cuán respetables son las órdenes del gobierno, y mucho más las que son inmediatamente provenientes del superior del reino⁵².

Por lo expuesto, se han alternado a lo largo de este trabajo las voces *agente* y *ministro* para hacer referencia a los alcaldes de barrio.



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

⁵² Providencia circular del gobernador intendente de la provincia de Buenos Aires, Francisco de Paula Sanz, a los alcaldes de barrio, Buenos Aires, 31 de mayo de 1785 (V. Apéndice D, texto VII). El subrayado es propio.

Capítulo I: Ámbito geográfico de acción de los alcaldes de barrio.

La cuestión de la organización del trazado urbano refleja —aunque en una escala mucho menor— el espíritu de las reformas territoriales introducidas por la Corona española en sus dominios hispanoamericanos con el objetivo de mejorar la administración gubernamental. Estas medidas fueron el preludio de la implementación de una nueva burocracia formada por empleados jerárquicamente organizados, que de esta manera actuarían con mayor rapidez y efectividad en la ejecución de las políticas reales.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la división del espacio urbano era de suma importancia para especificar el ámbito en el cual cada uno de los alcaldes de barrio desenvolvería las funciones para las cuales había sido designado. La identificación de las calles de la ciudad fue complementaria de esa organización. Ambas acciones posibilitaron que los alcaldes de barrio de la ciudad supieran cuál era la exacta localización de las calles que delimitaban su distrito, evitando así posibles disputas sobre la jurisdicción de cada uno de estos agentes.

I. 1. Divisiones de la traza urbana.

Cuando la edificación permanente de Buenos Aires —dice Luis María Torres— “adquirió cierta amplitud y la población de los diversos barrios se empezó a singularizar por su composición y el género de tareas”, el cabildo de la ciudad consideró la posibilidad de estudiar una mejor distribución de esa población, con el fin de que la administración de justicia ordinaria resultara “más rápida y eficaz”; además, ello permitiría, entre otras cosas, el control de los servicios públicos y la vigilancia de las costumbres⁵³.

Sin embargo, y antes de bucear en los orígenes de la idea de organizar el espacio urbano, es necesario realizar algunas precisiones terminológicas acerca de los vocablos con los que sucesivamente se irían designando las divisiones de dicho espacio en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Según el *Diccionario de Autoridades*, la voz “barrio” hacía referencia al “distrito, o parte de alguna ciudad, o lugar, que con nombre

⁵³ LUIS MARÍA TORRES, “Cuestiones de administración edilicia de la ciudad de Buenos Aires”, en: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, *Documentos para la historia Argentina*, t. IX, Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1918, p. C.

particular se distingue de lo demás de la ciudad”⁵⁴. Según Covarrubias, el vocablo proviene del árabe *barr*, que significa “campo”, por lo que “barrio” es lo mismo que la reunión de muchas casas de campo motivada por razones de seguridad:

Y porque no estaban seguros de los ladrones y robadores, juntáronse muchos barrios, y hicieron un lugar distinto en los dichos barrios, aunque conjuntos unos a otros, y estos se llamaron en latín vicos, y los moradores dellos vecinos, vecinos; y el barrio, vezindad⁵⁵.

En el caso de la voz “cuartel”, en 1737 el *Diccionario de Autoridades* lo definió de la siguiente manera:

Se toma también por el distrito o término en que se suelen dividir las ciudades o villas grandes, para el mejor gobierno económico y civil del pueblo, y se encarga regularmente y reparte entre los alcaldes y regidores el cuidado de ellos⁵⁶.

Por su parte Terreros y Pando la incluye en su obra de 1786 emparentándola con “barrio”: “cuartel, barrio, o división de la ciudad”⁵⁷. Finalmente, la voz “parroquia” no aparece en los diccionarios de la Real Academia Española sino hasta 1780, edición en la que se la definió —en la acepción que interesa— como “el distrito y territorio que ocupan los parroquianos, o está señalado a la parroquia”⁵⁸.

A lo largo de la historia de España, la presencia de la voz “barrio” designando un distrito urbano era común en tiempos medievales, cuando dentro del casco urbano —casi siempre amurallado— habitaban “los vecinos de pleno derecho”, esto es, los villanos. A su vez, y dentro de dichas murallas la población “se encuadraba por barrios

⁵⁴ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua...*, t. I, Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 1726, p. 567. El diccionario citado en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Nuevo Tesoro Lexicográfico...* cit.

⁵⁵ SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS, *Tesoro de la lengua castellana o española*, Madrid, Luis Sánchez, 1611, p. 247. El diccionario citado en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Nuevo Tesoro Lexicográfico...* cit.

⁵⁶ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua...*, t. quinto, Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, por los herederos de Francisco del Hierro, 1737, p. 453. El diccionario citado en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Nuevo Tesoro Lexicográfico...* cit.

⁵⁷ ESTEBAN DE TERREROS Y PANDO, *Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana...*, tomo primero, Madrid, Viuda de Ibarra, 1786, p. 564. El diccionario citado en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Nuevo Tesoro Lexicográfico...* cit.

⁵⁸ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo para su más fácil uso*, Madrid, Joaquín Ibarra, 1780, p. 691. El diccionario citado en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Nuevo Tesoro Lexicográfico...* cit.

o collaciones, cuyo elemento aglutinador eran las parroquias”. Así, cada parroquia y la respectiva “collación a que daba nombre eran los sectores en que los vecinos se organizaban con fines fiscales, militares o administrativos, eligiendo a partir de los mismos sus propios aportillados o representantes en el concejo”⁵⁹.

Diversos tratadistas españoles se ocuparon de la cuestión de la organización del espacio urbano ya en el siglo XVI. Sin pretensión de exhaustividad, vale citar por ejemplo a Antonio Cáceres Pacheco, quien en 1557 llamó tímidamente la atención sobre el tema sugiriendo cuán “oportuno” sería “trazar los espacios públicos, las plazas y las calles, según la extensión de la ciudad”⁶⁰. Ya en la centuria siguiente, aunque con el objetivo de prevenir la organización de sediciones y tumultos militares, Diego de Saavedra Fajardo afirmó en 1640 que “el remedio de la división es muy eficaz, para que se reduzga [*sic*] el pueblo, viendo desunidas sus fuerzas, y sus cabezas”. Y agregó:

De aquí nace el ser muy conveniente, prohibir las juntas del pueblo. Por esto la ciudad del [*sic*] Cairo se repartió en barrios, distintos con fosos muy altos, para que no se pudiesen juntar fácilmente sus ciudadanos, que es lo que tiene quieta a Venecia, separadas sus calles con el mar. La división tiene a muchos dudosos, y no saben cuál partido es más seguro, si falta, corren todos adonde inclinan los demás⁶¹.

En el Siglo de las Luces, varios autores extranjeros encomiaron la idea de subdividir el espacio urbano, ponderando las ventajas de establecer su partición en unidades más o menos uniformes, lo que posibilitaría la instauración de una vigilancia más adecuada de la población. Así, a comienzos de la centuria Nicolas Delamare —en su celebrado *Traité de la police*⁶²— fundamentó históricamente la conveniencia de

⁵⁹ PEDRO ANDRÉS PORRAS ARBOLEDAS, “Los reinos occidentales”, en: PEDRO ANDRÉS PORRAS ARBOLEDAS; ELOÍSA RAMÍREZ VAQUERO; FLOCEL SABATÉ I CURULL, *La época medieval: administración y gobierno*, Madrid, Istmo, 2003, p. 152; LUIS G. DE VALDEAVELLANO, *Curso de historia de las instituciones españolas*, Madrid, Alianza, 1984, p. 543.

⁶⁰ ANTONIO CÁCERES PACHECO, “Libellvs de Prætura Urbana” (1557), en: JUSTO GARCÍA SÁNCHEZ, *El arte del buen gobierno municipal. Reflexiones de Antonio Cáceres Pacheco. Apéndice facsimilar bilingüe del tratado DE PRÆTURA URBANA (Medina del Campo, 1557)*, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2000, §18, p. 383.

⁶¹ DIEGO SAAVEDRA FAJARDO, *Idea de un príncipe político cristiano en cien empresas*, Valladolid, Maxtor, 2004, empresa LXXIII, §7 y 8, pp. 293 y 294. Sobre la difusión de los escritos de Saavedra Fajardo, afirma Mariluz Urquijo que fue “uno de los autores políticos más leídos en España y América” (MARILUZ URQUIJO, *El agente...* cit., p. 175).

⁶² La obra de Delamare alcanzó una importante difusión en toda Europea; sin embargo, parece ser que fue poco considerado en el ámbito germánico y, en el caso español, ingresó a través de la obra del valenciano Tomás de Valeriola (PEDRO FRAILE, *La otra ciudad del Rey. Ciencia de policía y organización urbana en España*, Madrid, Celeste Ediciones, 1997, p. 15; CLIVE EMSLEY, *Crime, police, & penal policy. European Experiences 1750-1940*, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 63). Cuando Delamare falleció en 1723 se habían publicado apenas tres de los cuatro volúmenes de su tratado; el último volumen apareció

establecer la mencionada división mediante la exposición de una línea de evolución que comenzaba con los antiguos hebreos y terminaba en la contemporánea *Ville de Paris*, agregando que la misma razón que había llevado a todas las naciones bien disciplinadas a establecer junto a sus magistrados un cierto número de subdelegados para representarlos en sus funciones, les había aconsejado al mismo tiempo dividir cada una de sus poblaciones en diferentes porciones, y a distribuir las entre sus oficiales⁶³. La argumentación fue incluida en la glosa que el valenciano Tomás de Valeriola Rimbau realizó —y luego publicó entre 1798 y 1805— del tratado de Delamare, donde además, el glosador refiere “que cada cuartel de la ciudad de Roma estaba subdividido en muchos departamentos compuestos de cierto número de calles”⁶⁴.

Por su parte, Antonio Francisco Puig y Gelabert se refirió indirectamente a la cuestión de la organización del espacio urbano, elogiando —en su glosa de la obra de Johann Heinrich Gottlob von Justi titulada *Elementos generales de Policía*— el establecimiento de los alcaldes de barrio, pues a partir de su instauración se facilitó

el conocimiento de los individuos de las ciudades populosas. Se sabe en donde se hallan las gentes de mal vivir, se les observa sus acciones, y se puede fácilmente ocurrir a contener los más ligeros movimientos, producidos del rencor, ira, desazón o envidia, fomento principal de las mayores discordias y quimeras⁶⁵.

en 1738 gracias a Le Cler du Brillet, quien había colaborado con Delamare durante sus últimos años (FRAILE, *op. cit.*, p. 18), con el título de *Continuation du Traité de la police*. Probablemente, se trate de la obra que, con este título, aparece en el “inventario de los libros que había en la biblioteca de don Santiago de Liniers. Año de 1810” (GUILLERMO FURLONG, *Bibliotecas argentinas durante la dominación hispánica*, Buenos Aires, Huarpes, 1944, p. 132).

⁶³ “La même raison qui a porté toutes les Nations bien disciplinées, à établir auprès de leurs Magistrats un certain nombre de Subdéléguez, pour les représenter dans leurs fonctions, les a engagés en même temps à partager chacune de leurs Villes en différentes portions, & à les distribuer entre ces Officiers” (N. DELAMARE, *Traité de la police*, t. I, Amsterdam, Aux Dépens de la Compagnie, 1729, livre premier, titre septième, chapitre IX, p. 90).

⁶⁴ TOMÁS VALERIOLA, *Idea general de la policía o tratado de policía*, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1977, cuaderno I, título IV, p. 46, y título V, cap. II, p. 57; cuaderno segundo, cap. III, p. 69, cap. IV, p. 73 (cita), cap. VI, p. 80. La obra de Valeriola se compone de diez cuadernos, impresos en Valencia entre 1798 y 1805, siendo la edición manejada la primera en la que se reeditaron todos los cuadernos. Según Luis Jordana de Pozas, la obra de Valeriola fue “la última de las obras españolas que conocemos sobre la ciencia de la policía” y constituye una traducción de párrafos seleccionados de los dos primeros tomos del tratado de Delamare, a la que el valenciano agregó un “Tratado de la inoculación” —en virtud del posterior descubrimiento de la vacunación contra la viruela— y numerosas adiciones de legislación española y valenciana en la medida en que las enseñanzas del autor francés se habían instalado en el pensamiento español (LUIS JORDANA DE POZAS, “Presentación de la obra de Don Tomás Valeriola”, en: VALERIOLA, *op. cit.*, pp. XVII-XIX).

⁶⁵ JUAN HENRIQUE GOTTLÖB DE JUSTI, *Elementos generales de policía*. Trad. de Antonio Francisco Puig y Gelabert, Barcelona, [s. d.], 1784, lib. III, sección III, cap. XXI, § 348, p. 171.

Finalmente, se debe citar la obra intitulada *Instituciones políticas*, que fue compuesta por Jacob Friedrich, barón de Bielfeld, cuyo mérito era reconocido en la época y cuya circulación en el ámbito rioplatense ha sido debidamente señalada⁶⁶. Allí, este autor hamburgués, que desempeñó varios cargos al servicio de Federico el Grande, escribió que “el buen orden exige que todas las ciudades estén divididas en cuarteles”⁶⁷.

En virtud de lo expuesto, se comprende que dentro de este marco intelectual las autoridades porteñas se ocuparan de la cuestión desde 1734, época en que este criterio aún no se había observado para la ciudad de Madrid⁶⁸. En efecto: el 13 de mayo de aquel año la ciudad de Buenos Aires fue dividida en ocho unidades administrativas denominadas cuarteles, cada una de las cuales con sus respectivos barrios, cantidad que fue reducida a cinco cuarteles el 3 de febrero de 1762⁶⁹. Seis años después, el obispo

⁶⁶ Aunque no formaba parte de las bibliotecas conocidas de diversos funcionarios indianos (al respecto, v. por ejemplo los siguientes trabajos: DAISY RÍPODAS ARDANAZ, “Bibliotecas privadas de funcionarios de la Real Audiencia de Charcas”, en: *Memoria del II Congreso Venezolano de Historia (18 al 23 de noviembre de 1974)*, t. II, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1975, pp. 499-555; JOSÉ M. MARILUZ URQUIJO, “La biblioteca de un oidor de la Real Audiencia de Buenos Aires”, en: *Revista de Historia del Derecho*, n. 7, Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1955-1956, pp. 140-146; DAISY RÍPODAS ARDANAZ, “Los libros de un burócrata de la Ilustración: la biblioteca potosina de Francisco de Paula Sanz (1810)”, en: BARRIOS PINTADO, *op. cit.*, vol. II, pp. 1489-1515), la mencionada obra de Bielfeld circulaba en el Río de la Plata durante la época hispánica (FURLONG, *Bibliotecas argentinas...* cit., p. 125). La prensa periódica española afirmaba que “el mérito de estas *Instituciones* es universalmente conocido” (“Noticias críticas de obras nuevas”, en: *Memorial literario...* año primero, t. I, n. 2, Madrid, Imprenta de los señores García y Compañía, 1801, p. 25). Por su parte, la prensa colonial porteña lo reconocía como uno de los “más acreditados políticos de Europa en estos tiempos ilustrados” (“Carta sobre la necesidad de favorecer la exportación de frutos” [Continuación], en: *Semanario de agricultura, industria y comercio*. [1802-1807] [en adelante, *Semanario...*]. Edición fac-similar, Buenos Aires, Docencia, 2003, t. II, n. 88, 23 de mayo de 1804, pp. 303-304). Durante el período independiente, fue utilizada por la prensa local para explicar las consecuencias de las revoluciones (*Gaceta de Buenos Aires*, Buenos Aires, Docencia, t. IV (**), 2006, n. 24, 7 de octubre de 1815, pp. 372-373) y sus máximas fueron seguidas por los comisionados Pedro José Echegaray y Toranzo, José María García y Pedro José de Zavalla para gestionar ante el Director Supremo “la reparación de las pérdidas y quebrantos que en este mercado” sufría la industria vitivinícola (JOSÉ M. MARILUZ URQUIJO, *La industria sombrerera porteña 1780-1835. Derecho. Sociedad. Economía*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2002, 63-64). Para 1835, su obra continuaba siendo ofrecida al público porteño por la Librería Argentina (*Gaceta Mercantil*, a. XII, n. 3484, 15 de enero de 1835, p. 3 y a. XII, n. 3507, p. 3. Cfr. SANDRA LILIANA DÍAZ, “Los libros jurídicos en los avisos de la *Gaceta Mercantil* (1830-1852)”, en: *Revista de Historia del Derecho*, n. 29, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2001, pp. 225-265). Finalmente, se sabe que la obra se conocía en Chile, donde fue publicada parcialmente en un periódico de Santiago (*Semanario de Policía 1817-1818*, Santiago de Chile, Sociedad Filatélica de Chile, 1983, primer año, n. 4, 24 de septiembre de 1817, p. 1. Edición fac-similar).

⁶⁷ BARÓN DE BIELFELD, *Instituciones políticas: obra en que se trata de la sociedad civil, de las leyes, de la policía, de la real Hacienda, del comercio, y fuerzas de un Estado; y en general, de todo cuanto pertenece al gobierno*. Trad. de Domingo de la Torre y Molinedo, t. 1, Madrid, Imprenta de Gabriel Ramírez, 1767, 1ª parte, cap. VII, § IV, p. 197.

⁶⁸ TORRES, *op. cit.*, p. LXII; ROMAY, “Miscelánea”, cit., p. 148.

⁶⁹ TORRES, *op. cit.*, p. CVI; ALFREDO TAULLARD, *Los planos más antiguos de Buenos Aires 1580-1880*, Buenos Aires, Jacobo Peuser S. A., 1940, p. 56.

Manuel Antonio de la Torre consideró cuán difícil resultaba a los fieles concurrir a la iglesia parroquial —esto es la Catedral—, por lo que estimó conveniente rescatar un proyecto que había estado en danza desde 1730 y, con el apoyo del gobernador Francisco de Paula Bucareli, se resolvió dividir la ciudad en seis parroquias⁷⁰. Con esta primera división parroquial de la ciudad —confirmada por real cédula de 8 de julio de 1769— se crearon las parroquias de San Nicolás, Socorro, Concepción, Monserrat, La Piedad y La Catedral, que continuó siendo la iglesia matriz⁷¹. Al respecto, Ernesto Salvia recuerda que en la organización urbana de los tiempos hispánicos, las parroquias fueron centros alrededor de los cuales “se desarrollaron los poblados y villas, células vivas desde donde se evangelizaba y junto a la actividad religiosa y sacramental se enseñaba, se impartía el alivio, se curaba y hasta se le daba al vecino la sepultura final en el camposanto”⁷². En este sentido, Gabriel Di Meglio también reseña que las iglesias cumplían una importante función de “articulación espacial y social”, por lo que las parroquias tenían “una influencia mucho más marcada que la de los cuarteles sobre la vida cotidiana de los porteños”, a punto tal que las “parroquias” también eran llamadas “barrios”. Si bien esta denominación se usaba a veces para referirse a los “cuarteles”, en ocasiones hacía referencia también a pequeñas zonas que no respondían a ninguna de las divisiones mencionadas, como el “barrio del tambor”, el “barrio de las Catalinas”, ubicado junto a ese convento⁷³, o el barrio de la “plaza de Amarita”⁷⁴.

⁷⁰ ERNESTO R. SALVIA, “La primera división parroquial en la ciudad de Buenos Aires, 1769”, en: *Teología*, t. XLI, n. 78 (segundo semestre 2001), Buenos Aires, Pontificia Universidad Católica Argentina, 2001, pp. 211-213.

⁷¹ TAULLARD, *Los planos...* cit., p. 53. Se incluye el plano de dicha división en la fig. 1.

⁷² SALVIA, *op. cit.*, p. 211. Para Ramón Gutiérrez, los conventos “conformarían las estructuras de servicio de los ‘barrios’ de la ciudad. En ellos se localizaron los primeros centros educativos y de atención de salud con las boticas y sus feligreses acudían al convento para resolver los problemas no solamente espirituales sino de eventual apoyo material a través de préstamos que eran garantizados por censos e hipotecas sobre las propiedades urbanas o rurales” (RAMÓN GUTIÉRREZ, *Buenos Aires. Evolución urbana, 1536-2000*, Buenos Aires, Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana CEDODAL-Librería Concentra, 2014, p. 26).

⁷³ GABRIEL DI MEGLIO, *¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007, pp. 38-39. Como ejemplo de estas identificaciones podrían decirse informales de locales, calles y casas, Octavio Battolla menciona los ejemplos del “barrio recio, el rincón de las ánimas, la callejuela del pecado, el hueco de ña Engracia, el puente de las Granados, los cuartujos de Borbón, la esquina del peligro, el almacén del poste blanco” y “el hueco de las ánimas (hoy Banco de la Nación)” (OCTAVIO C. BATTOLLA, *Los primeros ingleses en Buenos Aires (1780-1830)*, s. l., Ediciones Espuela de Plata, 2004, pp. 21 y 33).

⁷⁴ En el expediente de 1805 promovido por los vecinos de la plaza de Monserrat solicitando se alzara la prohibición de la venta de trigo en ella, los firmantes manifestaron que “los vecinos que de Monserrate

La división de la ciudad utilizando un criterio “parroquial” continuó siendo defendida⁷⁵ a comienzos del siglo XIX. En un escrito titulado *De la policía*, sin autor ni fecha que se conserva entre los documentos de la sección *Archivo de Cabildo* correspondientes al año 1806, se da cuenta de lo

conveniente y útil [de] dividir la ciudad por parroquias, cuyos términos son conocidos por los parroquianos de cada una, debiéndose subdividir en más o menos comisarios, según la extensión de dichas feligresías, con asignación de tantas cuadras cúbicas a cada comisario, cuyo pie facilitará hacer los padrones y lista de moradores, pudiéndose confrontar en caso necesario con las matrículas que hacen los curas, las que son hoy más individuales, pues apuntan no sólo a los que están obligados al precepto anual, amos y criados, si también a los que por su edad no tienen dicha obligación⁷⁶.

En oportunidad de la realización del padrón poblacional de 1778 se realizó una nueva división de la ciudad; para facilitar la lectura de dicho padrón, Taullard reproduce un plano basado en el elaborado por Martín Boneo en 1780. Publicada originalmente en 1929, esta reconstrucción subdivide la ciudad en seis cuarteles⁷⁷; sin embargo, en los

[sic], por el decadente estado de su barrio, por las clausolas [sic] que han influido, y por los desembolsos con que se han distinguido a beneficio del público, tienen toda la preferencia a los de San Nicolás y Plaza Amarita” (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, *Documentos para la historia argentina*, t. IV [Abastos de la ciudad y campaña de Buenos Aires (1773-1809)], Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1914, p. 370).

⁷⁵ Como ejemplo de lo expresado, se citará el testimonio de un auto del fiel ejecutor en junta del gremio de panaderos de 2 de abril de 1791. En esa oportunidad, se estableció un método para que el público fuera servido “en este abasto”, estableciéndose los nombres de quienes deberían proveer el pan en el “barrio de la residencia”, el “barrio de La Piedad” y “Monjas Catalinas, Socorro y Recoleta” (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, *Documentos para la historia argentina*, t. IV, cit., p. 262). La identificación de ciertas áreas de la ciudad siguiendo un criterio “parroquial” continuaba aplicándose a comienzos de la centuria siguiente. Así, en un aviso publicado en 1801 en el *Telógrafo mercantil* se lee que “Juan Manuel González de Sandobal vende a tasación a dinero al contado o a censo redimible las especies siguientes: 6 casa de las varias que tiene situadas 2 en los barrios de la Merced frente a una imagen que está en la pared de la cerca del convento, y en una de las cuales vive el vendedor; 1 en [el] barrio de San Miguel; 1 en la calle de las Torres; 1 en [el] barrio de San Juan; y 1 junto a la Recoleta, llamada la Nueva Florida” (*Telógrafo mercantil*, El [1801-1802], Buenos Aires, Laffont, 1998. Edición en CD-ROM, t. II, n. 31, 29 de noviembre de 1801, f. 252).

⁷⁶ “De la policía”, sin autor ni fecha, en: AGN, IX, 19-7-2, s. f.

⁷⁷ TAULLARD, *Los planos...* cit. pp. 57-58; GUILLERMO FURLONG, *Cartografía Histórica Argentina. Mapas, planos y diseños que se conservan en el Archivo General de la Nación*, Buenos Aires, Comisión Nacional Ejecutiva de Homenaje al 150º Aniversario de la Revolución de Mayo, 1964, p. 64. Socolow coincide con Taullard, afirmando que “the city of Buenos Aires was divided into 6 zones (cuarteles) for the purpose of the 1778 census, but the merchant population was overwhelmingly concentrated in only two zones: 1 and 3. These two zones, considered to be the most elite districts, were in the center of the city, and surrounded the central plaza, the cabildo, the cathedral and the fort. In Buenos Aires, as in other Spanish cities, those persons with prestige, wealth and power tended to have homes close to the central plaza. Royal administrators and bureaucrats, professional men, high-ranking military officers and prominent clergy, made their homes in these two zones as well. Zones 2, 4, 5 y 6, by comparison, were inhabited by artisans and contained small factories and quintas” (SUSAN SOLOW, *The Merchants of Buenos Aires 1778-1810. Family and Commerce*, New York, Cambridge University Press, 2009, p. 72). En la calle de la Santísima Trinidad en la zona 1, vivieron Cecilio Sánchez de Velazco y Francisco de

acuerdos capitulares de 1778, se incluye una descripción de los cuatro cuarteles en los que se dividiría la ciudad a fin de verificar la realización de dicho padrón⁷⁸.

Posteriormente, a comienzos de 1788 los vecinos del barrio de La Piedad, cuya iglesia se localizaría en el futuro barrio número 18⁷⁹, elevaron una instancia para que el gobernador nombrase “un juez para que cele en dicho barrio los numerosos robos, quimeras y excesos criminosos que en él se cometen”. El cabildo informó sobre la petición al gobernador y, aunque se ignora el resultado que tuvo el caso⁸⁰, es posible que esta petición pueda haber tenido alguna influencia para la subsiguiente iniciativa que emprendería la Real Audiencia al año siguiente. Efectivamente, el 3 de enero de 1789 el regente de la Real Audiencia Benito de la Mata Linares remitió al ministro Antonio Porlier un “Reglamento de Cuarteles” de su autoría. En la oportunidad, Mata Linares le expresó que “en mérito a las desarregladas costumbres de lo ‘ínfimo de la plebe’ y frecuentes delitos que ocurrían en Buenos Aires” había compuesto el mencionado reglamento que, una vez comunicado verbalmente al virrey, redactó y sometió a la Audiencia⁸¹. Finalmente, lo ideado por Mata Linares culminó en el auto acordado de 11 de febrero de 1790 dado por el virrey Nicolás de Arredondo y el regente y oidores de la Real Audiencia Pretorial, Benito de la Mata Linares, Josef Caveza Enríquez, Sebastián de Velasco y Lorenzo Blanco y Cicerón, por el cual se establecía la división de la ciudad en cuatro cuarteles. Otro auto acordado de 5 de julio de ese mismo año estableció el detalle de los barrios que compondrían cada uno de los cuarteles, al frente de los cuales estarían los ministros de la Audiencia⁸².

Escalada, quienes ocuparon alcaldías de barrio (*Ibidem*, p. 216). El renombre de esta zona subsistió hasta entrado el siglo XIX; así, en 1821 *El Argos de Buenos Aires* se refería al “cuadrilengua que forma el círculo de las cuatro manzanas que giran al Norte S y O, desde la plaza de la Victoria” como al “cuartel de primera clase”, ya que “en su ámbito” residían “la mayor parte de los ciudadanos del primer orden” y donde tenían su sede el gobernador, la junta de representantes y demás autoridades. Asimismo, en su centro estaba la ya citada plaza, “a quien hermosean las casas consistoriales, la vistosa recova, el magnífico templo Catedral, el colegio seminario y bizarra pirámide”, además de la “Manzana de la luz” y varios templos, allí se situaban la aduana, consulado, correo, imprenta y demás lugares públicos (“Cuartel de la primera clase”, en: *El Argos de Buenos Aires*, n. 34, 24 de noviembre de 1821, p. 331).

⁷⁸ *Acuerdos...* Buenos Aires, 1929, 3ª serie, t. VI, pp. 275-277.

⁷⁹ V. fig. 2.

⁸⁰ *Acuerdos...* Buenos Aires, 1930, 3ª serie, t. VIII, p. 461.

⁸¹ EDUARDO MARTIRÉ, *Los regentes de Buenos Aires. La reforma judicial indiana de 1776*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1981, p. 254.

⁸² Para las dos disposiciones, v. Apéndice D, textos IX y XI, respectivamente. Para Mariluz Urquijo, sin embargo, la vinculación entre la Audiencia y los cuarteles en que se subdividió la ciudad data de

Poco tiempo después, el diputado de policía, capitán Martín Boneo, consideró insuficiente la medida y solicitó al cabildo que subdividiese la ciudad en veinte barrios⁸³. Mediante la instrucción provisional de 4 de enero de 1794, el virrey Nicolás de Arredondo determinó subdividir aquellos cuarteles en veinte barrios⁸⁴. Llama la atención, sin embargo, la persistencia que para entonces aún tenía en la ciudad la organización parroquial del espacio urbano: en los escritos de Juan Francisco Aguirre, cuyo contenido es calificado por Ernesto J. A. Maeder como “la única fuente de consideración” para el estudio de la población porteña entre el censo de 1778 y los padrones incompletos de 1810, el cronista manifiesta que para 1796 la ciudad se hallaba organizada en seis parroquias —Catedral, Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra Señora de Monserrat, Nuestra Señora del Socorro, Nuestra Señora de La Piedad y San Nicolás de Bari—, sin mencionar la reciente división en barrios aunque sí la existencia de los alcaldes de barrio. Probablemente, el propio Aguirre brinda la razón de ello cuando recordaba que “tal vez el año de 1793 se completó un padrón por los alcaldes de

noviembre de 1809 (JOSÉ M. MARILUZ URQUIJO, “La Real Audiencia de Buenos Aires y el Juzgado de Provincia”, en: *Memoria del II Congreso venezolano de Historia, del 18 al 23 de noviembre de 1974*, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1975, p. 150).

⁸³ TAULLARD, *Los planos...* cit., p. 61; *Acuerdos...* Buenos Aires, 1932, 3ª serie, t. X, pp. 292-293.

⁸⁴ Arredondo, Nicolás de, “Memoria a su sucesor don Pedro Melo de Portugal y Villena”, Buenos Aires, 16 de marzo de 1795, en: *Memorias de los virreyes del Río de la Plata*, Buenos Aires, Editorial Bajel, 1945, p. 382; TAULLARD, *Los planos...* cit., p. 68. La mencionada instrucción, en: Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), IX, 19-4-8, fs. 54-55v. Según Furlong, como complemento de ella, existió un impreso titulado “División de la ciudad de Buenos Aires en cinco cuarteles al cargo de los cinco señores alcaldes del crimen, a quienes en caso de vacante, enfermedad o ausencia suplen los señores alcaldes ordinarios: a cada uno de los cinco se le asignan cuatro de los veinte barrios en que está distribuida la ciudad, y según sus órdenes y bajo su jurisdicción obrarán los respectivos alcaldes de barrio, con arreglo a la instrucción que por disposición del supremo gobierno se ha formado” (GUILLERMO FURLONG ET AL., *Historia y bibliografía de las primeras imprentas rioplatenses*, t. II, Buenos Aires, Librería del Plata, 1955, p. 146). Hasta el momento, no se encontró ejemplar alguno de este impreso. Sin embargo, quizás se trató de una organización que no llegó a materializarse, ya que en la cláusula introductoria de su instrucción de 22 de noviembre de 1809, Cisneros decide establecer cuarteles: “Ha parecido indispensable, para cortar abusos tan perniciosos, prevenir el remedio conveniente a semejantes excesos y establecer para lo sucesivo un orden fijo y proporcionado a asegurar la tranquilidad y reposo a que son acreedores los honrados vecinos de esta capital; que se lleve a efecto aquel establecimiento dividiendo el territorio de esta ciudad en cuarteles como se ha practicado en todas la en [sic] que residen Chancillerías y Audiencias, asignado uno a cada uno de los señores alcaldes del crimen y supliendo en sus vacantes ausencias o enfermedades. Los señores alcaldes ordinarios, a cuyo cargo estarán cuatro de los barrios de los veinte en que se subdivide la población y bajo su jurisdicción los cuatro alcaldes de barrio respectivos a ellos, según demuestra el plan adjunto que se imprimirá a principio de cada año sin más variación que la que ocurra en los nombres de los electos para dichos empleos” (“Instrucción para gobierno y desempeño de los alcaldes de barrio en el ejercicio de sus empleos” del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, 22 de noviembre de 1809, cláusula introductoria [V. Apéndice D, texto XIV]). El “plan adjunto” a imprimirse, en: AUGUSTO E. MALLIÉ (COMP.), *La Revolución de Mayo a través de los impresos de la época*, t. I, Buenos Aires, Comisión Nacional Ejecutiva del 150º Aniversario de la Revolución de Mayo, 1965, p. 237. Sobre la disposición de los mencionados veinte barrios, v. fig. 3.

barrio, aunque no de tanta jurisdicción como la parroquial, pero no le pude alcanzar, ni existe”⁸⁵.

Una nueva instrucción para los alcaldes de barrio, dictada por el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros el 22 de noviembre de 1809, volvió a dividir la ciudad en cinco cuarteles y veinte barrios⁸⁶. La medida de Cisneros se efectivizó mediante el bando de 14 de diciembre de ese año, en cuyo texto el virrey manifestó que este “establecimiento de cuarteles” había sido formado por su “disposición para el mejor orden, quietud, sosiego y seguridad pública de esta capital”. A tal fin, decidió dividir la ciudad “en cinco cuarteles con cuatro barrios a cada uno, a cargo de los señores ministros de esta Real Audiencia”⁸⁷.

De cualquier manera, parece ser que, al mismo tiempo, los diferentes barrios se designaban con nombres tales como San Nicolás, Monserrat y Concepción, reflejando en parte la ya mencionada división parroquial de 1769⁸⁸. Aparentemente, esta configuración del espacio urbano no cumplió con las expectativas del nuevo virrey, pues a comienzos del año siguiente el propio Cisneros habría propuesto hacer una nueva división de la ciudad en “nueve cuarteles o barrios”⁸⁹.

De la división realizada por Cisneros en 1809 sólo se mantuvo, una vez producida la Revolución de Mayo, la organización en veinte barrios establecida en 1794 por Arredondo, aun cuando continuaba vigente el contenido de la instrucción de

⁸⁵ Los escritos aludidos de Juan Francisco Aguirre son *Suplemento al Diario de Aguirre, Cuaderno de notas para la corrección del Diario*, y una *Compilación* de 85 documentos (ERNESTO J. A. MAEDER, “Un estudio inédito sobre la población de Buenos Aires en 1796”, en: *VI Congreso Internacional de Historia de América (Buenos Aires, 13-18 octubre 1980)*, t. IV, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1982, p. 80 y ss.).

⁸⁶ “Instrucción para gobierno y desempeño de los alcaldes de barrio en el ejercicio de sus empleos” del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, 22 de noviembre de 1809, cláusula introductoria (V. Apéndice D, texto XIV). Para esta nueva distribución en cuarteles y barrios, v. figs. 3 y 4.

⁸⁷ Bando del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, 14 de diciembre de 1809 (V. Apéndice D, texto XV). El mandamiento fue acompañado de un impreso con la distribución de cuarteles y barrios, cuya reproducción se incluye en la fig. 4.

⁸⁸ Existe en el Archivo General de la Nación un documento datado por personal de ese repositorio el 23 de enero de 1810, en el que se detalla una lista de los alcaldes o comisionados para los diferentes barrios de la ciudad, de los cuales se incluyen sólo trece: San Juan, Concepción, Monserrat, Alto de San Pedro, Hospital de Belem, Santo Domingo, San Francisco, Plaza, Merced, Catalinas, San Nicolás, San Miguel y Corre [sic] (AGN, IX, 19-6-2, f. 23).

⁸⁹ Bando de buen gobierno e instrucción expedida para el desempeño de los alcaldes de barrio del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Buenos Aires, [enero de 1810], cláusula introductoria (A. Apéndice D, texto XVII). Siendo la única referencia hallada sobre esta nueva división, probablemente no llegó a ponerse en práctica.

Cisneros⁹⁰. Con la designación de los nuevos alcaldes de barrio en agosto de 1810 se continuó con la misma distribución urbana⁹¹.

Hacia finales de 1810, la Junta Gubernativa encargó a Tomás Grigera la organización de trece nuevos cuarteles, cuyo detalle se conserva entre los papeles del archivo de cabildo correspondiente a 1810⁹². Sobre los criterios usados y el objetivo que se propuso, el propio Grigera se manifestó unos meses después, expresando que

Comisionado yo por la excelentísima Junta Provisional Gubernativa de estas provincias para la demarcación de cuarteles en las quintas de esta capital, para el arreglo de su policía con sujeción a las órdenes que se sirvió librar, y para proponer los sujetos que debían encargarse respectivamente del celo de su tranquilidad y buen orden, dividi en doce departamentos la población que hay desde Barracas hasta el bajo de la Recoleta, y desde las inmediaciones de la Plaza de Lorea hasta el curato de San José. Dicha superior disposición ha producido tan conocidos beneficios, que sobre haber desterrado vagos y mal entretenidos que antes ocasionaban continuos disgustos con insultos, robos y otras criminalidades, los vecinos y propietarios recogen el fruto de sus labores porque han cesado también las arbitrariedades y abusos que lo impedían, causándoles insoportables perjuicios.⁹³

En el detalle de estos nuevos cuarteles se incluían también los nombres de los candidatos que podrían desempeñar dichas alcaldías: así, por ejemplo, los nombres de Fernando Almada y Josef Mármol aparecen en la descripción de los cuarteles 21 y 22, respectivamente. La única medida que fue tomada en relación a lo presentado por Grigera habría sido la designación de Almada y de Mármol al frente de dos nuevos cuarteles el 24 de septiembre de 1810. En la justificativa de las razones que motivaron la medida, la Junta manifestó su deseo de “extender a los arrabales y quintas de esta capital los conocidos beneficios que han resultado a lo interior de la ciudad del nombramiento de alcaldes de barrio y distribución de cuarteles”. En consecuencia, nombró a Almada

por alcalde de barrio del cuartel que deberá designarse con el número 21 y se extenderá desde la casa del finado don Victoriano de la Casa, mirando al norte hasta lo de don Isidro Vega, desde la cual se tirará al oeste hasta la de don Inocencio Ferrazes, y de esta hacia el sur hasta la casa y horno de don Manuel Rosales, y de allí al leste hasta la ya referida de don Victoriano de la Casa⁹⁴.

⁹⁰ AGN, X, 2-2-5, fs. 283-285.

⁹¹ “Instrucciones que los nuevos alcaldes de barrio deberán observar rigurosamente”, Buenos Aires, 7 de agosto de 1810 (V. Apéndice D, texto XXIII).

⁹² AGN, X, 2-2-6, fs. 256-258v.

⁹³ Tomás Grigera al cabildo, Buenos Aires, 14 de marzo de 1811, en: AGN, IX, 19-6-3, fs. 110-110v.

⁹⁴ La Junta a Fernando Almada, Buenos Aires, 24 de septiembre de 1810, en: AGN, X, 2-2-6, fs. 259-259v.

A su vez, Mármol pasó a desempeñarse como alcalde de barrio del cuartel 22, el cual

Se extenderá desde la casa de don Valeriano Barrera, mirando al norte hasta la casa de don Manuel Sandoval, y de allí hasta la lengua del agua, siguiendo siempre el rumbo del norte, y desde la mencionada casa de don Valeriano, mirando al oest[e] hasta la esquina de don Ignocencio [sic] Ferrazes, y de allí tirando al norte siguiendo el arroyo y bajo la lengua del agua⁹⁵.

Fuera de los nombramientos de Almada y Mármol, la propuesta de Grigera no parece haber merecido más atención sino hasta dos años después, a pesar del hecho de que Grigera elevó a la Junta en 1811 un proyecto con el objetivo de crear un nuevo cuartel⁹⁶. Sin embargo, y curiosamente haciendo caso omiso de la existencia de las alcaldías de barrio correspondientes a los cuarteles 21 y 22, a comienzos de 1812 se resolvió agregar trece cuarteles a los veinte “que anteriormente había en esta ciudad, y corresponden a los números 21 a 33 ambos inclusive”⁹⁷. En marzo de ese mismo año, el cabildo determinó

⁹⁵ AGN, IX, 19-6-6, f. 140.

⁹⁶ “Demostrado por la experiencia las ventajas que acarrea la policía adoptada, he creído de mi deber demarcar otro cuartel que comprenda desde la Chacarita hasta la capilla de los Santos Lugares, y desde estos dos puntos hasta el bajo del río. En el centro de esta proporcionada distancia tiene su hacienda de campo y reside en ella don Pedro Sebastiani, a quien por su notoria probidad, inteligencia y patriotismo puede nombrarse de juez comisionado para establecer y hacer observar las providencias nuevamente libradas, y principalmente la que se dignó dictar la excelentísima Junta, ordenando que los ganados se mantengan todo el año con pastor y en encierro de noche, pues la inobservancia de esta sabia disposición es causa de que no se fomenten los plantíos de montes, de que se menoscaben y arruinen los que hay, y de que en todos los ramos de agricultura se experimenten daños de la mayor consideración. Si, como es de creer, piensa vuestra excelencia disponer que toda la campaña se divida en cuarteles de moderada extensión, y particularmente las tierras destinadas a la siembra de granos para entablar así su arreglo y conseguir los benéficos fines que son consiguientes a él, nadie mejor que don Pedro Sebastiani podrá dar ideas acertadas sobre ello y proponer los sujetos a propósito para comisionados de los que se formen, pues a más de los excelentes principios que lo recomiendan, tiene los conocimientos que le ha proporcionado la experiencia en los muchos años que hace que vive dedicado al ejercicio de labrador en su casa de campo”. (Tomás Grigera al cabildo, Buenos Aires, 14 de marzo de 1811, en AGN, IX, 19-6-3, fs. 110-110v.). Aparentemente, la propuesta fue seguida de otras, en las que se incluían los nombres de los que podría ocupar las nuevas alcaldías de barrio: “A consecuencia de orden que pasó esta Junta al alcalde de barrio principal don Thomas Grigera ha arreglado otros barrios y nombrado los alcaldes de ellos, cuya nómina aún no ha formalizado. Y habiéndolos traído desde luego para que presten el juramento que debe preceder a la posesión y ejercicio de sus cargos, el cual es urgente, lo previene la misma Junta a vuestra excelencia para que les reciba dicho juramento y ponga en uso de los mismos cargos” (La Junta al cabildo, Buenos Aires, 22 de mayo de 1811, en: AGN, IX, 19-6-3, f. 139).

⁹⁷ *Acuerdos...* Buenos Aires, 1928, 4ª serie, t. V, 1928, p. 29. Al respecto, Levene recuerda el papel de Tomás Grigera, mas omitiendo el encargo y presentación que éste había realizado en 1810, expresando que como consecuencia del movimiento del 5 y 6 de abril se produjo “un ensanche político de la ciudad con los nuevos alcaldes de barrio, correspondientes a los cuarteles de las quintas” (RICARDO LEVENE, “La asonada del 5 y 6 de abril ...” cit., p. 311). En abril de 1814 se hacía referencia a “los alcaldes de extramuros de los cuarteles desde el número veinte arriba” (*Acuerdos...* Buenos Aires, 1929, 4ª serie, t.

dividir la ciudad y sus arrabales en cuatro secciones. La primera, comprensiva de los cuarteles números 1, 2, 3, 8, 9 y 10. La segunda del Sur de ocho cuarteles, cuatro de la ciudad números 4, 5, 6 y 7, y cuatro de las quintas números 25, 26, 27 y 28. La tercera del Norte con los seis cuarteles de la ciudad números 11, 12, 13, 18, 19 y 20, y cuatro de las quintas números 21, 22, 23 y 24. La cuarta del Sur de los cuatro cuarteles de la ciudad números 14, 15, 16 y 17, y cuatro de las quintas números 29, 30, 31 y 32, tomando por divisorias para dichas secciones la calle de cabildo Leste Oeste y la de San Juan Norte Sur⁹⁸.

Como en el documento elevado por Grigera en 1810, nada se dijo en ese momento sobre el cuartel número 33, correspondiente al partido de San José de Flores⁹⁹, donde ya se había designado un alcalde de barrio y tomado el correspondiente juramento¹⁰⁰.

VI, p. 135). Eso coincide con la "explicación de cuarteles" que figura en el "plano de la ciudad y ejido de Buenos Aires" diseñado en 1817 por José María Manso y para el que colaboraron también los alcaldes de barrio (*Acuerdos...* Buenos Aires, 1930, 4ª serie, t. VII, p. 483; AGN, IX, 19-6-11, f. 98). En dicha explicación, Manso identificaba diecinueve cuarteles como pertenecientes a la planta urbana, e incluía el detalle de los propietarios "de las quintas, chacras y huertas del suburbio de la ciudad, que corresponden a los cuarteles comprendidos desde el número 20 al 32" (TAULLARD, *Los planos...* cit., p. 123). Aún así, la "instrucción circular para los alcaldes de barrio" de 5 de enero de 1813 todavía hacía referencia, en su artículo 45, a los veinte cuarteles de la ciudad (V. Apéndice D, texto XXX).

⁹⁸ *Acuerdos...* Buenos Aires, 1928, 4ª serie, t. V, p. 98. Sobre la localización aproximada de cada uno de estos nuevos cuarteles, v. fig. 5.

⁹⁹ *Acuerdos...* Buenos Aires, 1929, 4ª serie, t. VI, p. 14. Había también allí un alcalde de la Hermandad (*Ibidem*, p. 13). Sobre las atribuciones del alcalde de barrio y del alcalde de la Hermandad de este cuartel, v. *Ibidem*, p. 16, y *Acuerdos...* Buenos Aires, 1930, 4ª serie, t. VII, pp. 26-27 y 41-42.

¹⁰⁰ *Acuerdos...* Buenos Aires, 1928, 4ª serie, t. V, pp. 29 y 40. Se designaron alcaldes de barrio para el cuartel número 33 en 1812, 1814, 1815, 1816 y 1817. Según sugiere la documentación, durante 1813 la alcaldía de barrio habría sido ocupada por Eduardo Pereira, quien era al mismo tiempo alcalde de barrio del cuartel número 28 (AGN, IX, 19-6-5, fs. 33-33v.) (V. Apéndice A). Sin embargo, para 1815 el partido de San José de Flores integraba el primer departamento de la campaña junto con los de Morón, Matanza, Quilmes, San Isidro, San Fernando y Conchas (*Gaceta de Buenos Aires*, t. IV (*), n. 10, 1º de julio de 1815, p. 300), situación en la que también figuraba en 1821 (*Gaceta de Buenos Aires*, t. VI (**), n. 50, 11 de abril de 1821, p. 233). El 14 de julio de 1816 un bando de la Excelentísima Comisión Gubernativa interina de la dirección del Estado ordenó —en su artículo 4º— la confección de "un padrón de toda la esclavatura comprendida en los 33 cuarteles de la ciudad" (Original manuscrito en: AGN, X, 2-10-6, fs. 94-97; original impreso en: *Bandos, proclamas y folletos (1812-1819)*, en Biblioteca Nacional, TES 3A, 05-4-6-27 [n. inv. del doc.: 9003]; también en: *Gaceta de Buenos Aires*, t. IV (**), n. 65, 27 de julio de 1816, pp. 581-582), cuando en realidad lo correcto habría sido contabilizar 34 en función de la subdivisión del cuartel número 5 (V. *infra*). Al respecto, José María Sáenz Valiente indica que con el añadido del cuartel número 5 agregado "no aumentó, sin embargo, el número de los alcaldes de barrio porque este año no se proveyó el cargo en el cuartel 33. Al año siguiente la ciudad contó con treinta y cuatro de estos funcionarios, pero como desde el 1º de enero de 1818 dejó de nombrarse el alcalde correspondiente al cuartel 33º que formaba parte del partido de San José de Flores, al cual le correspondía un alcalde de la Hermandad, el número de aquéllos se redujo a treinta y tres" (JOSÉ MARÍA SÁENZ VALIENTE, *Bajo la campana del cabildo*, Buenos Aires, Guillermo Kraft Ltda., 1952, p. 207). Además, en el inventario de bienes del cabildo elaborado con motivo de su supresión figura "un plano topográfico con su marco comprehensivo de los treinta y tres cuarteles de la ciudad" y que estaba en posesión del síndico (OSCAR LUIS ENSINCK, *Propios y arbitrios del cabildo de Buenos Aires 1580-1821*, Madrid, Instituto de Cooperación Iberoamericana-Instituto de Estudios Fiscales, 1990, p. 480).

Algunos meses después, el trazado urbano porteño sufrió una nueva modificación. Efectivamente, el 22 de septiembre de 1813, se recibió en el cabildo un oficio del intendente de policía en el que este último exponía “haberle representado verbalmente el alcalde del cuartel número 5 la necesidad de dividir el cuartel por ser muy dilatado, y su extensión enerva las providencias ejecutivas que deben tomarse”¹⁰¹. En virtud de ello, el mencionado intendente recomendó “por justa la solicitud”, concluyendo “con que puede muy bien dividirse en conformidad del detall[e] que describe el alcalde por sus conocimientos”. Por su parte, el alcalde de barrio peticionante expuso en su informe que el cuartel debería “dividirse en la plaza de la Residencia sobre la izquierda, esquina de don Jacinto Oliden, manzana número 6, quedando de este modo cada alcalde con seis cuadras de largo y tres de ancho”¹⁰². Con estos documentos, los capitulares ordenaron dividir el cuartel en los términos propuestos, “prefijándose al que nuevamente se establece el número 5 y medio, para evitar de este modo el trastorno que de otro modo causaría en la numeración de los demás cuarteles”¹⁰³. El nuevo cuartel necesitaba su alcalde, cargo para el que se designó a Mariano Blanco¹⁰⁴, quien se posesionó el 26 de octubre¹⁰⁵.

I. 2. Indicación de manzanas y calles

Sin hallarse especificación alguna respecto a la identificación física de las calles de la ciudad, aparentemente fue entre 1734 y 1742, durante la administración del gobernador y capitán general Miguel de Salcedo y Sierraalta, cuando se dieron nombres a las calles de la ciudad¹⁰⁶. Hasta entonces, se sabe que la nomenclatura de las mismas se basaba en los nombres de los Santos¹⁰⁷, aunque parece ser que algunas se conocían al

¹⁰¹ El intendente de policía, Clemente Díez de Medina, al cabildo, Buenos Aires, 22 de septiembre de 1813, en: AGN, IX, 19-6-5, f. 275.

¹⁰² AGN, IX, 19-6-5, f. 276.

¹⁰³ *Acuerdos...* Buenos Aires, 1928, 4ª serie, t. V, pp. 654-655.

¹⁰⁴ *Acuerdos...* Buenos Aires, 1928, 4ª serie, t. V, p. 655.

¹⁰⁵ En el acuerdo se expresa que Mariano Blanco “se recibió de alcalde del cuartel *número cinco agregado*” [bastardilla en el original] (*Acuerdos...* Buenos Aires, 1928, 4ª serie, t. V, p. 675). El cuartel aparece con la misma denominación en la aprobación que el Triunvirato dio a la división del cuartel el 14 de octubre de 1813 (AGN, IX, 19-6-5, f. 289) y en la notificación que Blanco firma en el texto de una circular de 9 de diciembre de 1813 (AGN, X, 32-10-1, parte 1, f. 42 v.).

¹⁰⁶ “De la policía”, sin autor ni fecha, en: AGN, IX, 19-7-2, s. f.

¹⁰⁷ TAULLARD, *Los planos...* cit., pp. 47 y 54.

mismo tiempo por otros tipos de referencias que incluían iglesias, plazas y casas de vecinos conocidos¹⁰⁸. Durante la gestión de Salcedo se produjo el “bautizo formal” de las calles de la ciudad, aunque la nomenclatura fue tomada del santoral en consonancia con la devoción de la población. En otros casos, las calles recibieron nombres

de acuerdo a la ubicación que con respecto a ellas tenían algunos edificios de significación. Tales fueron, entre otras, la de las Torres, en la que se levantaba la antigua Catedral, con sus dos torres que dominaban el lugar; la de la Compañía, en la que estaban la iglesia de los Jesuitas –San Ignacio— y el Colegio¹⁰⁹.

Durante la administración del gobernador Francisco Bucarelli y Ursúa, en 1769, se decidió red denominar algunas vías urbanas, reemplazando el nombre de algunos santos por otros. De este modo, la calle de Santo Tomás pasó a llamarse San Miguel; la de San Bernardo, Santa Catalina; y la de San Juan Bautista, San Carlos. Además, la calle del Fuerte se denominó Santo Cristo, y la calle Mayor, San Martín, en alusión al santo patrono de la ciudad¹¹⁰. Sin embargo, parece ser que estas denominaciones no arraigaron pues, en el ya citado plano confeccionado para la lectura del padrón de 1778 se consignan los nombres vulgares que se daban a algunas calles, subsistiendo todavía la asociación de la calle con alguna figura pública o establecimiento conocido; y en el caso de la recientemente designada Santo Cristo, su nueva designación como calle Nueva:

Calle Nueva en lugar de Santo Cristo.
Calle de San Francisco en lugar de San Martín.
Calle de don Pablo Thompson en lugar de San Pedro.
Calle de Merlo en lugar de San Juan.
Calle del retiro en lugar de San Juan.
Calle que pasa por detrás de Monserrat en lugar de San Pablo.
Calle de San Miguel en lugar de Piedad.
Calle que sigue a la de Santa Teresa en lugar de Santiago.
Calle de las Catalinas en lugar de Santa Catalina.
Calle de la cancha de Matorras en lugar de Santa Rosa.
Calle que sigue después de la cancha de Matorras en lugar de Santo Tomás.
Calle de Cueli en lugar de Santa María.
Calle de San Juan en lugar de San Carlos.
Calle de la Provisión en lugar de San Francisco.
Calle detrás de Santo Domingo en lugar de Rosario y de San Bartolomé.
Calle de Hospital en lugar de San Andrés.

¹⁰⁸ JORGE OCHOA DE EGUILEOR, “Prólogo”, en: *Manual de Buenos Aires 1823*, Buenos Aires, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1981, p. I; DI MEGLIO, *op. cit.*, p. 39.

¹⁰⁹ OCHOA DE EGUILEOR, *op. cit.*, p. II.

¹¹⁰ *Ibidem.*, p. III.

Calle de Salgado en lugar de San Fermín.

Calle de la quinta del alcalde provincial Diego Mantilla en lugar de Santa Bárbara¹¹¹.

Posteriormente, se produjeron algunos cambios puntuales en relación a la redacción de los nombres de algunas calles: así, la calle Cabildo pasó a designarse como "Del Cabildo", y la calle Torres, "De las Torres"¹¹².

La primera mención encontrada —en el período estudiado— sobre la cuestión de la indicación de las casas de la ciudad data de 1783. En noviembre de ese año, el entonces virrey Juan José de Vértiz y Salcedo dirigió un oficio al cabildo ordenándole que, en virtud de las "muchas razones para el buen régimen de los pueblos, singularmente de las ciudades grandes, que sus casas estén numeradas por calles", designase un regidor para que, conjuntamente con un oficial de ingenieros, indicara al jefe de éstos, Carlos Cabrer, disponer

se verifique esta operación poniendo sobre cada puerta de casa el número que le corresponde empezando de uno en adelante por la de Leste a Oeste, y lo mismo por las de Norte a Sur, escribiendo en el principio y fin de cada calle destas principales el nombre de ella para que por él sea conocida, y después cada casa por su numeración, para lo que se usará del tinte negro o encarnado que se considere más permanente¹¹³.

El 15 de noviembre el cabildo envió el oficio al síndico procurador general, quien expresó que aunque "el pensamiento es importante y útil", reservaría su dictamen hasta que el ingeniero don Carlos Cabrer regulase los gastos que dicha operación

¹¹¹ TAULLARD, *Los planos...* cit., pp. 58-59. Aparentemente, la pervivencia de la denominación Santo Cristo para la calle del Fuerte podría haber sido bastante efímera: en efecto, en el "expediente sobre las obras voluntarias hechas por el gobernador de Buenos Aires, informado por la Contaduría, y respondido por el señor fiscal" de 1771, se menciona que a su llegada a la ciudad, Bucareli y Ursúa "reconoció que las calles terminaban en barrancas, y que la Fortaleza estaba también por la parte del norte cercada de peñascos ásperos y quebrados, y que no había más bajadas que unas estrechas sendas, por donde aun a pie no podían pasar dos personas juntas". Frente a ello, llamó al ingeniero Juan Bartolomé Howel, "quien le contestó la gravedad de estos defectos, ya para la Fortaleza porque embarazaban el fuego de la artillería, ya para la ciudad porque las calles no concluían en perfección, sino que terminaban en aquellas fragosidades que a poca costa se podrían allanar aplicando a los [sic] obras los presidiarios". Al término de las tareas emprendidas para solucionar la situación, el expediente da cuenta que "hasta aquel tiempo no había en la ciudad quien no elogiase la obra. Que lo mismo fue allanarse una o dos bajadas, que tomar el público por desahogo y diversión el paseo de ellas, y de la calle que se allanó, llamándola la calle nueva" ("Año de 1771. Expediente relativos a las obras públicas hechas en la ciudad de Buenos Aires por el gobernador de dicha provincia don Francisco Bucareli y Ursúa, como arreglo de sus calles y paseos, etc.", en: ENRIQUE PEÑA, *Documentos y planos relativos al período edilicio colonial de la ciudad de Buenos Aires*, Buenos Aires, Municipalidad de Buenos Aires, 1910, t. II, pp. 119-120).

¹¹² OCHOA DE EGUILLEOR, *op. cit.*, p. III.

¹¹³ Juan Joseph de Vértiz al cabildo, Buenos Aires, 10 de noviembre de 1783, en: AGN, IX, 19-3-2, fs. 448-448v.; *Acuerdos...* Buenos Aires, 1930, 3ª serie, t. VII, p. 264.

costaría¹¹⁴. Como resultado, el expediente fue pasado al virrey con el fin de ordenar al mencionado Cabrer realizar el

cálculo de los gastos que forzosamente podrán imponderse en aquella operación, a fin de que este ilustre cabildo pueda proporcionar los medios para poderlos completar con aquellos arbitrios y recursos que permita la cortedad de sus propios, por ser asunto interesante al bien público¹¹⁵.

Aparentemente, el informe del ingeniero se completó en febrero de 1784¹¹⁶. En ese mismo mes, el virrey Vértiz dictó una “Instrucción que debe observarse para la composición uniforme de las calles de esta ciudad” estableciendo, en sus artículos 20 y 21, los criterios y formas que deberían seguirse a la hora de establecer los nombres de las calles y la identificación de las casas:

[20] Las calles deberán nombrarse de norte a sur y de leste a oeste por los nombres que hasta hoy tengan, poniéndose en las esquinas de cada una un cuadro de piedra o de madera embutido en la pared con letras claras de modo que se hagan legibles a una regular distancia; y las que salgan directamente a la plaza principiarán sus nombres desde ella hasta la salida, debiéndose contar su composición por ahora desde las cuatro cuadras en contorno a la misma plaza, a excepción de aquéllas que continuasen con más edificadas enteramente de casas, porque en ellas ha de hacerse la misma composición que en las demás, en atención a no carecer de vecindario.

[21] Para hacer más cómoda la inteligencia de las mismas calles en la necesidad de buscar alguna casa, se distinguirán en ellas con nombre de cuadra las [sic] dos frentes de cada una; y para recompensar el trabajo, esmero y actividad de los respectivos diputados de éstas por el cuidado en su composición a beneficio y utilidad del mismo vecindario, se pondrá en cada una de ellas otra tarjeta igual a la de las calles con el apellido del diputado, para que distinguiéndose y conociéndose en lo sucesivo por él perpetuamente, quede en ella y en honor suyo la memoria de este servicio hecho a favor de sus convecinos¹¹⁷.

¹¹⁴ Francisco Bruno de Rivarola al cabildo, Buenos Aires, 25 de noviembre de 1783, en: AGN, IX, 19-3-2, fs. 449-449v. El 29 de agosto de 1783 Rivarola dictaminó en un expediente –iniciado por el virrey Vértiz– sobre trazado, construcción e higiene de las calles de la ciudad; nada dijo entonces sobre la numeración de casas (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, *Documentos para la historia argentina...* t. IX, cit., pp. 77-83). V. también JOSÉ M. MARILUZ URQUIJO, “El Doctor Francisco Bruno de Rivarola y su obra”, en: FRANCISCO BRUNO DE RIVAROLA, *Religión y fidelidad argentina*. Est. Preliminar de José M. Mariluz Urquijo, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1983, pp. 19-20.

¹¹⁵ El cabildo al virrey, Buenos Aires, 10 de noviembre de 1783, en: AGN, IX, 19-3-2, f. 450; *Acuerdos...* Buenos Aires, 1930, 3ª serie, t. VII, p. 275.

¹¹⁶ Cabrer, por su parte, manifestó a Vértiz en febrero de 1784 que “para que yo calcule el importe de esta obra es particular que mejor puede verificarlo el mismo cabildo según determine la numeración; porque siendo sólo con pincel, es cosa de muy poca monta y poco durable; si con cincel la mayor comodidad podrá resultar por contrata, y lo mismo si la determina con obra de alfarero bernisada” (AGN, IX, 19-3-2, f. 452).

¹¹⁷ Juan José de Vértiz, “Instrucción que debe observarse para la composición uniforme de las calles de esta ciudad por los sujetos que el vecindario de cada una de ellas nombre y encargue en sus respectivos distritos para el desempeño de los puntos que aquí se prefijan, y para cuyo efecto quedan autorizado[s] por el gobierno las que se disputen a este fin, a quienes se auxiliará por las justicias y demás en cuanto necesiten”, Buenos Aires, 4 de febrero de 1784, en: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, *Documentos para la historia argentina...* t. IX, cit., p. 106.

Sin embargo, ya terminada la administración de Vértiz, su sucesor, Nicolás de Arredondo, solicitó al cabildo que informase sobre la cuestión¹¹⁸. Con el pedido del nuevo virrey, sumado a lo establecido por el auto acordado dictado por él mismo conjuntamente con el regente y oidores de la Real Audiencia Pretorial el 11 de febrero de ese año¹¹⁹, en 26 de abril de 1790 el cabildo remitió el expediente nuevamente al síndico para su consideración¹²⁰. Lo cierto es que la "Instrucción metódica" dada para los alcaldes de barrio el 28 de junio de ese año estableció, en su artículo décimo, la obligación de dichos agentes de cuidar "de que a costa de los pulperos se ponga en cada esquina un azulejo con el nombre de la calle"¹²¹.

No obstante lo expuesto, las referencias históricas sobre la cuestión publicadas en el período independiente ignoran la existencia de antecedentes durante el siglo XVIII, indicando que la primera iniciativa se habría debido al virrey Santiago de Liniers, quien "mandó o influyó en el cabildo para que se fijasen en las calles los nombres de los vecinos y de los jefes y oficiales que se distinguieron en las acciones del 12 de agosto de 1806 y del 5 de julio de 1807", aunque en realidad "los que se inscribieron fueron en la mayor parte españoles europeos"¹²². Coincide con esa

¹¹⁸ "Habiéndoseme traído ahora a la vista entre otros expedientes el que pasó mi inmediato antecesor al gobierno de esta provincia en 23 de marzo de [17]84, formado sobre la propuesta de la numeración de las casas de esta ciudad, lo dirijo a vuestra señoría a fin de que en inteligencia de lo informado por el ingeniero director don Carlos Cabrer, en esta parte, me exponga vuestra señoría lo que considere conveniente" (Arredondo al cabildo, Buenos Aires, 23 de abril de 1790, en: AGN, IX, 19-3-2, f. 453).

¹¹⁹ Auto acordado dado por el virrey Nicolás de Arredondo y el regente y oidores de la Real Audiencia Pretorial, Benito de la Mata Linares, Josef Caveza Enríquez, Sebastián de Velasco y Lorenzo Blanco y Cicerón. Buenos Aires, 11 de febrero de 1790 (V. Apéndice D, texto IX). Precisamente, en la "instrucción metódica" que se formó para el gobierno de los alcaldes de barrio de 28 de junio de 1790 se estableció – en el artículo 10- que dichos alcaldes debían cuidar "que a costa de los pulperos se ponga en cada esquina un azulejo con el nombre de la calle" ("Instrucción metódica, que en virtud del auto acordado de 11 de febrero de 1790 forman los señores ministros comisionados para el buen orden y gobierno de los alcaldes de barrio de la ciudad de Buenos Aires", Buenos Aires, 28 de junio de 1790. V. Apéndice D, texto X).

¹²⁰ AGN, IX, 19-3-2, f. 454; *Acuerdos...* Buenos Aires, 1931, 3ª serie, t. IX, pp. 340-341.

¹²¹ V. Apéndice D, texto X.

¹²² "Policía", en: *El Argos de Buenos Aires*, n. 10, 14 de julio de 1821, p. 67. Entre los nombres utilizados para designar las diversas calles de la ciudad figuran, además de los de Santiago de Liniers y Martín de Alzaga, los de Cándido Francisco José de Lasala (RICARDO PICCIRILLI; FRANCISCO L. ROMAY; LEONCIO GIANELLO, *Diccionario Histórico Argentino*, t. IV, Buenos Aires, Ediciones Históricas Argentinas, 1953-1954, p. 711), Jacobo Adrián Varela y Baltasar Unquera, entre otros, de destacada acción durante las invasiones inglesas (*Ibidem*, t. VI, pp. 742 y 709, respectivamente). Sobre las causas que motivaron la elección de dichos personajes para designar diversas calles de la ciudad, Taullard incluye un detalle de las mismas junto a los cargos que cada uno desempeñaba al momento de producirse los acontecimientos

referencia Juan Manuel Beruti, para quien la indicación de manzanas y calles data de julio de 1808, cuando

de orden de este Superior Gobierno se empezaron a poner números a las manzanas de que se compone esta ciudad, como también a las puertas de sus edificios, tanto de calle como de cuartos, e igualmente nombres a las calles de Norte a Sur, y del Este a Oeste, como a las plazas públicas que tiene; en cada principio de cuadra y a su fin; de uno y otro costado, en el pilar de la esquina tiene puesta una tablilla de firme introducción en él con el número y nombre de esta forma: Manzana N° tal/ Calle de tal. Estando en los mismos términos igualmente puestos en los costados de las esquinas de las plazas el nombre de ellas; y sobre las puertas de los edificios providencia de policía que tomó este Gobierno a imitación de las ciudades de Europa; para que los forasteros puedan acertar con las calles, manzanas y casas que buscan, y con facilidad dar con ellas, o dar señas ciertas en dónde vive una persona a otra¹²³.

Estas tareas efectivamente se realizaron por cuanto el Archivo General de la Nación conserva un expediente relativo al pago por la confección y colocación de las mencionadas tablillas¹²⁴.

La situación parece haber cambiado inmediatamente después de producida la Revolución de Mayo de 1810. En esos momentos,

los fervores patrióticos que entonces se dejaron ver [...], no pudiendo sufrir que continuasen inscriptos los nombres de sus antiguos opresores, en una noche, sin la autoridad ni el conocimiento del gobierno, inutilizaron enteramente en unas bocas calles los cuadros que se habían fijado, y en las restantes borraron los nombres de manera que hasta el día permanecen si poderse percibir¹²⁵.

Efectivamente, en septiembre de 1812 el gobierno ordenó se borrasen inmediatamente “los nombres de sujetos particulares con que se designan las calles de esta ciudad y que

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

de 1806 y 1807 (TAULLARD, *Los planos...* cit., p. 101). Sobre los cambios introducidos en la nomenclatura de las calles v. fig. 6.

¹²³ JUAN MANUEL BERUTI, *Memorias curiosas*, Buenos Aires, Emecé, 2001, Año de 1808, p. 105. *Acuerdos...* Buenos Aires, 1927, 4ª serie, t. III, pp. 292-293.

¹²⁴ “Año de 1808. Cuenta del costo de las tablillas de las calles y de su colocación” (AGN, IX, 19-5-12, fs. 7-9, 93, 95, 120 y 185); FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, *Documentos para la historia argentina...* t. IX, cit., pp. 348-350.

¹²⁵ “Policía”, en: *El Argos de Buenos Aires*, n. 10, 14 de julio de 1821, p. 67; JOSÉ ANTONIO WILDE, *Buenos Aires desde 70 años atrás*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, [1999], p. 108. Sin embargo, Ensínck menciona que en ese año y una vez pasados los sucesos de mayo, “hubo un gasto importante en la fabricación de las tablillas ‘para fijarse en las calles y esquinas de la ciudad’ y en la ‘pintura de dichas tablillas’, que alcanzó a 908, 6 y 2.190, 2 pesos, respectivamente”, abonándose todo “del ramo de policía” (ENSÍNCK, *op. cit.*, p. 401). Este dato levanta una sombra de duda sobre si dichas acciones fueron realizadas sin “la autoridad ni el conocimiento del gobierno”.

sólo queden los números de las manzanas”¹²⁶. Al respecto, Vicente G. Quesada recordó en sus memorias que

las calles no tenían nombre, ni número las casas, como puede inducirse de los avisos publicados en 1810 en el *Correo de Comercio*: se llamaba la calle de Lezica, la de Villanueva, la de Sáenz Valiente: la esquina de la Palma y la del Peligro, y otra la de la Patria. La dirección se señalaba por señas [...] Las manzanas estaban numeradas, y para anunciar en venta una casa, se decía manzana número tal, calle de Lezica, o de la persona más notable que en ella tuviese habitación¹²⁷.

Tal estado de cosas continuó hasta, por lo menos, 1821. En julio de ese año, la falta de indicación en las calles motivó la aparición tanto de críticas como de sugerencias para corregir la situación. Entre las primeras, se afirmaba que “menos cuesta el acompañar a uno a cualquier parte de la ciudad que el describir su situación”, agregando irónicamente que además de un conocimiento topográfico de la ciudad resultaba imperioso poseer otro “de carácter biográfico” para poder encontrar “la esquina de don Fulano de Tal” y “el hueco de doña Zutana de Cual”¹²⁸. Entre las segundas, las propuestas contemplaron el empleo de placas de piedra –baldosas– y no de madera para su realización, el uso de determinados colores para el fondo y las letras de

¹²⁶ El cabildo [¿?] al intendente de policía, Buenos Aires, 7 de septiembre de 1812, en: AGN, IX, 19-6-4, f. 415. Según parece, se mantuvieron las tablillas que indicaban el número de las manzanas. Así, el 27 de octubre de 1813 se ordenó realizar un relevamiento de las tablillas “grandes y chicas que hay fijadas en las esquinas” de cada cuartel (AGN, IX, 19-6-5, f. 339), tarea que fue realizada directamente –por lo que se sabe– por los alcaldes de barrio o bien por sus tenientes, según el siguiente detalle: de los cuarteles 13, 4, 3, 17, 12, 19, 10, 11, 5 agregado, 18, 14, 8, 9, 15, 16, 20, 5, 1, 2 y 6, fueron los alcaldes –José Miguel Drago, Julián de Gregorio Espinosa, Pedro Osandavaras, Mariano San Martín, Anastasio Patrón, Julián Espínola, Luis Modesto Arroyo, Pascual Matallana, Mariano Blanco, Ramón Molina, Mariano de los Santos, José María Balbastro, Estanislao Sancho, Manuel Alberti, Juan Manuel Adriguez, Norberto Cabral, Andrés Aldao, Juan Balagué, Manuel Navarro y Santiago Guillen, respectivamente– los que relevaron las tablillas existentes en las manzanas de sus cuarteles (*Ibidem*, fs. 339, 344-345, 347, 348, 349-349v., 350, 353, 355 y 359; 357, 360-361v., 365, 366-367, 370-371, 372, 373-374, 375-376, 377, 380). Sobre lo realizado por los tenientes de alcaldes de barrio, se tiene noticia de que Juan Berdia, Eladio Otamendi, José Gabriel García, José M. de Riglos, Francisco Martínez, Pedro María de Saveyro, Valentín Alseyba y Mateo de Aloy informaron sobre las tablillas existentes en las manzanas de su cargo en el cuartel 7 a su alcalde, Joaquín Grieria (*Ibidem*, fs. 340-343, 393, 394, 395 y 396), quien posteriormente envió la información requerida (*Ibidem*, p. 356). Por su parte, un teniente del cuartel número 9 –Joaquín Roigt– realizó el relevamiento de las existentes en la manzana 106 (*Ibidem*, f. 351).

¹²⁷ VICENTE G. QUESADA, *Memorias de un viejo*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1998, pp. 39-40.

¹²⁸ “Policía. Comunicado”, en: *El Argos de Buenos Aires*, n. 13, 24 de julio de 1821, p. 85. Lo expresado quedó confirmado en los testimonios de la época; como ejemplo, se citará un testimonio que en 1812 prestó Mariano Blanco, futuro alcalde de barrio del cuartel número 5 agregado, quien manifestó que “el día de san Pedro del mes de junio último o la víspera por la tarde, lo que no tiene ni presente, iba paseando el que declara con don Inocencio Blanco por una calle del Alto, que no sabe su nombre, pero era por frente de la casa del alcalde Garaza” (ADOLFO P. CARRANZA (DIR.), *Archivo General de la República Argentina. Período de la Independencia. Causa de Alzága*, segunda serie, tomo IX, Buenos Aires, Litografía, imprenta y encuadernación de G. Kraft, 1897, pp. 115-116).

las tablillas y hasta la utilización de métodos alfabéticos y numéricos a la hora de atribuir nombres a las calles¹²⁹. En lo que se coincidía era en la urgencia de verificar dicha numeración, rogando al “regidor juez de policía que dedique una parte de sus cuidados a esta operación, a que sin duda es de esperarse que cooperará también el excelentísimo cabildo con sus luces y con sus fondos”¹³⁰. Precisamente, fue el entonces regidor de policía, Joaquín de Achával, el que declaró haber adelantado 1400 pesos “para las tablillas que deben fijarse para el nombre de las calles y numeración de las casas de la ciudad”¹³¹. De esta manera, fue recién en 1822 cuando se dispuso la adjudicación de nuevos nombres para las calles de la ciudad de Buenos Aires¹³².

...

El curso cuasi espasmódico que tuvo la historia de la división de la ciudad en cuarteles y barrios muestra que las disposiciones sobre la cuestión no tuvieron un progreso lineal y continuo y estuvieron lejos de intentar perfeccionar los mandamientos anteriores¹³³. A su vez, las tentativas para perfeccionar la organización de ese espacio también parecen haber surgido de individuos que no formaban parte del grupo que decidía la implantación de estas reformas, puesto que hubo casos en los que personajes tales como los moradores del barrio de La Piedad o el alcalde de barrio del cuartel número 5 procuraron influir en la conformación del espacio urbano.

¹²⁹ “Policía”, en: *El Argos de Buenos Aires*, n. 19, 14 de agosto de 1821, pp. 118-119; “Policía”, en: *Ibidem*, n. 12, 21 de julio de 1821, p. 80; “Policía. Comunicado”, en: *Ibidem*, n. 13, 24 de julio de 1821, p. 85; “Policía”, en: *Ibidem*, n. 18, 11 de agosto de 1821, p. 109.

¹³⁰ “Policía”, en: *Ibidem*, n. 10, 14 de julio de 1821, p. 67.

¹³¹ Joaquín de Achával a los editores del *Boletín de la Industria*, en: *Boletín de la Industria*, n. 9, 21 de septiembre de 1821, p. 20. Según Romay, fue recién en 1822 cuando se resolvió la cuestión de la nomenclatura de las calles de la ciudad y la numeración de las casas. La cuestión se le encargó a Achával y, después de la correspondiente convocatoria, comenzó la colocación de las tablillas respectivas en las esquinas (FRANCISCO L. ROMAY, *Don Joaquín de Achával. Primer jefe de policía de Buenos Aires*, Buenos Aires, Editorial “Celta”, 1944, p. 28).

¹³² V. fig. 6.

¹³³ ANTÓNIO MANUEL HESPANHA, “A perspectiva Histórica e Sociológica”, en: JORGE MIRANDA; MARCELO REBELO DE SOUSA (ORGS.), *A feitura das leis*, vol. II, Lisboa, Instituto Nacional de Administração, 1986, p. 61. Es sin embargo el término “perfeccionar” el que usó el propio virrey Nicolás de Arredondo quien, refiriéndose al “gobierno y policía de Buenos Aires” escribió en su memoria que, en relación a las medidas adoptadas por el virrey Vértiz, “me parece muy útil sostener este plan que inventó el señor Vértiz, que no suprimió el señor Loreto, que yo he procurado perfeccionar y que sin duda contribuye visiblemente en una gran parte al mejor gobierno y policía de un pueblo” (Arredondo, Nicolás de, “Memoria a su sucesor don Pedro Melo de Portugal y Villena”, Buenos Aires, 16 de marzo de 1795, en: *Memorias de los virreyes...* cit., p. 382).

Por el contrario, las reformas de mayor envergadura que se ejecutaron, en vez de conseguir racionalizar el espacio urbano, muestran una sucesión de marchas y contramarchas que trajo como consecuencia todavía más confusiones terminológicas. Así, algunas veces las propias autoridades —teóricas encargadas de ordenar dicho espacio— emplearon los términos “cuartel” y “barrio” como sinónimos¹³⁴; otras veces, llegaron a referirse a esta división usando las denominaciones de las parroquias de la ciudad¹³⁵, mostrando la actualidad que todavía tenía aquel criterio organizacional del espacio urbano¹³⁶. En otros casos, se recurrió al término “cuartel” para designar un distrito mayor, y a la voz “barrio”, para hacer referencia a las divisiones de aquél¹³⁷, o bien se llamó a las dos unidades administrativas por el nombre de la correspondiente parroquia.

¹³⁴ En la instrucción para los alcaldes de barrio de 22 de noviembre de 1809 se usan indistintamente los términos “cuartel” y “barrio” para hacer referencia a la organización de la ciudad en veinte barrios establecida por el virrey Arredondo en 1794 (“Instrucción para gobierno y desempeño de los alcaldes de barrio en el ejercicio de sus empleos” del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, Buenos Aires, 22 de noviembre de 1809, cláusula adicional. V. Apéndice D, texto XIV); unos meses después, en una nueva tentativa de división se habló de dividir la ciudad en nueve “cuarteles o barrios” (Bando de buen gobierno e instrucción expedida para el desempeño de los alcaldes de barrio del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, Buenos Aires, [enero de 1810], cláusula introductoria. V. Apéndice D, texto XVII).

¹³⁵ En las constancias que Joseph Zenzano, escribano real público y de gobierno, estampó al pie de una que notificación del virrey Vértiz a los alcaldes de barrio de la ciudad de 4 de octubre de 1779, en lugar de manifestar que Joseph de Aspiaza se desempeñaba como alcalde en el barrio número 16 aclaró que Aspiaza era “comisario del barrio de Montserrat” (V. Apéndice D, texto III). Asimismo, en noviembre de 1794, el alcalde de barrio del cuartel número 9, Francisco San Cristóbal, solicitó, a instancias de los vecinos de su jurisdicción, se le franqueasen piedra y presidiarios para componer las calles de su cuartel. En consecuencia, el virrey Nicolás de Arredondo determinó que “habiéndose comisionado por esta superioridad al regidor diputado de policía don José Martínez de Hoz para que proceda a la composición de las calles del cuartel de las Catalinas, de cuyo mal estado dio cuenta el alcalde de aquel barrio don Francisco San Cristóbal, y hechome presente con este motivo el mismo regidor que para poder subvenir a los más precisos e indispensables gastos en dicha obra, y reintegrarse de algún desembolso, que en iguales comisiones ha tenido que hacer, se le suministren cien pesos del fondo que en la caja de propios hay afecto a la limpieza y aseo de las calles, de que dará cuenta exacta de su entrada y salida, he venido en ello por providencia asesorada de 20 del corriente y en prevenirlo a usted como lo hago para su inteligencia y cumplimiento” (Arredondo a la junta municipal de propios y arbitrios, Buenos Aires, 26 de diciembre de 1794, en: AGN, IX, 19-4-8, f. 309). El subrayado es propio. La situación no parece haberse modificado ya entrado el siglo XIX: en 1805, se habla del “barrio de San Nicolás” en un expediente promovido por los vecinos de la plaza de Monserrat solicitando “se alce la prohibición de la venta del trigo en ella” (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, *Documentos para la historia argentina*, t. IV, cit., p. 369).

¹³⁶ “De la policía”, sin autor ni fecha, en AGN, IX, 19-7-2, s. f. La asimilación del espacio delimitado por las parroquias al comprendido en los barrios no era nueva. Antonio Muro Orejón recogió una instrucción de 26 de junio de 1766 regulando la elección y prerrogativa de los Diputados del Común y Personero en la que se estableció que dicha elección debía ejecutarse “por todo el pueblo dividido por parroquias o barrios” (ANTONIO MURO OREJÓN, “Reformas e innovaciones en los municipios hispano-indianos en el siglo XVIII”, en: *VI Congreso Internacional de Historia de América (Buenos Aires, 13-18 octubre 1980)*, t. III, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1982, p. 65).

¹³⁷ DÍAZ COUSELO, “Los alcaldes...” cit., p. 434.

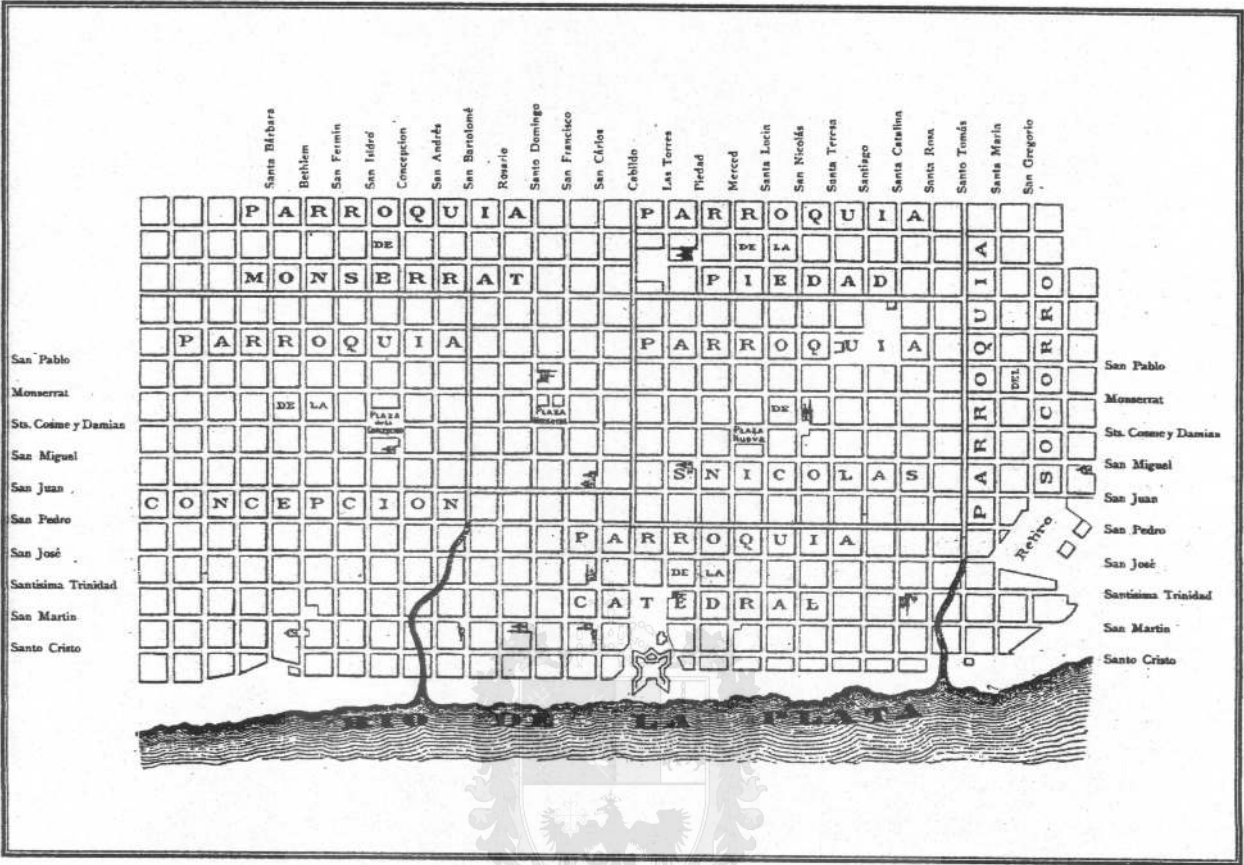
La ciudad es un lugar de memoria y, por ende, la nomenclatura de las calles, además de un obvio sentido práctico tendiente racionalizar el espacio y orientar a sus habitantes, debe ser entendida también como un “signo urbano” que hace “presente el pasado” y establece “en el espacio público un discurso de memoria que contribuye a forjar los imaginarios históricos e identitarios” de la población¹³⁸. La adjudicación de los nombres de las calles de la ciudad de Buenos Aires tuvo evidentemente una clara intencionalidad reivindicadora, en el caso de la disposición que al respecto tomó el virrey Liniers, y de carácter “patriótico” cuando, inmediatamente después de los sucesos de mayo de 1810, se conservaron sólo los números de manzanas y se eliminaron los antiguos nombres de las calles, acción que puede asimilarse al proceso de resignificación del pasado español propio de los primeros años del período patrio¹³⁹.



¹³⁸ FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, “Los mapas de la memoria. Nombres de calles y políticas de memoria en Barcelona y Madrid”, en: *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, n. 9, fascículo 2, s. l., s. d., 2009, [p. 3]. Disponible en: <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3117041>>. Acceso: Nov. 2012.

¹³⁹ SANDRA L. DÍAZ DE ZAPPIA, “A visão de Fernando VII e o passado espanhol entre a emancipação e a independência (1810-1816)”, en: *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*, n. 53, Köln, Böhlau Verlag. Aceptado para publicación.

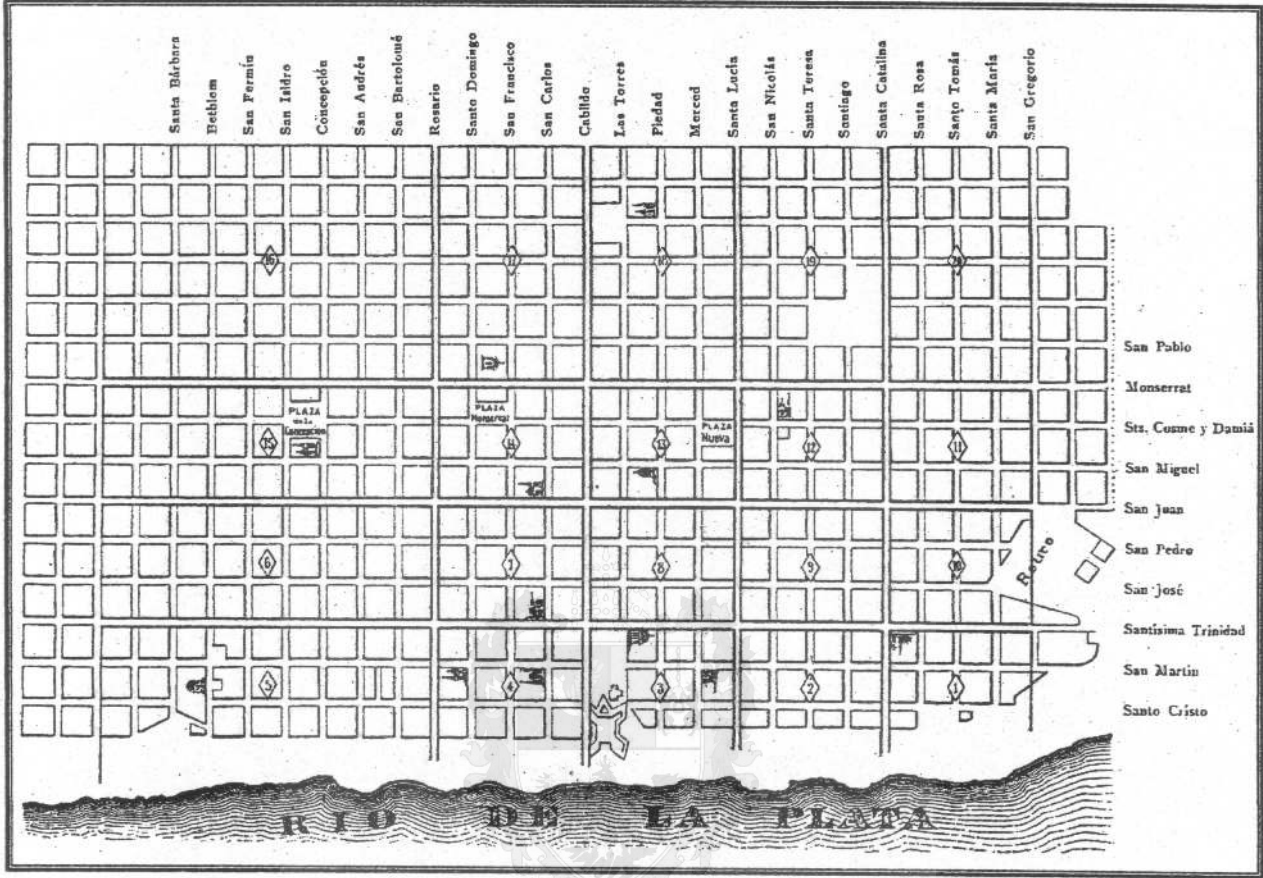
Fig. 1. División de la ciudad en 6 parroquias (1769)¹⁴⁰.



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

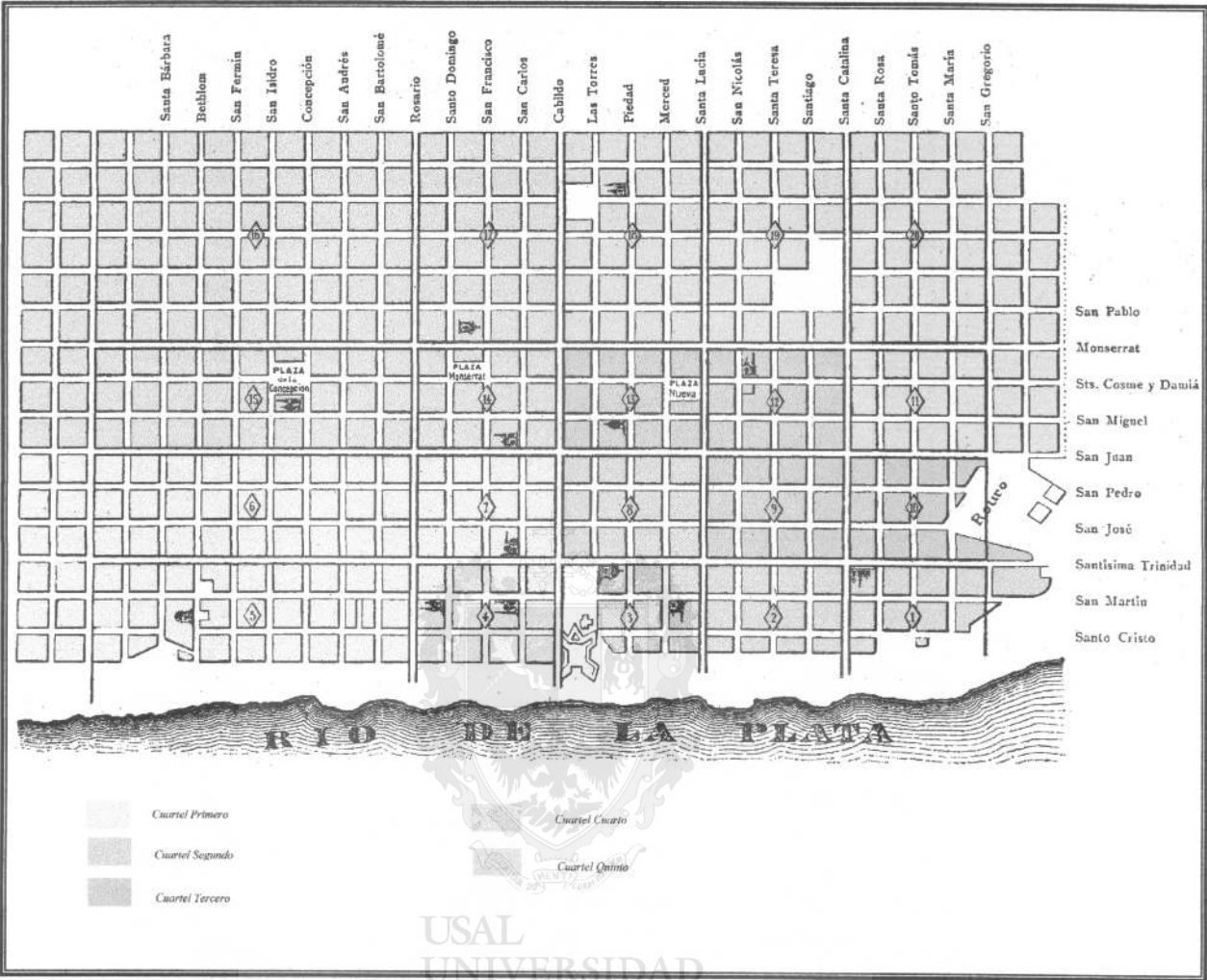
¹⁴⁰ TAULLARD, *Los planos...* cit., p. 53.

Fig. 2. Organización de la ciudad en 20 barrios (1794)¹⁴¹.



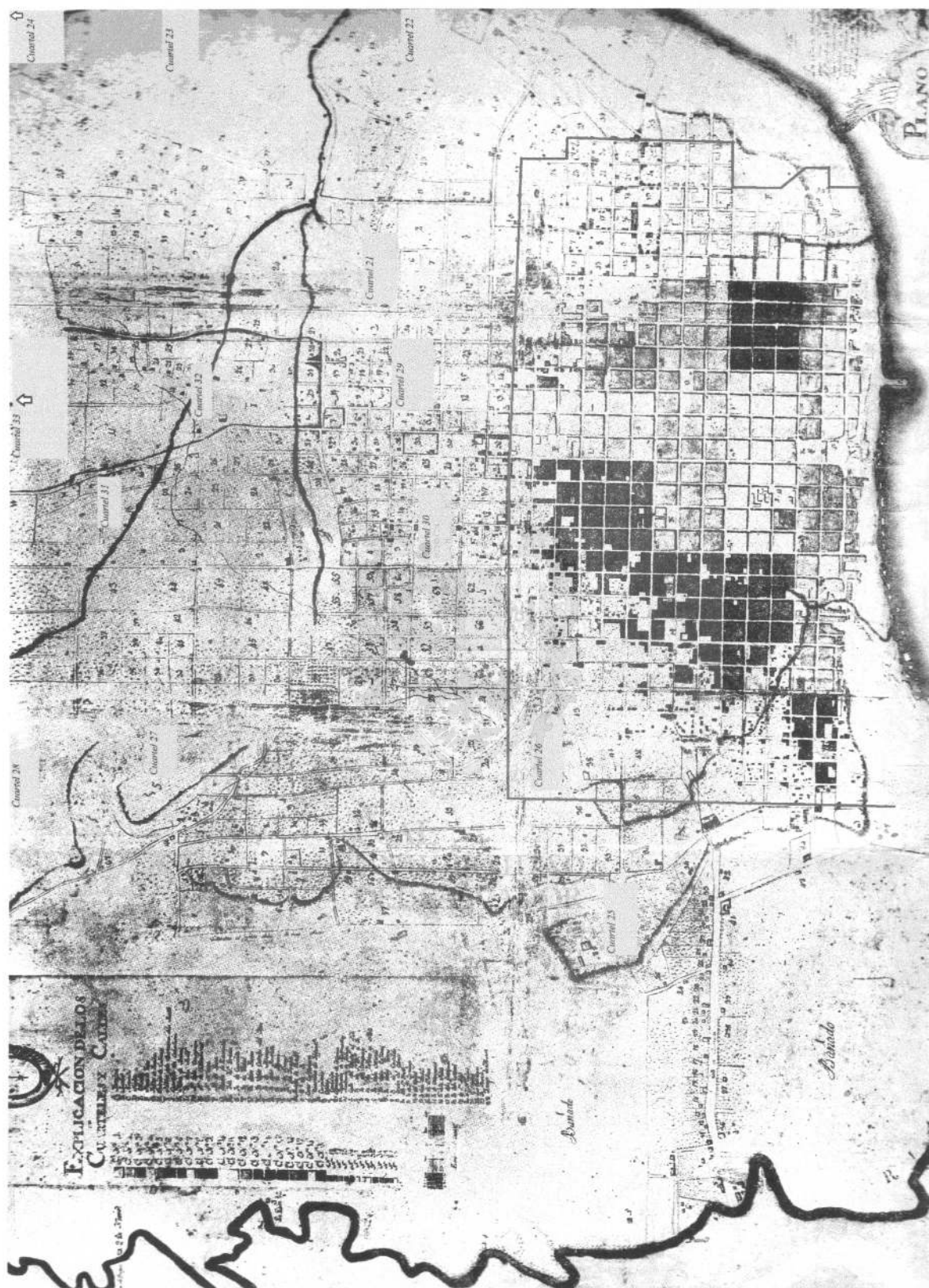
¹⁴¹ TAULLARD, *Los planos...* cit., p. 63.

Fig 3. Organización de la ciudad en 20 barrios y 5 cuarteles (1809)¹⁴².



¹⁴² Sobre la base de la organización en 20 barrios reproducida como fig. 2, se ha superpuesto la división en 5 cuarteles utilizando como referencia los impresos de la época (TAULLARD, *Los planos...* cit., p. 63; MALLIÉ, *op. cit.*, t. I, p. 237).

Fig. 5. Ubicación de los cuarteles 21 a 33 (1817)¹⁴⁴.



¹⁴⁴ Sobre el plano de José María Manso (1817) publicado por TAULLARD, *Los planos...* cit., p. 113, se indicó con rojo el borde externo de los cuarteles de la ciudad (v. fig. 2), destacando la ubicación de los cuarteles 21 a 32 incluidos por el propio Manso, y agregando la del cuartel 33.

Fig. 6. Nomenclatura de las calles de la ciudad de Buenos Aires (1774-1822)¹⁴⁵.

Calles de norte a sur

BALCARCE	1774: Santo Cristo 1807: Gana 1822: Balcarce	25 DE MAYO	1774: Santo Cristo 1807: Gana 1822: Del 25 de Mayo
DEFENSA	1774: San Martin 1807: Liniers 1822: De la Reconquista	RECONQUISTA	1774: San Martin 1807: Liniers 1822: De la Paz
BOLÍVAR	1774: Stma. Trinidad 1807: Victoria 1822: Universidad	SAN MARTÍN	1774: Stma. Trinidad 1807: Victoria 1822: Catedral
PERÚ	1774: San José 1807: Unquera 1822: Del Perú	FLORIDA	1774: San José 1807: Unquera 1822: De la Florida
CHACABUCO	1774: San Pedro 1807: Lasala 1822: De Chacabuco	MAIPÚ	1774: San Pedro 1807: Lasala 1822: Maypu
PIEDRAS	1774: San Juan 1807: Correa 1822: De Las Piedras	ESMERALDA	1774: San Juan 1807: Correa 1822: Esmeralda
TACUARÍ	1774: San Miguel 1807: Parejas 1822: Tacuary	SUIPACHA	1774: San Miguel 1807: Parejas 1822: De Suypacha
B. DE IRIGOYEN	1774: San Cosme y Damián 1807: Rivas	C. PELLEGRINI	1774: San Cosme y Damián 1807: Rivas

¹⁴⁵ ALFREDO TAULLARD, *Nuestro antiguo Buenos Aires: como era y como es, desde la época colonial hasta la actualidad; su asombroso progreso edilicio, trajes, costumbres, etc.*, Buenos Aires, Jacobo Peuser, 1927, pp. 172-174.

	1822: Del Buen Orden		1822: De Las Artes
LIMA	1774: Monserrat 1807: Varela 1822: Lima	CERRITO	1774: Monserrat 1807: Varela 1822: Del Cerrito
SALTA	1774: San Pablo 1807: Velarde 1822: Salta	LIBERTAD	1774: San Pablo 1807: Velarde 1822: Libertad
SGO. DEL ESTERO	1807: Irigoyen 1822: Santiago del Estero	TALCAHUANO	1807: Irigoyen 1822: Talcahuano
SAN JOSÉ	1807: Pazos 1822: San José	URUGUAY	1807: Pazos 1822: Uruguay
SÁENZ PEÑA	1807: Mujica 1822: Lorea	PARANÁ	1807: Mujica 1822: Paraná
VIRREY CEVALLOS	1807: Maderna 1822: Zeballos	MONTEVIDEO	1807: Maderna 1822: Montevideo
SOLÍS	1807: Somavilla 1822: Solís	RODRÍGUEZ PEÑA	1774: Somavilla 1807: Garantías
ENTRE RÍOS	1774: De Las Tunas 1822: Entre Ríos	CALLAO	1774: De Las Tunas 1822: Callao

Calles de este a oeste

VICTORIA	1774: Cabildo 1807: Villota 1822: De La Victoria	RIVADAVIA	1774: Las Torres 1807: Reconquista 1822: La Plata
ALSINA	1774: San Carlos 1807: Álzaga 1822: Potosí	BMÉ. MITRE	1774: Piedad 1807: Lezica 1822: Piedad

MORENO	1774: San Francisco 1807: Villanueva 1822: Biblioteca	J. D. PERÓN	1774: Merced 1807: Sáenz Valiente 1822: Cangallo
BELGRANO	1774: Santo Domingo 1807: Pirán 1822: Belgrano	SARMIENTO	1774: Santa Lucía 1807: Mansilla 1822: Cuyo
VENEZUELA	1774: Rosario 1807: Basualdo 1822: Venezuela	CORRIENTES	1774: San Nicolás 1807: Incháuregui 1822: Corrientes
MÉXICO	1774: San Bartolomé 1807: Agüero 1822: México	LAVALLE	1774: Santa Teresa 1807: Merino 1822: Del Parque
CHILE	1774: San Andrés 1807: Capdevilla 1822: Chile	TUCUMÁN	1774: Santiago 1807: Herrero 1822: Tucumán
INDEPENDENCIA	1774: Concepción 1807: Monasterio 1822: Independencia	VIAMONTE	1774: Santa Catalina 1807: Ocampo 1822: Del Temple
ESTADOS UNIDOS	1774: San Isidro 1807: Ituarte 1822: Estados Unidos	CÓRDOBA	1774: Santa Rosa 1807: Yáñez 1822: Córdoba
CARLOS CALVO	1774: San Fermín 1807: Iglesias 1822: Europa	PARAGUAY	1774: Santo Tomás 1807: Belgrano 1822: Paraguay
HUMBERTO I°	1774: Bethelen 1807: Núñez 1822: Comercio	M.T. DE ALVEAR	1774: Santa María 1807: Fantin 1822: Charcas
SAN JUAN	1774: Santa Bárbara 1807: Barragaña 1822: San Juan	SANTA FE	1774: San Gregorio 1807: Pio Rodriguez 1810: Calle Estrecha 1822: Santa Fe

COCHABAMBA	1807: Valencia 1822: Cochabamba	ARENALES	1822: Santa Cruz
BRASIL	1807: Cabieces 1822: Patagones		



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Capítulo II: Requisitos e idoneidad.

La cuestión de las condiciones personales de los agentes de la administración pública española generó, desde la época de Alfonso X el Sabio, un significativo cuerpo normativo, y fue objeto de reflexión por parte de numerosos tratadistas¹⁴⁶. Esta tradición fue recogida por el legislador de la época de las luces que, en sintonía con el espíritu de su siglo, intentó reglamentar con mayor sofisticación requisitos tales como la vecindad, nacionalidad, religión, edad, sexo, nacimiento, costumbres, estado civil, patrimonio y actividades económicas exigibles a los candidatos a integrar el funcionariado de los territorios del imperio.

II.1. Período indiano: cuestiones normadas

Según la normativa del período indiano, los alcaldes de barrio debían ser elegidos entre “los sujetos más distinguidos”, “las personas más principales y activas”, que tuviesen “su habitación en los distritos que se les señalan” y que fuesen honrados. En suma, la búsqueda de candidatos apuntaba a aquellos que “por su lustre, actividad y amor al público puedan ser a propósito para desempeñar con exactitud” el cargo para el cual se los designaba¹⁴⁷. Considerando que se trataba de empleos “honoríficos y meritorios”¹⁴⁸, se intentó nombrar en el cargo a individuos “de conocido [y] honrado proceder y de los más principales vecinos”¹⁴⁹, personas que por su “distinción y confianza” merecieron ser designados como tales¹⁵⁰.

¹⁴⁶ Al respecto, v. MIGUEL MALAGÓN PINZÓN, “La carrera administrativa en la administración pública indiana”, en: *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, vol. 7, n. 1, Bogotá, Universidad del Rosario, 2005, pp. 279-301. Disponible en: <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2314918>>. Acceso en: ene. 2011.

¹⁴⁷ Bando del gobernador y capitán general interino de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan José de Vértiz, Buenos Aires, 21 de mayo de 1772, cláusula introductoria (V. Apéndice D, texto I); Auto acordado dado por el virrey Nicolás de Arredondo y el regente y oidores de la Real Audiencia Pretorial, Benito de la Mata Linares, Josef Caveza Enriquez, Sebastián de Velasco y Lorenzo Blanco y Cicerón, Buenos Aires, 11 de febrero de 1790, art. 6º (V. Apéndice D, texto IX); Bando del virrey Nicolás de Arredondo, Buenos Aires, 4 de enero de 1794 (Apéndice D, texto XII.a); *Acuerdos...* Buenos Aires, 1931, 3ª serie, t. IX, pp. 402 y 544; Nicolás de Arredondo al cabildo, Buenos Aires, 3 de septiembre de 1790, en: AGN, IX, 19-4-1, fs. 2-2v.

¹⁴⁸ “Instrucción para gobierno y desempeño de los alcaldes de barrio en el ejercicio de sus empleos” del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, Buenos Aires, 22 de noviembre de 1809, art. 2 (V. Apéndice D, texto XIV).

¹⁴⁹ “Instrucción a los alcaldes de barrio que se nombran para el buen gobierno de la ciudad”, sin fecha ni firma, cláusula introductoria (V. Apéndice D, texto XVII). Este documento aparece en un legajo foliado junto con una “Instrucción a los alcaldes de barrio para el ejercicio de su comisión”, también sin fecha ni

II. 1. 1. Vecindad

A finales del siglo XVI, Castillo de Bovadilla abordó la condición de “vecino” a la hora de examinar cuáles deberían ser las cualidades de los regidores. En la materia que interesa, afirmó que “el que hubiere de ser regidor en estos reinos, ha de ser natural de ellos, y vecino si es posible, del pueblo donde fuere proveído al tal oficio, a lo menos ha de ser preferido al forastero, por la mayor afición y amor” que profesaría a la república¹⁵¹. Con respecto a la cuestión de la vecindad, en el ámbito rioplatense se entendía que eran vecinos los hombres libres que en la escala social se ubicaban entre los artesanos, que estaban abajo, y los nobles, los oficiales reales y los religiosos, que estaban por encima. La particularidad de la sociedad rioplatense de la época hispánica es que los vecinos de prestigio ocuparon el lugar de la nobleza faltante. Vecino era el habitante varón que vivía en la ciudad y poseía capacidades civiles plenas, o bien aquél que se establecía en el campo a poblar en calidad de hacendado, comerciante o labrador. En este último caso, se trataba de un hombre libre que se incorporaba a una comunidad junto con su familia o bien la formaba al momento de su establecimiento. En principio, se le reconocía el carácter de domiciliado y podía alcanzar la condición de vecino en sucesivas habilitaciones. Los domiciliados tenían una condición civil superior a la de los transeúntes¹⁵². Por lo tanto, la calidad de vecino del cuartel en el cual actuaría

firma, a continuación de la ya mencionada lista de alcaldes de barrio fechada el 23 de enero de 1810 (V. *supra*, nota 88), por lo que se ha tomado esta fecha como datación aproximada de ambos documentos.

¹⁵⁰ Providencia circular del gobernador intendente de la provincia de Buenos Aires, Francisco de Paula Sanz, a los alcaldes de barrio, Buenos Aires, 31 de mayo de 1785 (V. Apéndice D, texto VII).

¹⁵¹ JERÓNIMO CASTILLO DE BOVADILLA, *Política para corregidores y señores de vasallos...*, Barcelona, Por Geronimo Margarit, 1616 [1a. ed.: 1597], t. II, lib. III, cap. VIII, § 5, p. 155. Sobre el concepto de “vecino” y su relación con el de “ciudadano” en el ámbito iberoamericano, v. CRISTÓBAL ALJOVIN DE LOSADA, “Monarquía o república: ‘ciudadano’ y ‘vecino’ en Iberoamérica, 1750-1850”, en: *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*, n. 45, Köln, Böhlau Verlag, 2008, págs. 31-55.

¹⁵² En las “Ordenanzas de Descubrimiento, Nuevas Poblaciones y pacificaciones” dictadas en 1573 por Felipe II y vigentes durante más de dos siglos “como normas de carácter legal y sistema de trazado” (ANTONIO BONET CORREA, *El urbanismo en España e Hispanoamérica*, Madrid, Cátedra, 1991, p. 33), se establece que “Declaramos que se entienda por vecino el hijo, o hija, o hijos del nuevo poblador, o sus parientes dentro o fuera de el cuarto grado, teniendo sus casas y familias distintas y apartadas, y siendo casados y teniendo cada uno casa de por sí” (“Ordenanzas sobre descubrimiento nuevo y población” [1573], en: LUIS TORRES DE MENDOZA, *Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía...*, t. VIII, Madrid, Imprenta de Frias y compañía, 1867, § XCIII, p. 515). Al respecto, Torre Revello explica que “en los centros urbanos, el blanco (europeo o americano) era el único que podía alcanzar jerarquía de vecino, cuya obtención obligaba a ciertos deberes, como ser el de hallarse radicado con casa en el lugar, poseer en propiedad caballos y armas, haber hecho prestación de servicios sin sueldo en los cuerpos de milicias y de haber intervenido como centinela en las rondas y vigilancias que se efectuaban para seguridad de la ciudad. Realizadas ante el cabildo las gestiones y trámites que obligaba el hecho, el cuerpo edilicio ordenaba después la inclusión del nombre del pretendiente en el libro de vecinos, para que gozara de los

el futuro alcalde de barrio resultaba de vital importancia¹⁵³, por lo cual en los casos en que la designación no observó este requisito pudo ser justificativa para solicitar la exención del cargo¹⁵⁴.

II. 1. 2. Nacionalidad

Otro tema que merece ser considerado es el de la cuestión de la nacionalidad de los agentes. Al respecto, es necesario señalar dos problemas: en primer lugar, la situación del extranjero propiamente dicho, esto es, aquel individuo nacido fuera del territorio del imperio español; en segundo, la distinción que se hacía en la época entre los españoles considerados nacionales y aquellos españoles que no lo eran.

Sobre la primera cuestión, como norma general, y suponiendo que tendría una mayor identificación con los intereses de la comunidad, se prefería designar a súbditos del mismo rey para ocupar los cargos públicos, lo que a su vez implicaba un riesgo menor de que se aliasen con el enemigo en caso de guerra. Además, la elección de extranjeros era considerada como un reconocimiento tácito de que el reino carecía de hombres adecuados para ocupar dicho cargos. Por otro lado, se suponía que estando los agentes arraigados a la tierra en la que habían nacido, estaban obligados a dar cuenta de sus acciones. Finalmente, siendo el empleo considerado desde el punto de vista del Estado como una especie de gratificación, parecía lógico pensar que los naturales se sintieran merecedores de ser premiados por sus diversos servicios a la comunidad¹⁵⁵. En el caso de Buenos Aires, y en ocasión de la elección de los nuevos capitulares para el año 1778, Joseph Pablo Conti citó las *Leyes de Indias* según las cuales “deben ser preferidos los naturales e hijos del país a los que no lo sean”¹⁵⁶. En la misma línea,

fueros y preeminencias correspondientes” (JOSÉ TORRE REVELLO, *Crónicas del Buenos Aires colonial*, Buenos Aires, Taurus, pp. 58-59). Según la difundida obra de Joaquín Escriche —el *Diccionario razonado de Legislación Civil, Penal, Comercial y Forense*, de 1833— “vecino era el que establecía ‘su domicilio en algún pueblo con ánimo de permanecer en él’; que se reputaba probado por la permanencia durante diez años. Más tarde se exigieron cuatro. La condición de vecino no se perdía con las mudanzas, siempre que se hicieran con los bienes. [...] En la antigua ciudad indiana la calidad de vecino se obtenía por pedido del interesado que hacía constar ante el cabildo que tenía ‘casa habitada’ y que había servido en milicias” (ORESTE CARLOS CANSANELLO, “Ciudadano/Vecino”, en: NOEMÍ GOLDMAN (ED.), *Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata 1750-1850*, Buenos Aires, Prometeo, 2008, p. 20).

¹⁵³ *Acuerdos...* Buenos Aires, 1933, 3ª serie, t. XI, p. 501; *Acuerdos...* Buenos Aires, 1925, 4ª serie, t. I, p. 59.

¹⁵⁴ V. *infra*, cap. VII.

¹⁵⁵ MARILUZ URQUIJO, *El agente...* cit., p. 106.

¹⁵⁶ En el acuerdo de 1º de enero de ese año Conti fundamentó su posición en las “leyes primera, título tercero, libro 7 de las Castellanas y las que allí le son concordantes” (*Acuerdos...* Barcelona, 1929, 3ª

Thomas Kinder, un viajero inglés que visitó el Río de la Plata entre 1808 y 1810, afirmó que

*it is true enough, that these people are extremely fickle & that in the best times they have an inward inclination always to insult a stranger, so that hitherto the condition of all foreigners here has been precarious and unpleasant at best, the reasons for which are to be found in the laws, which so far from protecting strangers enable the party in power whenever they choose, to put them in force to seize & imprison the person of any stranger found in the place*¹⁵⁷.

Sin embargo, no parece ser que la condición de extranjero fuese un impedimento para el desempeño de la alcaldía de barrio, como lo demuestra el hecho de que, por lo menos en dos casos, el cargo fue ocupado por individuos que habían nacido fuera de los límites del imperio español¹⁵⁸.

Con respecto a la distinción existente entre españoles *nacionales* y aquellos que no lo eran, la legislación española había establecido que los empleos de los dominios americanos estaban reservados para los llamados *nacionales*, es decir, aquellos que habían nacido en Castilla, León, Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra. Sin embargo, durante los reinados posteriores, la aplicación de esta disposición se atenuó¹⁵⁹. En el

serie, t. VI, pp. 170-171). En el mismo sentido se expidió en 1801 el fiscal Márquez de la Plata en relación a la elección de José Patricio Cámara, “portugués de nación”, como alcalde ordinario de la villa de Gualeguay. Dado el origen de Cámara y el hecho de no estar “connaturalizado, no pudo ni debió ser elegido de alcalde ordinario de la villa del Gualeguay para el presente año, ni menos ha podido ni debido reelegirse en la alcaldía para el año entrante de 1802, pues ningún extranjero sin real carta de naturaleza puede obtener oficio de república, ni la reelección aun cuando no hubiese ese obstáculo sería válida, por no permitir nuestras leyes municipales semejantes reelecciones, no obstante que se hagan por uniformidad de todos los votos, si no es que concurran particulares circunstancias que obliguen por utilidad pública a tolerarlas en algunos casos” (“1801 y 1802. Elecciones del cabildo de la villa de Gualeguay. Vista del 30 de noviembre de 1801”, en: ABELARDO LEVAGGI, *El virreinato rioplatense en las vistas fiscales de José Márquez de la Plata*, v. III, Buenos Aires, Universidad del Museo Social Argentino, 1988, pp. 1002-1003). Sobre la extranjería como una de las razones de capacidad invocadas para solicitar la exención del empleo, v. *infra*, nota 864. José Pablo Conti era abogado, oriundo de Buenos Aires, que después de servir como teniente asesor en Charcas, fue designado oidor de la Audiencia de Charcas en 1794 (SUSAN SOCOLOW, *The Bureaucrats of Buenos Aires, 1769-1810: Amor al Real servicio*, Durham, Duke University Press, 1987, p. 83).

¹⁵⁷ THOMAS KINDER, “The Diary of Thomas Kinder”, en: MALYN NEWITT (ED.), *War, Revolution & Society in the Rio de la Plata 1808-1810. Thomas Kinder's narrative of a journey to Madeira, Montevideo and Buenos Aires*, Oxford, Signal, 2010, p. 139. Por otro lado, Juan Almeyra debió modificar su apellido de Almeida a Almeyra, pues el origen portugués del mismo —aun cuando era natural de Buenos Aires— le habría ocasionado algunas dificultades (V. Apéndice C, *Almeyra, Juan*).

¹⁵⁸ Se trata de Salvador Escola, natural de Luano o Lugano, hoy Suiza, y José Botello, natural de Río de Janeiro (V. Apéndice C).

¹⁵⁹ MARILUZ URQUIJO, *El agente...* cit., pp. 108-109. Es interesante resaltar que existían también la expresión “comerciante forastero”, a la que se refiere un documento datado en 1756: “Pretendiendo el uno de los partidos que se compone de los comerciantes que aqui llaman forasteros, entendiéndose por este nombre los que habiendo nacido en España y viniendo a este país con motivo del comercio no se han

caso de los alcaldes de barrio porteños, esa flexibilización parece confirmarse, pues las fuentes muestran que una porción de individuos que ocuparon diversas alcaldías de barrio había nacido fuera de esas regiones: se trata de Agustín Casimiro de Aguirre (natural de Cádiz), Faustino Boyso (natural de Vitoria, Álava), Agustín de la Cuesta (natural de Sevilla), Agustín Antonio de Erescano (natural de Bilbao), Manuel de Escalada (natural de Santa Cruz de Castañeda, Cantabria), Josef Antonio de Gainza (natural de Bilbao), Juan Ángel Goicolea (natural de Cádiz), Juan Lezica (natural de Vizcaya), Gabriel Real de Azúa (natural de Bilbao), Cecilio Sánchez de Velasco (natural de Granada) y Carlos Somoza, éste último de origen vasco¹⁶⁰. Para el caso de los gallegos, la investigación arroja que por lo menos cuatro personas que desempeñaron la función eran oriundas de esta región: Francisco Chanteyro, Andrés Lista, Raimundo Rial y José Riera¹⁶¹.

II. 1. 3. Honradez y costumbres personales

Según el *Diccionario de Autoridades*, se entendía por honradez “aquel género de pundonor que obliga al hombre de bien a obrar siempre conforme a sus obligaciones, y cumplir su palabra en todo”¹⁶². La definición viene acompañada de la locución latina *nativa probitas, vel bonitas* que alude, en lengua española, a los conceptos de probidad y bondad. En lo que respecta al vocablo “pundonor”, el citado diccionario lo define como “aquel estado en que, según las varias opiniones de los hombres, consiste la honra

casado en él, quedando en esta clase y nombre, aun que haya muchos años que sean residentes y moradores “ (Archivo General de Indias [en adelante, AGI], Buenos Aires, 42, fs. 1282-1282v.).

¹⁶⁰ V. Apéndice C. Sobre los vascos en Buenos Aires, v. CÉSAR A. GARCÍA BELSUNCE, “Los vascos en Buenos Aires en 1810”, en: *VI Congreso Internacional de Historia de América (Buenos Aires, 13-18 octubre 1980)*, t. VI, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1982, pp. 143-157.

¹⁶¹ V. Apéndice C. Sobre la presencia de gallegos en el Río de la Plata, Ángela Fernández afirma que Galicia “desde 1749 hasta 1797 expulsó a más de 350 mil habitantes; esa migración se debía, entre otras causas, a la ausencia de diversificación económica, al hacinamiento y presión sobre parcelas diminutas y, desde un punto de vista demográfico, a la vitalidad de una población no regulada por la muerte, puesto que Galicia tenía baja mortalidad”. La autora se centró especialmente en el grupo de los pulperos, concluyendo que la mayoría de los mismos provenía de Galicia y, en menor medida, de Andalucía y Cantabria (ÁNGELA FERNÁNDEZ, “Origen e itinerario de los pulperos de Buenos Aires”, en: CARLOS A. MAYO (DIR.), *Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740-1830)*, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2000, p. 29).

¹⁶² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua...*, tomo cuarto, Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, por los herederos de Francisco del Hierro, 1734, p. 174. El diccionario citado en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Nuevo Tesoro Lexicográfico...* cit.

o crédito de alguno”¹⁶³. Por su parte, el sustantivo probidad se registra recién en el Diccionario usual de la Real Academia Española publicado en 1803, como “bondad, rectitud de ánimo”¹⁶⁴.

En relación a las costumbres de los candidatos, se esperaba que el agente no sólo cumpliera con las obligaciones de su cargo, sino que tuviera una vida irreprochable, pues se pensaba que una conducta desordenada en su vida familiar o social bastaba para inhabilitarlo¹⁶⁵. Al respecto, Castillo de Bovadilla manifestó que los regidores debían ser “hombres de virtud y de buena fama, porque los infames por hecho o por derecho no pueden serlo”¹⁶⁶. Aunque publicada en 1614, las *Centellas de varios conceptos* compuesta por Joaquín de Setantí conservaba su vigencia —como también sus *Avisos de amigo*— a comienzos del siglo XIX¹⁶⁷; en las máximas allí contenidas, dicho autor

¹⁶³ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua...*, tomo quinto, Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, por los herederos de Francisco del Hierro, 1737, p. 431. El diccionario citado en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Nuevo Tesoro Lexicográfico...* cit.

¹⁶⁴ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo para su más fácil uso. Cuarta edición*, Madrid, Viuda de Ibarra, 1803, p. 687. El diccionario citado en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Nuevo Tesoro Lexicográfico...* cit.

¹⁶⁵ MARILUZ URQUIJO, *El agente...* cit., p. 140. En 1812, el *Diario de Madrid* explicó qué se entendía entonces por “costumbres” en los siguientes términos: “La costumbre, es el modo de obrar y conducirse de cada uno, siguiendo, o bien las luces del entendimiento, o bien los sentimientos del corazón; pero estas luces y sentimientos deben tener su principio en la razón y en la religión. Conducirse por la razón y religión, es tener costumbres virtuosas e irreprochables; obrar contra éstas es tener costumbres viciosas y criminales. Las costumbres son buenas o malas, según se conforman, o no, a los principios invariables que deben arreglarlas y formarlas. La regla invariable de las costumbres, el freno poderoso y permanente es la religión. Atacar y destruir la religión es pervertir y corromper las costumbres” (“De las costumbres”, en: *Diario de Madrid*, t. CIII, n. 29, 29 de enero de 1812, pp. 114-115).

¹⁶⁶ CASTILLO DE BOVADILLA, *op. cit.*, t. II, lib. III, cap. VIII, § 10, p. 158.

¹⁶⁷ Las dos obras del catalán Setantí (c. 1540-1617) merecieron especial atención en el *Memorial literario*. En el número correspondiente al 30 de marzo de 1808, y en ocasión de la puesta a la venta de los *Avisos*, se publicó una pequeña crítica de esta obra, en la que se comparan dichos avisos con las *Máximas de la Sabiduría* de Fenelón, con el objeto de probar que la de Setantí “es preferible por muchas causas: con efecto, la mayor copia de máximas políticas y morales, la amenidad y gracia con que las presenta, la fluidez y armonía de los versos y la filosofía de las sentencias, hacen mucho más recomendable la del autor español; y es muy probable, como el editor indica en su advertencia, que los *Avisos de amigo* estuvieron presentes para la composición de las *Máximas de la sabiduría*”. Además, y a fin de comprobar “de que no necesitamos de extranjeros que nos den lecciones de moral y de política”, cita algunas máximas contenidas en las *Centellas de varios conceptos*, las que —según el articulista— “están dichas con un agracia y con una expresión tan propia del carácter español que al mismo tiempo que instruyen recrean el ánimo. En vista de ellas podrán conocer los preocupados contra nuestros libros, si los españoles en efecto han tenido conocimientos de la más refinada política y de la moral, y si han conocido al hombre tal vez mejor que muchos de los ponderados autores extranjeros” (Literatura española. Moral”, en: *Memorial literario...* n. 9, 30 de marzo de 1808, pp. 210 y 218). Más tarde, y aunque en tono irónico, *El Conciso* publicó en 1810 algunas de las máximas de las obras de Setantí (“Concisin”, en: *El Conciso*, n. LIV, 30 de noviembre de 1810, pp. 259-260).

recomendaba que “al regidor que no tiene las manos y costumbres limpias, echarlo fuera del lugar como apeestado, porque sus malos ejemplos son apegadizos como landres, y van de los unos a los otros hasta no dejar hombre sano”¹⁶⁸. En el siglo XVIII, José Berni y Catalá afirmó en 1741 que “no es menester decirse, que los alcaldes no pueden ser [...] de mala fama”¹⁶⁹. Para Vicente Vizcaíno Pérez, no podía ser alcalde aquel “que fuese de mala fama y hubiese hecho cosa por la cual valga menos en el concepto del pueblo”¹⁷⁰. Por su parte, Ignacio García Malo enumeró en 1811 cuáles eran las cualidades que todo magistrado¹⁷¹ debía poseer: “una adhesión inviolable a la justicia, un conocimiento profundo de las leyes [y] un amor inalterable del bien público”. No obstante, se concentró en la cuestión del comportamiento personal, afirmando que

sería una vanidad pueril que cualquiera pretendiese gozar de las prerrogativas de un estado cuando es indigno de él, o cuando no cumple con los deberes que le impone. Para que el magistrado sea respetable, es necesario que se respete a sí mismo. ¿Cómo conservará las costumbres públicas si las suyas son depravadas? ¿Cómo no tendrá vergüenza de castigar, en nombre de la sociedad, unos excesos de que es él mismo cómplice?¹⁷²

¹⁶⁸ JOAQUÍN SETANTÍ, *Centellas de varios conceptos*. Ed. de Emilio Blanco, Barcelona, José J. de Olañeta Editor-Universitat de les Illes Balears, 2006 [1a. ed.: 1614], máxima 392, pp. 143-144. La cuestión pareció preocupar al autor, quien vuelve a insistir sobre el tema: “Si al proveer de los cargos se acrisolase bien el valor de los hombres, saldrían las obras de mejor metal y se excusarían quejas de vasallos” (*Ídem*, máxima 396, p. 144). Asimismo, en los *Avisos de amigo*, expresa que “mal se ordena la ciudad desordenada con los que fueron causa del desorden” (“Avisos de amigo”, en: SETANTÍ, *op. cit.*, aviso 58, p. 170). Según el *Tesoro* de Covarrubias, la voz “landre” se define como “una enfermedad que da en las ingles, o debajo de los sobacos. Está corrompido el nombre de glándula, porque es una seca, o tumor en forma de una bellota; y así se llama en latín glándula. Suelen también y muy ordinariamente dar estas secas en las gargantas, y ahogan al paciente con brevedad, y es género de peste y mal contagioso, que se pega” (SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS, *Tesoro de la lengua castellana o española*, Madrid, Luis Sánchez, 1611, p. 1028). El diccionario citado en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Nuevo tesoro lexicográfico...* cit.

¹⁶⁹ JOSÉ BERNI Y CATALÁ, *Instrucción de alcaldes ordinarios que comprende las obligaciones de éstos, y del amotacén*, Madrid, Ministerio para las Administraciones Públicas, 1988 [1a. ed.: 1741], parte 1ª, cap. I, § 1, p. 2.

¹⁷⁰ VICENTE VIZCAÍNO PÉREZ, “*Tratado de la jurisdicción ordinaria para la dirección y guía de los alcaldes de los pueblos de España*” [1a. ed.: 1781], en: VICENTE VIZCAÍNO PÉREZ; FRANCISCO DE PAULA MIGUEL SÁNCHEZ, *Tratado de la jurisdicción ordinaria para la dirección y guía de los alcaldes de los pueblos de España. Dirección teórico-práctica de alcaldes constitucionales*, Madrid, Instituto de Estudios de la Administración local, 1979, cap. II, p. 50.

¹⁷¹ El mismo autor se preocupó por definirlos, manifestando que “llámanse *magistrados* los que en cada gobierno están encargados de juzgar a sus conciudadanos, de velar sobre la observancia de las leyes, y en una palabra, de mantener el orden y la tranquilidad” (IGNACIO GARCÍA MALO, *La política natural o discurso sobre los verdaderos principios del gobierno*, Mallorca, Imprenta de Miguel Domingo, 1811, “De la magistratura”, p. 100). Bastardilla en el original.

¹⁷² *Ibidem*, “De la magistratura”, p. 102.

Sin embargo, parece que no todos los alcaldes de barrio porteños podían acreditar una hoja de vida impecable. En marzo de 1779 aparecieron pasquines adheridos a los muros de algunos edificios porteños con la intención de protestar contra la reforma que el intendente de la Real Hacienda, Manuel Ignacio Fernández, pretendía implementar, aumentando los derechos de las alcabalas¹⁷³. A eso se sumó la aparición de dos anónimos, cuyo objetivo era el de poner en evidencia los defectos personales de hombres conocidos y bien vinculados a sociedad bonaerense.¹⁷⁴ Los hechos generaron un expediente judicial, y aunque no se logró identificar a los autores de ninguno de los anónimos mencionados, en la sentencia pronunciada el 8 de noviembre, quedaron implicados Josef Vicente Carrancio, Francisco Antonio Escalada, Antonio José Escalada y Agustín Wright por no haber quemado los papeles, por lo que se les condenó

en todas las costas causadas y que se causaren a los supradichos don Josef Vizente Carrancio, don Francisco Antonio y don Antonio Josef Escalada y don Agustín Wright; al primero en tres partes, al segundo y tercero en otras tres de por mitad, y a don Agustín Wright en la séptima parte restante, todos mancomunados, alzándoseles la carcelería en que al primero en su casa y a todos en esta ciudad y sus arrabales se les constituyó, con desembargo de los bienes del doctor Carrancio¹⁷⁵.

Agustín Wright fue obligado a pagar una multa de 200 pesos¹⁷⁶, pese a lo cual se desempeñaría como alcalde de barrio del cuartel número 5 entre 1810 y 1811.

¹⁷³ Entre los impuestos que abonaban los habitantes de las Indias en relación a las actividades desarrolladas y las operaciones efectuadas figuraba la alcabala, contribución que gravaba tanto la primera como las sucesivas ventas de efectos. Al principio fue de del dos por ciento sobre el valor del objeto, llegando a incrementarse hasta el seis por ciento durante los siglos XVII y XVIII con tasas adicionales. Sin embargo, algunos artículos se encontraban exentos de este impuesto: pan, libros, caballos, armas, pinturas, etc. (TAU ANZOÁTEGUI, MARTÍRE, *op. cit.*, p. 140).

¹⁷⁴ El anónimo tenía el título de "Noticias de las cosas que más me chocan o enfadan" y aparecía firmado con las iniciales "F.A.M. Triangulipicommatifis" (JOSÉ ANTONIO PILLADO, *Buenos Aires colonial. Edificios y costumbres*, vol. I [Pasquines y anónimos], Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1910, p. 211; SOCOLOW, *The Merchants...* cit., p. 86).

¹⁷⁵ PILLADO, *op. cit.*, pp. 186-187. Sobre el detalle de los acontecimientos y sus consecuencias, v. TORRE REVELLO, *Crónicas...* cit., p. 213 y ss.

¹⁷⁶ SOCOLOW, *The Merchants...* cit., pp. 86 y 220. Otro de los condenados, Francisco Antonio de Escalada, se encontraba desempeñándose como alcalde de barrio del cuartel número 3, tal como lo indica la notificación del virrey a estos funcionarios de 4 de octubre de 1779 (V. Apéndice D, texto III); aparentemente el suceso no tuvo consecuencia alguna en el ejercicio de dicha alcaldía, circunstancia que cambiaría poco tiempo después (V. *infra*, cap. VII). Según Torre Revello, los hermanos Escalada elevaron memoriales al monarca el 24 de noviembre de 1779 y el 22 de enero del año siguiente en los que "relatan los hechos ya referidos sobre los anónimos y se quejan de haberse dado demasiado estrépito al asunto por todo el virreinato; defienden a Carrancio, de quien dicen que es abogado de crédito y señalan al secretario de Cámara del virrey, Antonio Aldao, como perseguidor del anterior y principal causante por lo tanto del ruido y alboroto" (TORRE REVELLO, *Crónicas...* cit., p. 218). Sobre el memorial elevado por los Escalada a comienzos de 1780, v. *Catálogo de documentos del Archivo de Indias en Sevilla*,

También en 1779, una real orden de 28 de mayo condenó a Cecilio Sánchez de Velasco —que aún se encontraba desempeñando la alcaldía de barrio del cuartel número 4 y ocuparía las de los cuarteles número 9 entre 1794-1796 y número 10 hasta 1805¹⁷⁷— a quedar privado de “ejercer los oficios de ciudad por un sexenio en castigo de haber igualmente firmado la citada representación”¹⁷⁸, en razón de aparecer entre los autores de una representación que el cabildo dirigió el 11 de abril de 1778, al saliente virrey Pedro de Cevallos y que fue considerada una perniciosa actitud hacia a la investidura del nuevo virrey, Juan José de Vértiz¹⁷⁹.

Asimismo, parece ser que el mencionado Sánchez de Velasco no era conocido precisamente por su “amor al público”: en 1773, solicitó se le admitiera “la obligación de abastecer esta ciudad de carne por el término de cinco años bajo las condiciones que propone”. La propuesta mereció un dictamen fulminante del entonces síndico procurador general Manuel Manuel Basabilvaso, quien expresó que

aunque los términos en que se halla concebida la pretensión de don Cecilio Sánchez manifiesta por sí misma el desprecio que merece, pues no sólo se dirige a despojar al pueblo o público de aquella libertad, que tanto recomiendan los derechos, y que le es tan ventajosa en las circunstancias que concurren en esta ciudad sino que consultando sólo a su propio beneficio, no se encontrará proposición alguna que aún guarde aquellas apariencias con que pudiera hacerse de alguna recomendación su proyecto. De suerte que confiesa el procurador no haber podido menos que escandalizarse de la temeridad y arrojo de este individuo, que siendo vecino y habiendo disfrutado el año anterior del honor de que esta república le condecorase eligiéndole para uno de sus miembros con la distinción de preferirle a otros más antiguos moradores y vecinos, se hace mucho más reprehensible una solicitud que no tiene otro objeto que los considerables perjuicios que resultarían al común, con manifiestas utilidades suyas¹⁸⁰.

referentes a la historia de la República Argentina, vol. II, Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 1901, p. 380. El texto de dicho memorial en AGI, Buenos Aires, leg. 308). Lo cierto es que lo sucedido motivó que el virrey Vértiz dictara un bando el 5 de noviembre de 1779 prohibiendo “componer, escribir, trasladar, distribuir y expender pasquines, sátiras, versos, manifiestos y otros papeles sediciosos e injuriosos a personas públicas o a cualquiera particular, y de permitir su lectura en su presencia” y ordenando que “todos los que los tuvieren los entreguen a cualquiera de los jueces ordinarios de esta ciudad en el término preciso de veinticuatro horas, pena que de lo contrario serán castigados los contraventores conforme al rigor de las leyes y bandos publicados de orden de Su Majestad” (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, *Documentos para la historia del Virreinato del Río de la Plata*, t. I, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1912, pp. 281-282; TORRE REVELLO, *Crónicas...* cit., p. 217). Sobre la inclusión de preceptos similares en los bandos de buen gobierno dictados en las dos últimas décadas virreinales, v. TAU ANZOÁTEGUI, *Los bandos...* cit., pp. 77-78.

¹⁷⁷ V. Apéndices A y C.

¹⁷⁸ *Acuerdos...* Buenos Aires, 1929, 3ª serie, t. VI, p. 428; SOCOLOW, *The Merchants...* cit., p. 123.

¹⁷⁹ Sobre las implicancias de esta real orden para los alcaldes de barrio que —en ejercicio de sus empleos— firmaron dicha representación, v. *infra*, cap. VII.

¹⁸⁰ Más adelante agrega que en la ciudad se consumían de cuarenta a cincuenta mil cabezas de ganado, “y que por este principio y el de pagar el asentista los 12 reales que propone [...], según muy racional e individual cálculo sacaría de utilidad más de ochenta mil pesos anuales; ¿y qué razón puede encontrarse

II.2. Período indiano: cuestiones no normadas

Hasta aquí, los requisitos que la normativa del período hispánico sobre alcaldes de barrio mandaba cumplir. Sin embargo, el análisis de las fuentes sugiere que se tuvieron en cuenta otros criterios en el momento de designar a estos agentes en la ciudad de Buenos Aires.

II. 2. 1. Valor de la experiencia

Entre estos criterios se cuenta la experiencia de cada uno de los candidatos. Al respecto, la designación reiterada de las mismas personas para ocupar el cargo en varias oportunidades sugiere el posible reconocimiento del valor de la experiencia a la hora de seleccionar a los candidatos, cuestión en la que ya había insistido Valentín de Foronda a fines del siglo XVIII:

Dígame señor mío, cuando quiere tener un vestido bien hecho [¿] no recurre a un sastre que sepa bien el oficio? Si vuestra merced se equivoca en la elección, [¿] no le despide y busca otro? Pues siga el mismo sistema en su Ínsula en lo que respecta al gobierno civil. Se trata por ejemplo de nombrar alcaldes y regidores; en este caso procure examinar quiénes son los sujetos que han aprendido estos oficios, que tienen mucho que aprender sin embargo de que creen todos saberlos: no bastando seguramente ocupar sillas consistoriales para infalibilizarse, como los Papas cuando se sientan en la de San Pedro¹⁸¹.

Sin embargo, la reiteración de los mismos nombres para ocupar varias alcaldías de barrio de la ciudad de Buenos Aires¹⁸², puede deberse a otra razón más bien práctica,

para quitar esta utilidad, que se reparte entre tanto infeliz que se emplea en esto, y que girara en el pueblo, para darla a don Cecilio Sánchez y otros pocos que se han propuesto enriquecerse y atesorar a costa de la miseria de tanto pobre y del común, por sólo el corto trabajo de hacer el descubrimiento de un proyecto que las personas sensatas se avergonzarían aun de que les hubiere venido a la memoria tal ofrecimiento?" (Manuel Basabilvaso al cabildo, Buenos Aires, 4 de diciembre de 1773, en FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, *Documentos para la historia argentina*, t. IV, cit., pp. 3-4 y 10-11). Cecilio Sánchez de Velasco se había desempeñado como regidor durante 1772. V. Apéndice C.

¹⁸¹ VALENTÍN DE FORONDA, "Carta-disertación sobre el modo de dirigirse los que gobiernan en orden a los víveres", Vitoria, 24 de julio de 1799, en: M. BENAVIDES; C. ROLLAN (EDS.), *Valentín de Foronda. Los sueños de la razón*, Madrid, Editora Nacional, 1984, p. 348. Las obras de Valentín de Foronda eran conocidas en el Río de la Plata; así, las *Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la Economía política* publicadas en Madrid en 1789 formaban parte de la biblioteca del obispo de Buenos Aires, Manuel Azamor y Ramírez (DAISY RÍPODAS ARDANAZ, *El obispo Azamor y Ramírez. Tradición cristiana y modernidad*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1982, p. 94); asimismo, habían sido manejadas por el publicista porteño José Joaquín de Araujo y el comerciante español Juan Bautista Ituarte (DAISY RÍPODAS ARDANAZ, "En el Buenos Aires virreinal. El dictamen de Saavedra sobre gremios (1799)", en: RÍPODAS ARDANAZ, *Refracción...* cit., p. 128). Además, Rípodas Ardanaz ha probado la influencia que uno de sus escritos tuvo en el dictamen presentado en 1799 por el síndico procurador general del cabildo, Cornelio de Saavedra, en los autos sobre el establecimiento de un gremio de zapateros en la ciudad (*Ibidem*, pp. 123-136).

¹⁸² V. Apéndices A y C.

relacionada con el enorme crecimiento que, durante la segunda mitad del siglo XVIII, experimentó el funcionariado hispanoamericano y la cantidad insuficiente de individuos con capacidad para ocupar la multiplicidad de cargos administrativos subsiguientes, idea en la que insiste Socolow¹⁸³.

II. 2. 2. Acierto en la elección de los candidatos

Del acierto en “la elección de los oficios de ayuntamiento en un pueblo” – expresó en 1790 José Agustín Ibáñez de la Rentería- “pende el buen estado de la república; y al contrario su mayor desgracia, si fiando el precioso depósito de su administración a los sujetos de que se compone el cuerpo gubernativo, queda esta confianza en sujetos indignos de tenerla”¹⁸⁴. Teniendo en cuenta que

de tanta consideración y momento es la creación de buenos magistrados en cualquiera república, que todas las cosas dependen sin duda de esta sola, porque a la verdad de ella nace toda su felicidad y bienaventuranza, o todo su daño y miseria; de modo que si en su elección se yerra, irá también errado todo el gobierno del pueblo y la administración de justicia, en tales términos, que toda su ruina puede acaso resultar de elegir por juez a quien no conviene, y dejar de nombrar a quien lo ha de hacer bien en su oficio [pues] no hacen tanto daño a la república los bandidos o salteadores de caminos, como los malos jueces, [quienes] son como el carbonero a quien se encarga el cuidado de la ropa blanca, que con sólo tomarla en sus manos, la tizna y mancha.¹⁸⁵

De esta manera, entre las “calidades, buenas prendas, costumbres y virtudes morales y civiles” que debían poseer los candidatos a desempeñar cargos públicos, Lorenzo Guardiola y Sáez incluyó en su *Corregidor perfecto* las de que

sean de buen linaje, prefiriendo los nobles a los plebeyos en iguales circunstancias de virtud y ciencia; de buen entendimiento; de buenas razones y palabras; sufridos, no soberbios ni banderos; justicieros, esto es, amantes de la justicia, rectos y constantes en administrarla conforme a las leyes; esto es, fuertes y animosos, no pusilánimes o de poco espíritu, aliento y brío para hacer justicia a todos y perseguir a los malhechores; leales, de buena fama, sin codicia, no avarientos; ni amigos de dádivas, presentes ni

¹⁸³ SOCOLOW, *The Bureaucrats...* cit., p. 25 y ss.

¹⁸⁴ JOSÉ AGUSTÍN IBÁÑEZ DE LA RENTERÍA, “Discurso cuarto. Sobre el gobierno municipal”, en: JOSÉ AGUSTÍN IBÁÑEZ DE LA RENTERÍA, *Discursos que don Joseph Agustín Ibáñez de la Rentería presentó a la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en sus Juntas generales de los años 1780, 81 y 83*, Madrid, Pantaleón Aznar, 1790, pp. 196-197. Para 1814 se seguía haciendo hincapié en la misma idea, vinculando la bonanza nacional a la elección de buenos funcionarios; al respecto, el *Diario de Mallorca* publicó que “del acierto en la elección de personas que hayan de servir los empleos” dependía “muy principalmente [...] la prosperidad del Estado” (*Diario de Mallorca*, a. VI, n. 248, 24 de octubre de 1814, p. 1223).

¹⁸⁵ LORENZO GUARDIOLA Y SÁEZ, *El corregidor perfecto y juez exactamente dotado de las calidades necesarias y convenientes para la recta administración de justicia...* Madrid, Imprenta Real, 1796, parte II, cap. III, § 1, pp. 43-44.

cohechos; sabios, prudentes, veraces o amigos de la verdad, y sobre todo temerosos de Dios y del rey¹⁸⁶.

Junto a estas cualidades, consideradas “indispensables en los magistrados inferiores”, Guardiola y Sáez recomendó que debían asimismo “estar dotados de otras muchas, no menos necesarias” tales como las de ser

sobrios, modestos, agradables, benignos, corteses y afables. No iracundos, altivos, ni crueles, o sobradamente duros y severos con los súbditos, graves, templados y mensurados, así en el gesto, pasos y palabras; como en el aseo, adorno y compostura de sus personas; no muy habladores ni jactanciosos de sí mismos, cautos, no secuaces de los errores de sus antecesores; no pomposos o presuntuosos, persuadiéndose que todo se lo saben, y despreciando los buenos consejos; ni noveleros, esto es, amigos de hacer novedades, alterando los buenos usos y costumbres de sus respectivos pueblos, o estableciéndolas de nuevo sin causa ni utilidad pública; ni precipitados o negligentes en sus determinaciones; ni fáciles o sobradamente incrédulos; sean recatados y no sospechosos ni maliciosos, ni hagan profesión de ser astutos; sean castos; no dados a convites, especialmente privados; ni tengan amistades estrechas, mayormente en los pueblos de bandos y parcialidades, excusándose de juegos, bailes y otros pasatiempos impropios de sus oficios; no sean orgullosos, austeros ni muy tristes y melancólicos, acomodando el propio genio al de los súbditos; no extremados, ni singulares en sus deliberaciones; y en fin, que su principal intento sea el bien común de la república, el cuidado de los abastos públicos, la observancia de las leyes y el amparo de los súbditos, sin olvidarse del socorro de los pobres, del amor de los huérfanos, de la veneración de los templos, de la protección de las virtudes, y del breve despacho de los negocios y querellas, juzgando siempre lo justo sin distinción de personas¹⁸⁷.

Por su parte, Ibáñez de la Rentería advirtió sobre los problemas que presentaba la cuestión de los requisitos que debían poseer los potenciales capitulares, pues a su juicio el “sistema político municipal” se topaba con dos escollos fundamentales, siendo el primero “añadir calidades inútiles para impedir a muchos ciudadanos beneméritos la entrada en los empleos”, probando así a “la república de sujetos celosos y hábiles que la sirvan, y al mismo tiempo sirven de efugio a otros que no careciendo de talento y probidad, son sin embargo perezosos para arrimar el hombro al gobierno público”. Por otro lado, facilitar “la entrada a todos con un espíritu popular” sería “muy laudable” si con ello “no padeciese la causa pública”. Al respecto, afirmó que

¹⁸⁶ *Ibidem*, parte II, cap. III, § resumen, p. 57. El propio Guardiola incluyó en su obra algunas precisiones conceptuales respecto de algunos de los términos aludidos; así, por “sufridos” entiende a los “mansos, no soberbios ni iracundos” (*Ibidem*, parte II, cap. III, § 8, p. 49); asimismo, define “bandería o parcialidad cuando por amistad o respeto de uno se hace injuria o daño a otro” (*Ibidem*, parte II, cap. III, § 9, p. 51). Sobre la preferencia de los nobles por sobre los plebeyos, v. ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen*, Madrid, Ediciones Akal, 2012, p. 185 y ss.

¹⁸⁷ GUARDIOLA Y SÁEZ, *op. cit.*, parte II, cap. III, § resumen, pp. 86-87.

En los pueblos pequeños la falta de sujetos y la misma facilidad de la administración de los asuntos por su cortedad de vecindario obligue a quitar estorbos para que este honor pase por casi todos, no es de extrañar; pero si se siguiese este sistema en pueblos grandes, cuyo vecindario, consumo y rentas fuesen de consideración, no dejaría de traer los mayores inconvenientes¹⁸⁸.

II. 2. 3. Impedimentos

Se observa que en ocasiones no se explicitaron cuáles eran las condiciones específicas que debían poseer los candidatos a las alcaldías, limitándose los encargados de su designación a declarar que tal o cual sujeto tenía “las cualidades necesarias para desempeñar este cargo”¹⁸⁹ o bien que en él “concurren todas las circunstancias que se requieren para ejercer [o desempeñar] este cargo”¹⁹⁰. En contraposición, existía obviamente un abanico de impedimentos, cuyo detalle también resulta importante conocer. Con tal fin, es necesario examinar las reflexiones que los tratadistas de la época incluyeron en sus obras sobre quién podía y quién estaba impedido de ejercer empleos de república.

Con respecto a las “personas que están prohibidas de obtener” dichos oficios, Guardiola y Sáez enumeró una serie de condiciones –algunas de las cuales fueron usadas por varios alcaldes de barrio para solicitar la exención del cargo¹⁹¹– que impedían el desempeño de cargos públicos, afirmando que

¹⁸⁸ JOSÉ AGUSTÍN IBÁÑEZ DE LA RENTERÍA, “Discurso cuarto. Sobre el gobierno municipal”, en: IBÁÑEZ DE LA RENTERÍA, *Discursos...* cit., pp. 204-205. A continuación, señaló cuáles eran los principales inconvenientes mencionados: “Cuanto mayor sea un pueblo, tanto más activa debe ser la autoridad del gobierno para contenerlo en su deber y dar el resorte necesario a los grandes objetos que le son consiguientes y que por lo mismo tienen enlace más inmediato con el sistema general del Estado. Si en semejantes pueblos se ponen a la cabeza de la administración sujetos de bajo nacimiento, abatidos por la pobreza, desnudos de educación, talento y vigor; ¿qué consecuencias tan fatales no se pueden esperar? El Estado mismo será el que venga a perder más por estos cuerpos municipales, vergonzosos y desautorizados. [...] La probidad y talento en los hombres, como todas las calidades del ánimo, son las más capaces de disputa: las circunstancias del cuerpo y las de la fortuna tienen señales determinadas, pero las otras dependen de un concepto incapaz de ajustarse a medida. Así éste es un asunto que es necesario dejarlo a la buena fe del público y al efecto notable que causa su concepto” (*Ibidem*, pp. 205-207). Sobre la escasez de personas adecuadas para el desempeño de cargos públicos, v. *infra*, nota 825.

¹⁸⁹ *Acuerdos...* Buenos Aires, 1933, 3ª serie, t. XI, p. 575; *Acuerdos...* Buenos Aires, 1927, 4ª serie, t. III, p. 491.

¹⁹⁰ *Acuerdos...* Buenos Aires, 1933, 3ª serie, t. XI, pp. 586-587; *Acuerdos...* Buenos Aires, 1925, 4ª serie, t. I, p. 31. En ocasión de la designación de Francisco Gama como alcalde de barrio del cuartel número 4, el cabildo informó al virrey Cisneros el 4 de enero de 1810 que en Gama “concurren todas las precisas circunstancias” para proceder a su nombramiento (ADOLFO P. CARRANZA (DIR.), *Archivo General de la República Argentina. Periodo de la Independencia. Año 1810*, segunda serie, tomo V, Buenos Aires, Litografía, imprenta y encuadernación de G. Kraft, 1896, p. 282).

¹⁹¹ V. *infra*, cap. VII.

no todos pueden ejercer estos oficios públicos, pues a unos excluye de ellos el defecto personal, a otros su estado y sexo, a otros su propio delito o el cometido en sus mayores, y a otros la ley o razón política; siendo regla general que cualquiera es capaz de ejercerlos si el derecho no se lo prohíbe¹⁹².

Dentro de estas prohibiciones se encuadraría lo dispuesto por una real cédula dada en 1775 y proclamada nuevamente en 1785 y 1799, según la cual dos miembros de la misma familia no podían estar empleados en la misma agencia de la administración indiana. Esta prohibición cubría un espectro de relaciones familiares que incluía padre e hijo, suegro y yerno, hermanos y tío y sobrino¹⁹³. Para el caso de los alcaldes de barrio porteños, y de acuerdo con la información recogida en el apéndice C, hasta donde se sabe la alcaldía de barrio no fue desempeñada simultáneamente por personas ligadas

¹⁹² GUARDIOLA Y SÁEZ, *op. cit.*, parte II, cap. II, § 1, p. 36. Puntualmente, para el autor "no pueden ser jueces seculares ni eclesiásticos los desentendidos; esto es, los locos, tontos o fatuos; los mudos, sordos, ciegos; continuamente enfermos de enfermedad que les impida el cumplimiento de las obligaciones de su ministerio; los de mala fama, o que hubiesen dado motivo para ser menos estimados; la mujer, no siendo reina, duquesa, condesa, marquesa o señora temporal, aconsejándose de hombres sabios; los esclavos reputados por tales, ni los religiosos en lo secular; [...] ni los que están presos o desterrados durante su prisión o destierro, ni aún después, si fue por causa infamatoria; ni los que están públicamente excomulgados, o amancebados; ni el interesado en causa propia, o en la que hubiere sido abogado o dado consejo [...] bastando para ser alcaldes ordinarios o delegados la [edad] de veinte años cumplidos; ni los obligados a los abastos, arrendadores de rentas reales o concejiles, ni sus fiadores, abonadores o aseguradores; a lo menos se prohíben estos ministerios a los corregidores, alcaldes, justicias, regidores, escribanos de ayuntamiento o del número, y a cualesquiera otros oficiales de república, como también ser tesoreros de las dichas rentas [...] Tampoco pueden serlo los deudores al pósito o caudales de la república; los extranjeros o no naturales de estos reinos [v. *supra*]; los que no son legítimos; los notados de infames o acusados de delito público; los que por sentencia hubieren sido privados del honor futuro, o de tener oficios públicos; [...] los reconciliados por delito de herejía y apostasía, ni los hijos y descendientes de los condenados, o castigados por tan horrendo delito hasta la segunda generación por línea masculina, y hasta la primera por la femenina; ni el traidor al rey o reino, ni sus hijos varones, o nietos, siendo engendrados antes de cometerse la traición [...]. Asimismo no pueden ser promovidos a los oficios de justicia y gobierno los ambiciosos y avaros; porque este vicio, que suelen padecer los hombres que no temen a Dios, es ciertamente la raíz de todos los males, e hijo de la soberbia; de suerte que sólo él basta para destruir toda una república [...]. Asimismo no deben ser propuestos ni consultados para ningún oficio político ni militar los que estuvieren notados del abominable vicio de jurar el Santo Nombre de Dios en vano; y por último, dice un político, que es tan perjudicial colocar un mal hombre en la magistratura como poner un cuchillo en la mano de un loco; es ciertamente proporcionar los medios para que obre mal aquel que tenga la voluntad pronta para ello". (*Ibidem*, parte II, cap. II, § 2-8, pp. 36-43).

¹⁹³ SOCOLOW, *The Bureaucrats...* cit., p. 195. Respecto del parentesco, Vizcaino Pérez afirmó que "no pueden ser elegidos por alcaldes los que tengan parentesco con los que dejan de serlo, ni con los que han tenido oficio de república el año anterior; aquellos que sean sus hijos, padres, abuelos, yernos, hermanos, primos, cuñados, hijastros o agnados, ni parientes dentro del cuatro grado, por los inconvenientes que de esto resultan de tales conexidades, según está declarado o prevenido en órdenes generales de los años de 1722, 1725 y 1752" (VIZCAINO PÉREZ, *op. cit.*, cap. II, p. 51). En ocasión de la elección de los miembros que integrarían el cabildo cordobés para el año de 1802, el fiscal Márquez de la Plata estableció "ser cierto el parentesco inmediato dentro del cuarto grado entre don Cipriano Moyano, y don Dalmacio de Allende electos para alcaldes de primero y segundo voto, como hijo de una prima hermana de aquél", por lo que ordenó se procediera "a nueva elección para dicha alcaldía de segundo voto con arreglo a lo dispuesto por el auto de 26 de noviembre último proveído con dictamen del real acuerdo" ("1801. Elecciones del cabildo de Córdoba para el año de 1802. Vista del 13 de abril de 1802", en: LEVAGGI, *El virreinato rioplatense...* cit., v. III, p. 1009).

familiarmente según lo dispuesto por la mencionada real cédula. El caso de Manuel de Escalada y Francisco Antonio de Escalada –padre e hijo– queda fuera de las consideraciones establecidas por la real cédula, ya que el primero fue sustituido, al fallecer, por el segundo.

II. 2. 4. La mujer

Con respecto al posible desempeño de cargos públicos por mujeres, se sabe que a lo largo de los siglos y sobre diversos argumentos se coincidía en que no podía permitirse el ingreso de la mujer a la administración pública¹⁹⁴. Basta recordar la máxima de Setantí –cuya vigencia ya se mencionó¹⁹⁵– según la cual se habría preguntado a Nerón “si en caso que faltasen todos los hombres aptos para gobernar provincias sería bien proveer los cargos en mujeres ilustres y famosas”, a lo que el emperador habría respondido “que no, sino en cualesquiera de los otros animales, aunque fuesen tigres o leones, porque en fin, del mal lo menos”¹⁹⁶. En la misma línea véanse, por ejemplo, las *Agudezas* compuestas por Juan Oven¹⁹⁷ cuya segunda parte, traducida por Francisco de la Torre y Sevil, fue publicada en Madrid en 1721 y, más tarde, reproducida por Francisco Mariano Nipho en su *Cajón de Sastre*:

Lea de la Escritura tu cuidado/ El profundo volumen más sagrado;/ Y en él advertirá tu vista atenta,/ Que de Niño, y Mujer no se hace cuenta./ Quedan Niño, y Mujer nunca admitidos,/ De los civiles cargos excluidos¹⁹⁸

¹⁹⁴ MARILUZ URQUIJO, *El agente...* cit., pp. 125-126.

¹⁹⁵ V. *supra*, nota 167.

¹⁹⁶ SETANTÍ, *op. cit.*, máxima 417, p. 149.

¹⁹⁷ La primera parte de la obra en cuestión del teólogo inglés John Owen fue traducida y publicada en 1674 en castellano por Francisco de la Torre, con adiciones y notas propias. Sobre la problemática de la traducción de Francisco de la Torre y Sevil, v. INÉS RAVASINI, “John Owen y Francisco de la Torre y Sevil. De la traducción a la imitación”, en: IGNACIO ARELLANO AYUSO; CARMEN PINILLOS SALVADOR; MARC VITSE, FRÉDÉRIC SERRALTA (COORDS.), *Studia aurea: actas del III Congreso de la AISO (Toulouse, 1993)*, vol. 1, Navarra, GRISO (Grupo de Investigación Siglo de Oro Universidad de Navarra), 1996, pp. 457-466. Disponible en: <http://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/03/aiso_3_1_045.pdf>. Acceso en: nov. 2015.

¹⁹⁸ “Paralelo entre mujeres y niños. Pareados”, en: *Cajón de Sastre literato, etc. Nuevamente corregido y aumentado*, tomo segundo, Madrid, Imprenta de Miguel Escribano, 1781, cosido tercero, retal V, § 32, p. 143. Para justificar dicha exclusión, el *Diario de Madrid* explicó en 1791 que “el gobierno interior de los pueblos, la administración diaria de la justicia, la defensa militar de los imperios etcétera, piden una aplicación vehemente y continua, un valor varonil e inflexible, y una fortaleza de temperamento constante e inalterable; la naturaleza las prodiga al hombre, y así da a entender que le destina a trabajar de este modo para la dicha de la sociedad civil” (“Instrucción de las mujeres”, en: *Diario de Madrid*, t. XXII, n. 320, 16 de noviembre de 1791, p. 1290).

En 1726 el padre Feijóo deshizo este argumento probando que no existía desigualdad alguna entre las capacidades de uno y otro sexo. En su “Defensa de las mujeres” afirmó que “de prudencia política sobran ejemplos en mil princesas por extremo hábiles”¹⁹⁹. Para Feijóo, la sujeción de la mujer al hombre debía buscarse en el relato de Adán y Eva: aunque expresó que “ni es en el mundo tan universal, como se piensa, la persuasión de que en la cabeza de la mujer no asienta bien la corona”, recordó que “la práctica común de las naciones es más conforme a la razón, como correspondiente al divino decreto, notificado a nuestra primer madre en el paraíso, donde a ella y a todas sus hijas en su nombre se le intimó la sujeción a los hombres”. En virtud de ello, Feijóo era de la opinión que debía corregirse, por un lado, “la impaciencia con que muchas veces llevan los pueblos el gobierno mujeril, cuando según las leyes se les debe obedecer” y, por otro, “aquella propasada estimación de nuestro sexo, que tal vez ha preferido para el régimen un niño incapaz a una mujer hecha”²⁰⁰.

Ya promediando el siglo, Juan Bautista Cubié escribió una obra reivindicatoria del sexo femenino en la que, afirmó que a las mujeres “se fia el cuidado del gobierno económico”, siendo éste “el ejercicio a que sólo deben atender”. Para Cubié, el hombre debía “adquirir los medios para la manutención de su familia”, correspondiendo a la mujer “la conservación de ellos y el gobierno para distribuirlos”²⁰¹. En virtud de ello, explicó que la razón por la cual los legisladores prohibieron su empleo en cargos públicos fue

no por considerarles incapaces para el desempeño, ni por despreciarlas, sino por no exponer el honor y el decoro de ellas. Porque siendo necesario en los cargos o ministerios conversar con una multitud de personas de ambos sexos, y en parajes o sitios públicos, no es conveniente al decoro de las mujeres intervenir tan libremente en la comunicación con tantos hombres. A no haber esta prohibición, la continua conversación de aquéllas con los hombres ocasionaría sin duda muchos desórdenes.

¹⁹⁹ BENITO GERÓNIMO FEIJÓO Y MONTENEGRO, “Defensa de las mujeres”, en: BENITO GERÓNIMO FEIJÓO Y MONTENEGRO, *Teatro Crítico Universal. Discursos varios en todo género de materias, para desengaño de errores comunes*, tomo primero, Madrid, Joaquín Ibarra, Impresor de Cámara de S. M., 1778, § VI, n. 35, p. 337 [1ª. Ed.: 1726].

²⁰⁰ *Ibidem*, § VI, n. 38 y 40, p. 339-340. Sobre la razón de la sujeción de la mujer, estableció que “fue absolutamente pena del pecado [...] No se infiere que la preferencia se le dio al hombre por exceder a la mujer en entendimiento, sino porque la mujer le dio la primera ocasión al delito”. Además, y “aunque sean iguales los talentos, es preciso que uno de los dos sea primera cabeza para el gobierno de casa y familia; lo demás sería confusión y desorden” (*Ibidem*, § XXIII, n. 150 y 151, p. 388).

²⁰¹ JUAN BAUTISTA CUBIÉ, *Las mujeres vindicadas de las calumnias de los hombres. Con un catálogo de las españolas, que más se han distinguido en ciencias y armas*, Valladolid, Maxtor, 2001 [1a. ed.: 1768], cap. IV, pp. 32-33.

Mas aclaró que “cuando a una mujer pertenece por derecho la sucesión de un reino u otra cualquiera dignidad”, los legisladores “ordenan que pueda disfrutarla y disponer libremente de ella”²⁰². Unos años después, y al ocuparse de establecer quienes podían desempeñarse como alcaldes, Vicente Vizcaíno Pérez afirmó que las mujeres no podían ocupar dicho cargo “si no es que sea reina o condesa u otra señora que heredase o la perteneciese el dominio o señoría temporal de dicho pueblo, que éstas por su dignidad pueden tener jurisdicción y ejercerla, pero asesorándose o aconsejándose con hombres sabios”²⁰³.

El argumento de los casos de mujeres que ostentaron semejantes dignidades fue recogido más tarde por Josefa Amar y Borbón, quien en 1786 afirmó que si bien las mujeres sabían que no podían “aspirar a ningún empleo, ni recompensa pública” y que “sus ideas” no tenían “más extensión que las paredes de una casa, o de un convento”²⁰⁴, existían numerosos casos que demostraban la pobreza de dicha idea. Amar y Borbón se preocupó por resaltar —utilizando diversos ejemplos históricos— la prudencia que muchas mujeres habían tenido en el “gobierno de los negocios públicos”, señalando que “casi todas las que han estado en precisión de mandar pueblos enteros lo han hecho con acierto”. En tal sentido recomendó consultar “las historias generales y particulares para ver si en igual número de reyes, o de reinas, que han regido estados, se hallan tantos héroes como heroínas”, destacando lo realizado por Isabel la Católica en España, las reinas Isabel y Ana en Inglaterra, y “las dos Catalinas” en Rusia²⁰⁵. Para el caso del Río de la Plata, Francisco Bruno de Rivarola afirmó —apelando una vez más al principio *Historia Magistra Vitae*— que “la historia de todos los siglos nos enseña que hubieron mujeres sabias, prudentes y con todas las disposiciones de ingenio que admiramos en

²⁰² *Ibidem*, cap. X, pp. 73-74.

²⁰³ VIZCAÍNO PÉREZ, *op. cit.*, cap. II, p. 50.

²⁰⁴ JOSEFA AMAR Y BORBÓN, *Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para el gobierno, y otros cargos en que se emplean los hombres*, Barcelona, Linkgua, 2012, § 6º, p. 12. El discurso fue publicado originalmente en el *Memorial literario*, 1786, pp. 399-430 (FRANCISCO AGUILAR PIÑAL, *Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII*, t. I, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto “Miguel de Cervantes”, 1981, p. 229).

²⁰⁵ AMAR Y BORBÓN, *op. cit.*, § 13º, p. 15.

los hombres”²⁰⁶. Asimismo, se cuenta con la opinión del *Telégrafo mercantil*, en cuyas páginas se expresó que

respecto de las fundaciones contenciosas de la magistratura, como que exigen un absoluto desprendimiento de todo cuidado doméstico, a menos que no se imiten aquellos pueblos salvajes y singulares en donde los hombres se ponen en la cama cuando paren sus mujeres, y que se viva como ellos de la pesca andando desnudos etc., no es posible que las buenas madres de familias asistan todos los días a los tribunales sin que su casa esté en desorden. No es lo mismo es cuanto a la parte política; lejos de estar separadas las mujeres, se las ve por todas partes gobernar de hecho, y puede ser de derecho, desde el trono hasta la cabaña. ¿No se deben los mejores gobiernos a reinas y emperatrices? ¿Y las casas restablecidas no lo han sido comúnmente por viudas? Todos los días se ven a la cabeza del gobierno económico y doméstico, el más complicado a aquél que después del gobierno supremo es, a mi modo de pensar, el que necesita mayor inteligencia y vigilancia; se ven digo mujeres que conducen esta vasta máquina con la mayor facilidad, lo que nunca podrá hacer un hombre sólo sin arruinarse a menos que no le ayude alguna mujer que le pertenezca por algún parentesco muy inmediato. Si parece pues, que las funciones públicas no convienen al sexo [femenino], es porque está encargado de obligaciones privadas, y éstas son las más esenciales; ellas excluyen las públicas, fuera de las funciones principales que no convienen menos a las mujeres que a los hombres²⁰⁷.

II. 2. 5. Desempeño de oficios mecánicos y actividades comerciales

La cuestión del desempeño de oficios mecánicos por parte de los candidatos a actuar como alcaldes de barrio merece una consideración aparte. La exclusión del acceso al ejercicio de oficios concejiles que se imponía a quienes desempeñaran artes u oficios agregaba el requisito de una ocupación aceptada²⁰⁸. Hasta el siglo XVIII, la legislación española inhibió a los que hubiesen ejercido antes o todavía ejercieran oficios mecánicos de ocupar cargos públicos. En efecto, una ley dictada en el reinado de Juan II, en 1432, y registrada en el Libro IV, Título I de las *Ordenanzas Reales de Castilla* dispuso que los caballeros “no vivan en oficios bajos y no nobles” (Ley VI²⁰⁹) y otra ley del mismo monarca, de 1447, estipuló que “[s]iendo público, y notorio que

²⁰⁶ RIVAROLA, *op. cit.*, libro primero, parte segunda, “Medio segundo. Colegios de instrucción del bello sexo”, p. 116.

²⁰⁷ “Educación. Reflexiones sobre la educación de las mujeres”, en: *Telégrafo mercantil*... t. III, n. 13, 28 de marzo de 1802, fs. 191-192. Para otras valoraciones sobre si la mujer podía o no ocupar cargos públicos, v. MÓNICA P. MARTINI, “Discurso sobre las mujeres en los periódicos coloniales de la América meridional”, en: *Páginas sobre Hispanoamérica colonial*, n. 2, Buenos Aires, PHRISCO-CONICET, 1995, pp. 33-34.

²⁰⁸ Al respecto, v. ANTONIO MANUEL MORAL RONCAL, “Honor, vileza y honra de los oficios mecánicos en el siglo XVIII”, en: *Baética. Estudios de Arte, Geografía e Historia*, n. 18, Málaga, Facultad de Filosofía y Letras-Universidad de Málaga, 1996, pp. 379-385. Disponible en: <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=95356>>. Acceso: nov. 2015.

²⁰⁹ *Ordenanzas reales de Castilla. Recopiladas y compuestas por el doctor Alonso Díaz de Montalvo*, t. II, Madrid, Imprenta de Josef Doblado, 1779, p. 774.

estos tales [caballeros] no viven por oficios de sastres, ni de pellejeros, ni carpinteros, ni pedreros, ni terreros, tondidores, ni barberos, ni especieros, ni recatones, ni zapateros, ni usen de otros oficios bajos, y viles” (Ley IX)²¹⁰. Posteriormente, las Cortes de 1566 solicitaron que los oficiales mecánicos y mercaderes no pudieran ejercer cargos concejiles²¹¹. La *Recopilación de las Leyes de estos Reinos* hecha por orden de Felipe II, promulgada al año siguiente, compendió las dos leyes del siglo XV, como Ley 2 y Ley 3 del Título 1, Libro 6 e incluyó la Ley 9, Título 15, Libro 4:

Mandamos que los que hubieren vivido con cualesquier persona de estos nuestros reinos, sean obligados a pedir lo que pretendieren que se les quedare debiendo del salario y acostamiento que tuvieren de sus señores, u otro cualquier servicio que les hayan hecho dentro de tres años después que fueren despedidos de los tales señores: y que pasados aquellos, no lo puedan más pedir: excepto si mostraren haberlo pedido dentro de los dichos tres años a los dichos sus señores, y ellos no se lo hayan pagado ni satisfecho. Y esto mismo mandamos que se entienda y extienda a los boticarios, y joyeros, y otros oficiales mecánicos, y a los especieros, confiteros, y otras personas que tienen tiendas de cosas de comer: los cuales pasados tres años no puedan pedir lo que hubiere dado de sus tiendas, ni las hechuras que hubieren hecho²¹².

Recién bajo la protección de Carlos III, el *Discurso sobre el fomento de la Industria Popular*, publicado en 1774 “de orden de Su Majestad y del Consejo” introdujo como un objetivo de la reforma ilustrada española que “es también necesario borrar de los oficios todo deshonor; y habilitar a los que los ejercen para los empleos municipales de la República”²¹³. Pese a ello, más de un lustro después la cuestión continuaba en la misma situación legal: hacia 1781, Antonio Xavier Pérez y López reflexionaba que:

a la luz de una sana filosofía se reconoce con la última evidencia: que todo oficio necesario, y útil debe ser honrado, y que ningún artesano, o menestral de esta clase ha de sufrir la nota del desprecio, y de la infamia; que es una pena más atroz, que la pérdida de los bienes, y de la misma vida²¹⁴.

²¹⁰ *Ibidem*, p. 776.

²¹¹ DOMÍNGUEZ ORTIZ, *op. cit.*, p. 121.

²¹² *Recopilación de las leyes de estos reynos hecha por mandado de la magestad catholica del Rey don Philippe II nuestro señor*, Alcalá de Henares, En casa de Andrés de Angulo, 1569, f. 244v.

²¹³ [PEDRO RODRÍGUEZ CAMPOMANES Y PÉREZ], *Discurso sobre el fomento de la industria popular*, Madrid, Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1774, p. CXIX.

²¹⁴ ANTONIO XAVIER PÉREZ Y LÓPEZ, *Discurso sobre la honra y deshonor legal. En que se manifiesta el verdadero mérito de la nobleza de sangre, y se prueba que todos los oficios necesarios y útiles al Estado son honrados por las Leyes del Reyno, según las cuales solamente el delito propio disfama*, Madrid, Blas Roma, 1781, § XI, pp. 15-16.

Pérez y López argumentaba que, fuera que se evaluara al “artesano del oficio más mecánico”²¹⁵, “solamente bajo el concepto de un mero individuo de la naturaleza humana”, “como a Cristiano” o “en cuanto es Padre de familias”, podía concluirse que, por el contrario, era “digno de elogios, y de aprecio”²¹⁶ y que,

en fin, si le reconozco en calidad de vecino, y de vasallo, veo es útil, y necesario a sus compatriotas, y al Estado, proveyendo a aquellos de los vestidos, o alimentos indispensables, al menos atendidas las circunstancias del tiempo y del lugar, y sosteniendo las cargas de éste, ya personales, y ya reales y concejiles, a quien juntamente le suele aumentar los vasallos con hijos, también útiles al mismo Estado²¹⁷.

En el marco de las crecientes críticas a la nobleza ociosa y la exaltación del trabajador honrado, cuyos méritos debían ser reconocidos públicamente, el problema registra un momento clave cuando en 1781 la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid señaló al Consejo de Castilla la situación de los curtidores de Galicia, que abandonaban su ocupación por la vileza que le atribuían los estatutos gremiales. El proceso terminaría con la expedición de la real cédula de 18 de marzo de 1783, por la que el mismo monarca declaró recién casi una década después de la publicación del citado *Discurso sobre el fomento de la Industria Popular*,

que no solo el oficio de curtidor, sino también los demás artes y oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros a este modo, son honestos y honrados; que el uso de ellos no envilece a la familia, ni la persona del que los ejerce, ni la inhabilita para

²¹⁵ *Ibidem*, § XII, p. 16.

²¹⁶ “XII. Yo contemplo al artesano del oficio más mecánico, trabajando en medio de su taller, y rodeado de su familia, y a cualquier aspecto, que le miro, le encuentro digno de elogios, y de aprecio.

XIII. Si le considero solamente bajo el concepto de un mero individuo de la naturaleza humana, le veo cumpliendo en el trabajo una obligación natural de ella, sin la cual conocieron los mismos Filósofos Gentiles, y acredita la experiencia diaria, se debilita la salud, se corrompen las costumbres, y un disgusto insoportable tiraniza al espíritu.

XIV. Si le examino como a Cristiano, veo que cumple ¿Y a presencia de lo antecedente, que es una verdad de bulto, no sería el colmo de la injusticia castigar con la pena de infamia, mas atroz que la pérdida de la vida, a estos hombres, á estos Cristianos, Padres de familias, vecinos, y vasallos tan beneméritos, útiles y necesarios? ¿No son estos mas dignos de los premios y prerrogativas de la Republica, y del aprecio público, que aquellos ociosos acomodados, que para sostener el peso, que ellos mismos se causan, andan de diversión en diversión frívola, por no decir perjudicial, sin encontrar jamás el gusto, y deleite por que andan, al modo, que jamás el enfermo halla descanso por mas que se vuelva de una á otra parte en su lecho? el precepto de ganar el pan con el sudor de su frente, y también el que prohíbe el ocio, por no caer en las tentaciones.

XV. Si le miro en cuanto es Padre de familias, toco: que observa muy bien la obligación de mantenerla, y de conservar a las personas, a quienes ha dado el ser, ó que al menos están á su cargo” (*Ibidem*, §§ XII-XV, pp. 16-18).

²¹⁷ *Ibidem*, § XVI, p. 18.

obtener los empleos municipales de la República en que estén avecindados los artesanos o menestrales que los ejerciten”²¹⁸.

Con ese propósito,

mando se observe inviolablemente esta Real resolución, sin embargo de lo dispuesto en las Leyes 6 y 9, Título I, libro 4, del *Ordenamiento Real*; la 2 y 3, Título I, libro 6, y la 9, Título 15, Libro 4, de la *Recopilación* que tratan de los oficios bajos, viles y mecánicos, y todas las demás que hablen de este punto aunque aquí no se especifiquen, pues las derogo y anulo en cuanto traten y se opongan a lo referido, y quiero que en esta parte queden sin ningún efecto, como también cualesquiera otras opiniones, sentencias, estatutos, usos, costumbres y cuanto sea en contrario”²¹⁹.

La nueva legislación era harto clara y un testigo contemporáneo como Guardiola y Sáez explicaba que los mencionados oficios eran reconocidos como “honestos y honrados” y que su ejercicio no “envilece la familia ni la persona del que los ejerce, ni la inhabilita para obtener los empleos municipales de república en que estén avecindados los artesanos o menestrales”²²⁰. Pérez y López, en la segunda edición de su *Discurso sobre la honra y deshonor legal*, afirmó que la real cédula de 1783 terminaba con la acusación del Abbé Guillaume Thomas François Raynal de que España premiaba el ocio y castigaba la laboriosidad²²¹.

A pesar de ello, el Consejo de Indias en 1788, 1804 y 1807 omitió pronunciarse sobre la extensión de los efectos de dicha disposición a las Indias²²². Y mientras en la Metrópoli se discutía sobre la necesidad de terminar con la condición infamante, el Cabildo de Buenos Aires consultó a Pedro Vicente Cañete en 1777 si el “oficio de Portero de Cabildo *utrum* sea vil bajo, y despreciable, por su Naturaleza”, el letrado recordó que

²¹⁸ Real cédula de S.M. y Sres. del Consejo, por la cual se declara, que no solo el oficio de curtidor, sino también las demás artes y oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros a este modo, son honestos y honrados; y que el uso de ellos no envilece la familia, ni la persona del que lo ejerce, ni la inhabilita para obtener los empleos municipales de la República en que estén avecindados los artesanos o menestrales que los ejerciten; con lo demás que se expresa, Madrid, Imprenta de don Pedro Marín, 1783. Disponible en: <<http://www.mcu.es/archivos/lhe/servlets/VisorServlet.jsp?cod=006107>>. Acceso en: nov. 2015.

²¹⁹ *Ibidem*, [pp. 5-6].

²²⁰ GUARDIOLA Y SAEZ, *op. cit.*, parte II, cap. II, p. 40.

²²¹ ANTONIO JAVIER PÉREZ Y LÓPEZ, *Discurso sobre la honra y deshonor legal*. 2ª. edición, Madrid, 1786, p. 222. Mariluz Urquijo menciona esta circunstancia (MARILUZ URQUIJO, *El agente... cit.*, p. 136).

²²² MARILUZ URQUIJO, *El agente... cit.*, pp. 136-137.

es cierto que es oficio público, el de portero: pues sirve a la República, y con este respecto se le debe salario de los propios de la ciudad, como resuelve Bovadilla en su *Política* lib. 5, cap. 4, de lo que colige el citado A. lib. 3, cap. 7, que para semejantes oficios no se deben elegir personas viles apoyando su doctrina con la ley *supercreandis* lib. 10, del código *de jure fisco* y yo adelanto otra reflexión: y es que si fuera vil el oficio de portero sería inútil advertencia, que para él no se eligiesen personas viles: supuesto que tanto monta la vileza que viene de la persona cuanto la que se deriva del oficio: luego el no quererse personas viles, para estos oficios, es porque con ellas es incompatible la vileza²²³.

El dictamen de Cañete deja claro que en el Buenos Aires virreinal, por lo menos hasta su redacción, continuaba vigente la prescripción de que las personas que se tenían por “viles” no debían desempeñar oficios públicos, pero no se refiere a si el ejercicio de oficio mecánico todavía era señalado como excluyente para la función pública. En una generalización sobre la época virreinal, Manuel Moreno recordaba que los “hijos del país” que tenían “un origen decente” tenían a su alcance “medios de vivir [...] muy estrechos”, pues “no podían rebajarse al ejercicio de las artes u oficios”²²⁴. Ahora bien, al considerar en 1801 la admisión de individuos que ejercieran “oficios viles y mecánicos” a la Sociedad Patriótica que planeaba establecer en Buenos Aires, Francisco Cabello y Mesa manifestó que sobre ese “punto se ha de tener presente la real cédula de 18 de marzo de 1783”²²⁵. También señala dicha real cédula Juan Hipólito Vieytes, en 1802, al comentar que

nuestro Augusto Soberano tiene declarados, a los oficios y la artes, como a ocupaciones compatibles con la nobleza,²²⁶ sin duda para abrir esta nueva puerta al recurso de aquellas familias pobres y decentes, que sin esta formal declaración querrian antes ser víctimas de la indigencia, que envilecer su origen en el ejercicio de la industria²²⁷.

Si se concentra la atención en la *praxis* efectiva del Cabildo porteño, se observa que, en el universo de alcaldes de barrio de Buenos Aires identificados en el período

²²³ *Acuerdos...* Buenos Aires, 1929, 3ª serie, t. VI, pp. 112-113.

²²⁴ MANUEL MORENO, “Vida y memorias del doctor Mariano Moreno” [1812], en: SENADO DE LA NACIÓN, *Biblioteca de Mayo...* t. II, cit., p. 1156.

²²⁵ Francisco Antonio Cabello y Mesa a Bertoldo Clark, en: *Telégrafo mercantil...* t. I, n. 26, 27 de junio de 1801, ff. 202-203. Sobre los estatutos de la mencionada Sociedad, v. MÓNICA P. MARTINI, “Estatutos de la Sociedad Patriótica de Buenos Aires propuesta por Cabello y Mesa (1801-1802)”, en: *Revista de Historia del Derecho*, n. 26, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1998, pp. 297-320.

²²⁶ En nota en el original: “Por real cédula de 18 de marzo de 1783”.

²²⁷ “Educación moral”, en: *Semanario de Agricultura, Industria y Comercio*, Buenos Aires, t. I, n. 4, 13 de octubre de 1802, p. 31.